

N°1 2025

Revista de
**ECONOMÍA
JUSTICIALISTA**
Arturo Jauretche

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD NACIONAL

MAPA DE CAMINOS
DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

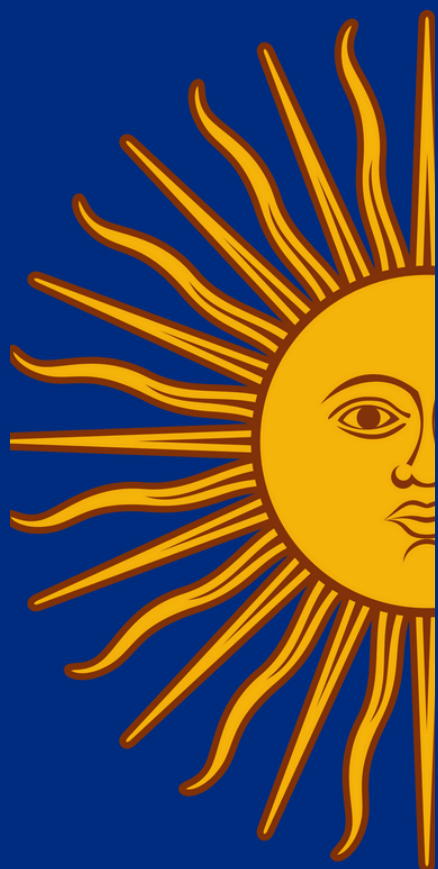
AÑO 1946



**JUSTICIALISMO
ECONÓMICO**



ESCALA
1:2.000.000
Escuela Justicialista
Néstor Kirchner



DIRECTOR

Santiago Fraschina

COORDINACIÓN

Angelo Vergara

Yanina Belén Fernandez

01 Editorial
Santiago Fraschina

03 Coyuntura
Dos salvavidas por año: la macro disfuncional de Milei

12 Argentina ante el desafío de las plataformas

22 Genealogía y fundamentos del pensamiento libertario

29 Deuda y fuga: la valorización financiera como obstáculo al desarrollo

39 Apuntes Para un Nuevo Proyecto Nacional

47 El rol del Estado en la generación de beneficios nacionales desde la electromovilidad y la energía exportable

63 Zonceras Económicas: El modelo económico justicialista fue el culpable del endeudamiento

67 Zonceras Económicas: El Peronismo es anti-inversión

72 Pensamiento económico
La desinflación en la era Milei

87 Pensamiento económico
El Modelo Económico Justicialista

91 Entrevista:
Delfina Rossi

101 Efemérides
A 80 años del 17 de octubre

113 Reseña:
Antonio Cafiero el Estadista Bonaerense

116 Reseña:
Entre la trinchera y la cátedra: una lectura de Finanzas desde la Periferia

EDITORIAL



El Editorial constituye el espacio donde la revista expresa su perspectiva conceptual y su posición frente a los debates contemporáneos de la economía argentina. Desde una mirada inspirada en los principios del Justicialismo Económico, este apartado orienta la lectura del número, define las preocupaciones centrales de la publicación y presenta las líneas de investigación y reflexión que guían el trabajo del equipo editorial.

Hacia una economía del trabajo, la producción y la justicia social

Por Santiago Fraschina

El nacimiento de la Revista de Economía Justicialista: Arturo Jauretche no es un hecho casual, sino una respuesta necesaria a un tiempo de restauración neoliberal y desposesión nacional. Surge del convencimiento de que la batalla por la independencia económica no se libra sólo en los despachos de gobierno o en los mercados, sino también, y sobre todo, en el terreno de las ideas. En un contexto donde el pensamiento dominante intenta reducir la economía a la lógica fría del mercado y la ganancia, esta revista se propone recuperar el sentido profundo del pensamiento justicialista: una economía al servicio del pueblo, del trabajo y de la Patria.

Esta publicación busca, además, intervenir en la discusión sobre los tres modelos económicos que hoy disputan el rumbo del país: el modelo neoliberal financiero, el modelo desarrollista y el modelo justicialista. Porque toda política económica expresa un proyecto de Nación y una concepción de sociedad. No hay neutralidad posible cuando se define quién produce, quién se beneficia y quién queda afuera. De ese debate depende si la Argentina continúa por la senda de la dependencia o retoma el camino de la independencia económica y la justicia social.

Desde la perspectiva justicialista, la economía es una construcción política y social orientada al servicio del pueblo y la soberanía nacional, no un mecanismo autónomo guiado por intereses de mercado. En oposición a las doctrinas que conciben al Estado como un obstáculo o un garante de rentabilidad, el justicialismo lo reconoce como el instrumento esencial para planificar el desarrollo, ordenar la producción y asegurar la justicia social. Esta concepción, que inspiró las políticas de independencia económica, industrialización y pleno empleo a lo largo de la historia argentina, sigue siendo hoy una guía para enfrentar los desafíos de la dependencia contemporánea.

El primer modelo, el neoliberal-financiero, se basa en la primacía del capital especulativo y en la subordinación de la política a los intereses del mercado. Promueve la apertura irrestricta, la desregulación, las privatizaciones y la reducción del Estado a su mínima expresión. Su lógica es la del ajuste y la desigualdad: concentra riqueza, destruye la producción nacional y desarticula el tejido social. En nombre de la “eficiencia” y la “modernización”, impone un orden económico que expulsa a las mayorías y entrega los resortes estratégicos de la Nación.

En segundo lugar, se presenta el modelo desarrollista, que en nombre del crecimiento y la modernización impulsa la inversión extranjera en sectores estratégicos y la expansión de las exportaciones industriales. Si bien reconoce la importancia de la producción y la generación de divisas, su estructura de fondo permanece dependiente del capital extranjero, la tecnología importada y la competitividad basada en salarios bajos. Promueve una industrialización subordinada, donde las decisiones sobre la acumulación y el crédito

Quedan en manos del capital concentrado. Su límite estructural radica en que reproduce la dependencia y las desigualdades del desarrollo periférico, sin transformar la estructura de poder económico.

Frente a ambos, **el Modelo Económico Justicialista** plantea una tercera posición: la construcción de una economía al servicio del pueblo y de la Nación. No se trata de elegir entre mercado o Estado, sino de organizar la economía como una comunidad, donde el trabajo, el capital y el Estado actúan de manera armónica bajo una planificación orientada al bien común. Este modelo entiende que la industrialización, la producción nacional y la distribución justa del ingreso son pilares inseparables de la independencia económica.

Sin embargo, este modelo no se construye en el vacío. Toda propuesta nacional y popular debe abrirse paso en un contexto adverso, donde las fuerzas del neoliberalismo intentan reinstalar la dependencia bajo nuevas formas.

La Argentina vive hoy un proceso de recolonización económica que intenta desarticular las conquistas sociales, fragmentar el aparato productivo y subordinar la política a los intereses del capital financiero internacional. En ese escenario, la Revista de Economía Justicialista: Arturo Jauretche se propone como un espacio de pensamiento crítico, formación y militancia académica, comprometido con la reconstrucción del ideario económico nacional. No se trata sólo de estudiar la economía, sino de pensarla desde el pueblo argentino, recuperando las categorías, los valores y los horizontes que nos legaron Perón, Evita, Néstor y Cristina.

Jauretche enseñó que las batallas de la dependencia se libran en el campo de la cultura. Por eso esta revista lleva su nombre: porque entiende que la lucha contra el coloniaje económico exige, antes que nada, una batalla cultural por la recuperación de la conciencia nacional. Frente a la colonización pedagógica que pretende convencernos de que el ajuste es inevitable y que el mercado es el único orden posible, reafirmamos que hay otra economía posible: la economía del trabajo, la producción, la comunidad y la justicia social.

Cada número de esta revista buscará aportar a esa reconstrucción. Será un espacio para el análisis teórico, la investigación aplicada, la divulgación académica y el debate político-económico, siempre desde una perspectiva nacional, popular y latinoamericana. Entendemos que no hay desarrollo sin soberanía, ni soberanía sin Estado, ni Estado sin pueblo organizado.

La Revista de Economía Justicialista: Arturo Jauretche nace, entonces, como una herramienta colectiva para pensar el presente y proyectar el futuro. Una publicación que no pretende ser neutral, porque la neutralidad, en tiempos de dependencia, es complicidad. Su compromiso es con la Patria, con el trabajo y con la justicia social.

INFORME DE COYUNTURA

Este apartado presenta una lectura crítica de la coyuntura económica argentina desde los principios del Justicialismo Económico. El informe analiza cómo las decisiones de política pública, los movimientos del capital financiero y los condicionamientos externos impactan en el trabajo, la producción y la soberanía nacional, ofreciendo interpretaciones situadas frente al discurso neoliberal



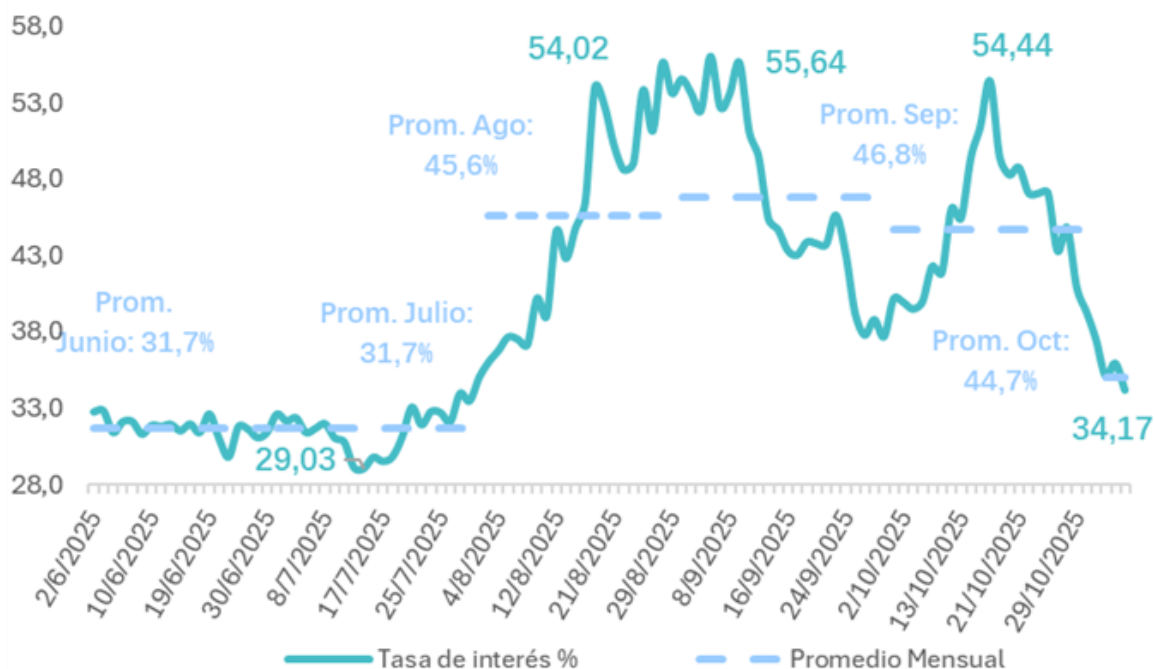
Dos salvavidas por año: la macro disfuncional de Milei

Por Félix Schmidt y Sergio Chouza

Hace cuatro meses el Gobierno nacional anunció que dejaría de emitir letras fiscales de liquidez, un activo respaldado por el BCRA buscando extender los plazos de financiación, y sanear el castigado balance de la institución monetaria. A la fecha de vencimiento de estas letras, se autorizó el canje por letras del tesoro con una de similares características, pero con el respaldo del tesoro nacional.

El decreto autorizaba hasta el canje por \$28 billones; mientras que se estima que \$17 billones fueron a diferentes alternativas de inversión propuestas por el gobierno, mientras que aproximadamente \$10 billones, no se supo con exactitud su destino, y en el gobierno había temor que presionaran al tipo de cambio; por ello el tesoro abrió una licitación especial con el objetivo de mantener un cierto control sobre estos pesos y que no impacten sobre el tipo de cambio; pero esto generó una alta volatilidad en las tasas de interés.

Tasa de interés de referencia a 30 días de plazo y su promedio mensual BCRA



Elaboración propia en base BCRA

En el comportamiento de las tasas de interés se pueden observar las inconsistencias en el desarme de las LEFI's como instrumento, haciendo que el gobierno, tenga que convalidar tasas de interés más altas, siendo

incompatible con el objetivo de mantener a raya a la inflación y pagando con nivel de actividad, sus incongruencias en el plano financiero.

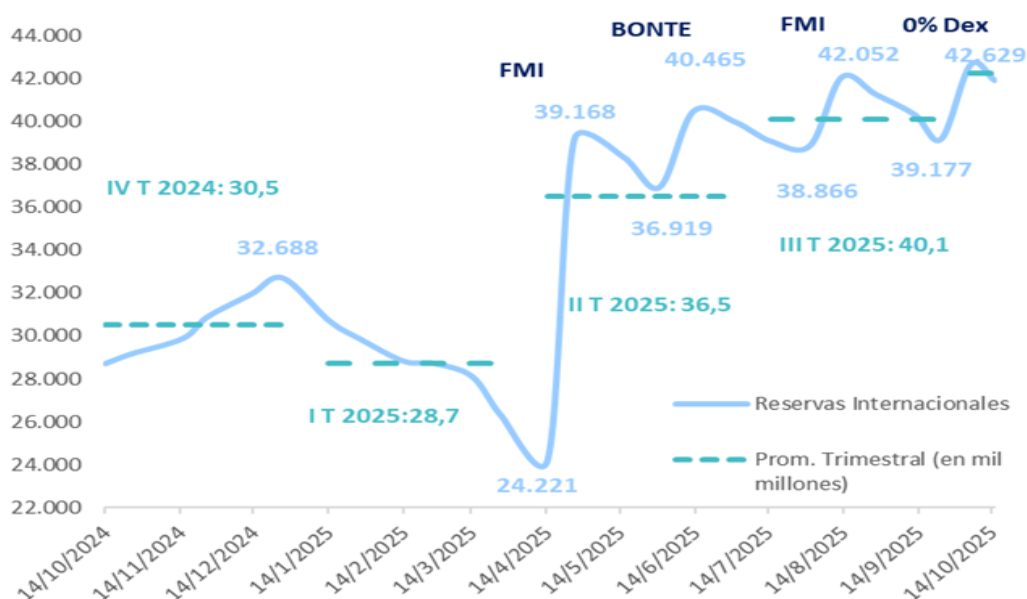
La administración de Javier Milei, se aferró a atrasar el tipo de cambio como parte de una estrategia de cara a la contienda electoral donde se juega parte de la gobernabilidad para el segundo tramo de su mandato. Tras dejar atrás un modelo de crawling peg al 1% mensual, con el cual tenía una sangría de reservas internacionales, debido a que los niveles de inflación se encontraban por encima de esos guarismos, haciendo que el dólar se abarate respecto del resto de los bienes en la economía doméstica; generando un combo de atraso cambiario, deterioro en el balance comercial y su consecuente pérdida de reservas internacionales.

Esto ocasionó consecuencias directas en la balanza comercial y cambiaria, donde acompañado por una serie de medidas que apoyaron la flexibilidad en las importaciones, el país vio una avalancha de productos extranjeros disputando terreno a la producción local; como un mayor apetito por parte de los ahorristas a dolarizarse, aumentando la presión a la restricción externa que caracteriza la economía de nuestro país.

Las variaciones en las reservas internacionales de nuestro país nos permiten mostrar estos desequilibrios y la necesidad constante del gobierno de financiamiento externo para mantener un cierto nivel de equilibrio cambiario, condición necesaria para mantener cierto control sobre la inflación, que son los principales logros que la administración Caputo-Milei pueden exhibir de cara a la contienda electoral.

El respaldo electoral a La Libertad Avanza en las elecciones nacionales de finales de octubre, afectó fuertemente a las expectativas del mercado, calmó todo apetito dolarizador y reversó la tendencia alcista del dólar pre-electoral, aunque continúa habiendo cautela en los mercados y la cotización de la moneda extranjera, continúa en una tendencia creciente

Reservas Internacionales en poder del BCRA Oct-24/ Oct-25



Fuente: Elaboración propia en base a BCRA

El gobierno recibió el primer desembolso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por US\$12.000 millones, sumados a US\$1.500 millones por parte de otras organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina (ex CAF); también se sumó un REPO por US\$2.000 millones por parte de Bancos Privados, generando un incremento en las arcas nacionales de US\$15.500 millones.

Al poco tiempo, el gobierno salió en búsqueda de financiamiento privado, que mediante la colocación de los BONTE obtuvo US\$1.000 millones y una liquidación del sector agropecuario que acompañó a las expectativas con un ingreso de divisas por ventas superior a los US\$3.000 millones.

Posteriormente el Fondo Monetario Internacional realizó el desembolso de US\$2.000 millones como parte del programa acordado meses atrás, por el cumplimiento del acuerdo, posibilitándole una nueva recuperación de reservas por parte del BCRA.

En una medida desesperada el gobierno definió tomar una medida en el marco de la previa electoral a las elecciones en Buenos Aires para eliminar los derechos de exportación y poder tener acceso a las divisas, medida que tan solo duró 3 días, debido a que las principales exportadoras negociaron una liquidación extraordinaria por US\$7.000 millones en medio de un clima cambiario complejo, por la presión dolarizadora.

Posteriormente el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció un rescate que con el devenir de los días se conoció que será en forma Swap de monedas con Argentina por US\$20.000 millones, para “salvar a la Argentina de la crisis de liquidez”; en el encuentro de Milei con Trump, el presidente estadounidense condicionó la ayuda al triunfo del libertario en las elecciones legislativas de finales de octubre, hecho que generó incertidumbre en los mercados y reavivó la pulsión dolarizadora por parte de los inversores.

El escenario tras el triunfo nacional de La Libertad Avanza, frenó cualquier presión dolarizadora, debido a que el gobierno se vió fuertemente respaldado en las urnas, y le dio iniciativa al gobierno para continuar aplicando políticas de ajuste.

Cotización del dólar Oficial y Blue (promedio mensual) Oct-24/ Nov -25

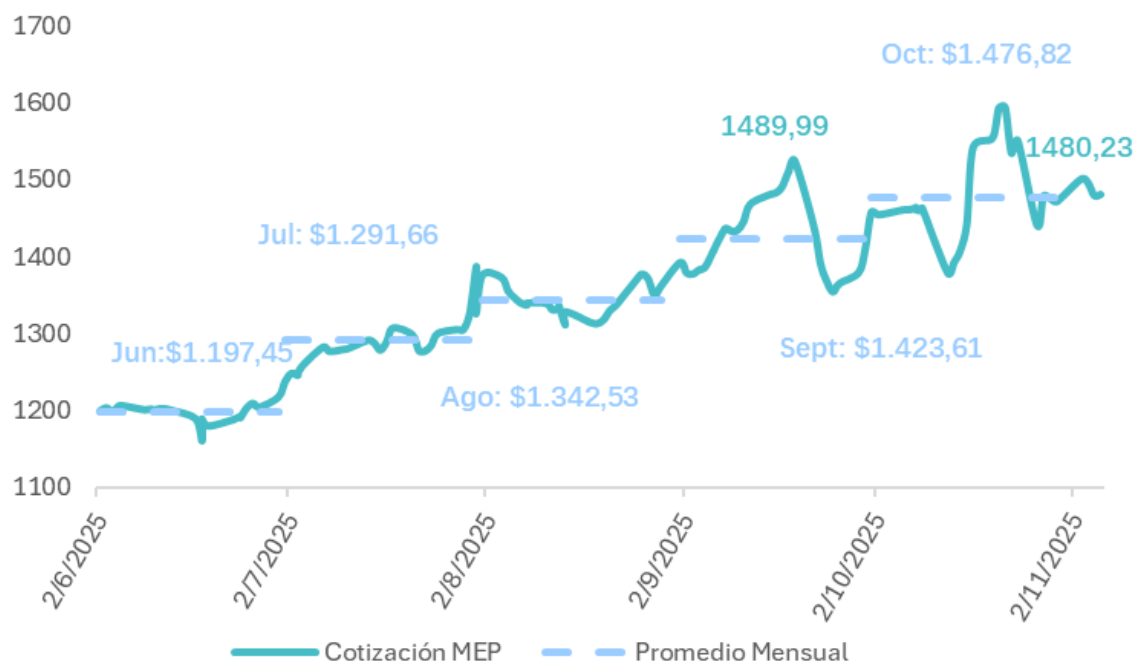


Elaboración propia en base a BCRA y Ambito.com

Estos movimientos en las Reservas Internacionales se terminan dando como respuesta a las diferentes crisis cambiarias que hemos tenido durante este último año, esto se puede observar mediante la comparación de los tipos de cambio promedio mensuales, tanto en la cotización oficial como en el mercado informal, que a pesar de un comportamiento disímil, se equipara a partir de abril con la salida del cepo para las personas físicas y comienzan a tener un comportamiento similar, con una aceleración marcada a partir del mes de junio de 2025, para ambas cotizaciones

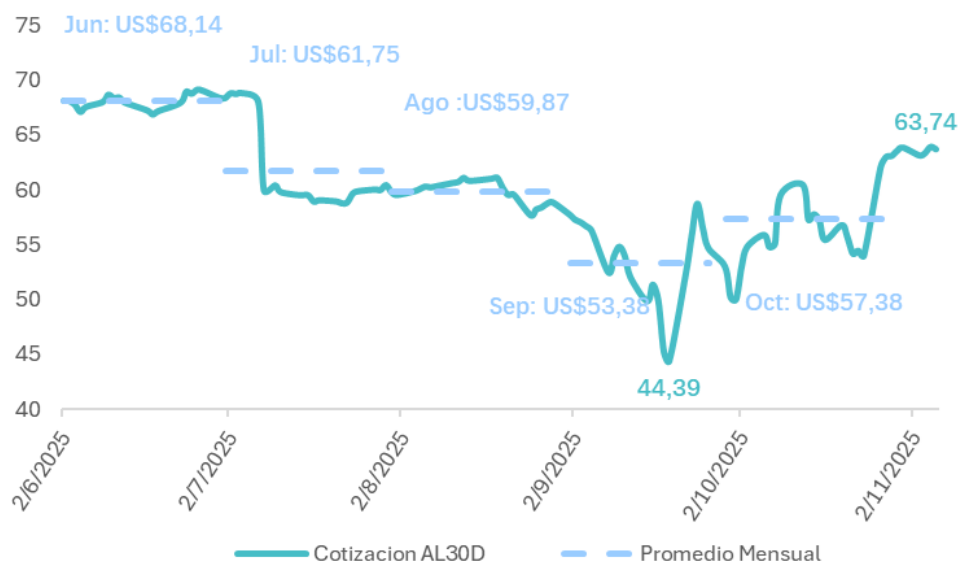
La cotización del dólar MEP, mediante el bono AL30 es una de las referencias para tomar una mayor dimensión de la incertidumbre cambiaria que está viviendo la Argentina, donde también se puede observar la tendencia creciente del tipo de cambio a partir del desarme de las LEFI's. Entre 1942 y 1951 la estructura de las importaciones argentinas se transformó profundamente, reflejando el paso de un modelo primario-exportador a uno de industrialización sustitutiva. Los bienes de consumo no durables, que en 1942 representaban el 32,3% del total, cayeron al 7,1% en 1951, mostrando la expansión de la producción local en ramas como textiles y alimentos.

Cotización del dólar MEP, mediante AL30 y sus promedios mensuales Jun-25 / Nov-25



Fuente: Elaboración propia en base a A3 Mercados

Cotización del bono AL30D y su promedio mensual en US\$ Jun-25 / Nov-25



Otra de las aristas de análisis que podemos observar es a través del comportamiento del índice de Riesgo País, donde se ve claramente un aumento de la desconfianza de los inversores en deuda Argentina, generado por la misma incertidumbre en lo que respecta a la disponibilidad de dólares, haciendo que endeudarse a la Argentina le cueste hasta 8 puntos porcentuales por encima del costo de principios de año, y ubicándose

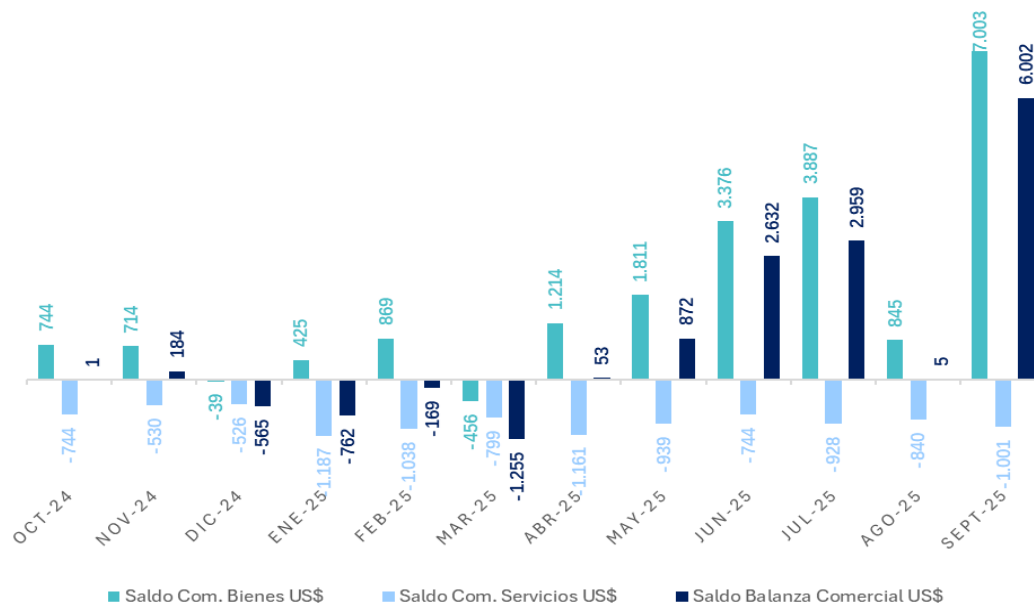
en los mismos niveles del año anterior, haciendo insostenible el endeudamiento privado bajo estas condiciones. Tras el triunfo del oficialismo en las elecciones y el respaldo social que recibió este tipo de medidas de austeridad fiscal, el riesgo país descendió a prácticamente la mitad en tan solo una semana, abaratando los costos del endeudamiento en nuestro país, y el gobierno pueda reafirmar su política de finanzas combinada con austeridad fiscal.

Riesgo País Argentina Oct-24/ Nov-25

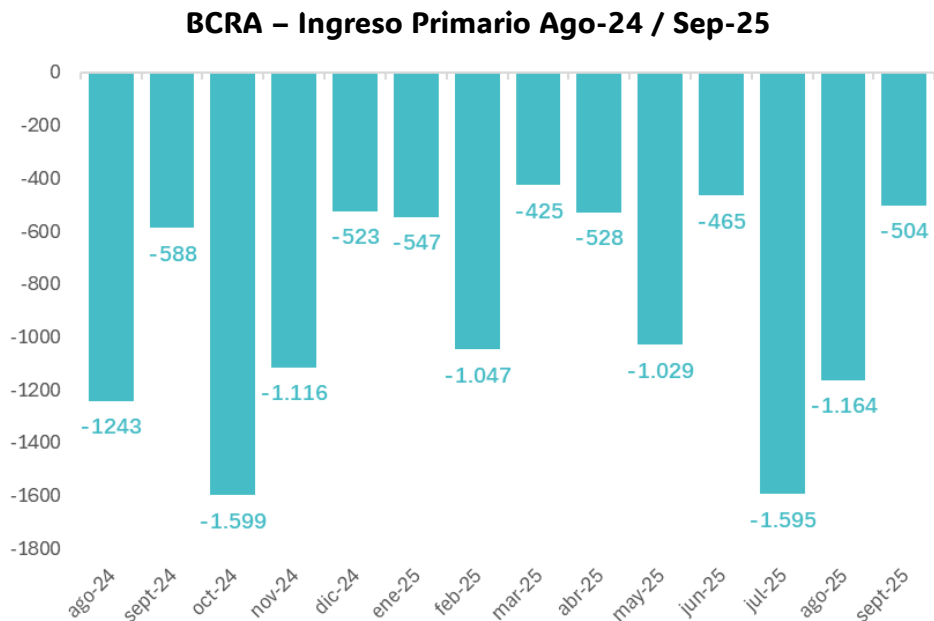


La balanza de cobros de bienes es una de las principales fortalezas de la administración Milei, donde se mantiene claramente superavitaria, en cambio el balance de servicios le erosiona considerablemente este logro y los resultados a partir del II T de 2025 han hecho que, en el acumulado de los últimos 14 meses, el resultado comercial sea positivo en US\$ 9.957 millones.

Resultado de la Balanza de cobros de Bienes y Servicios del BCRA Ago-24 / Sep-25

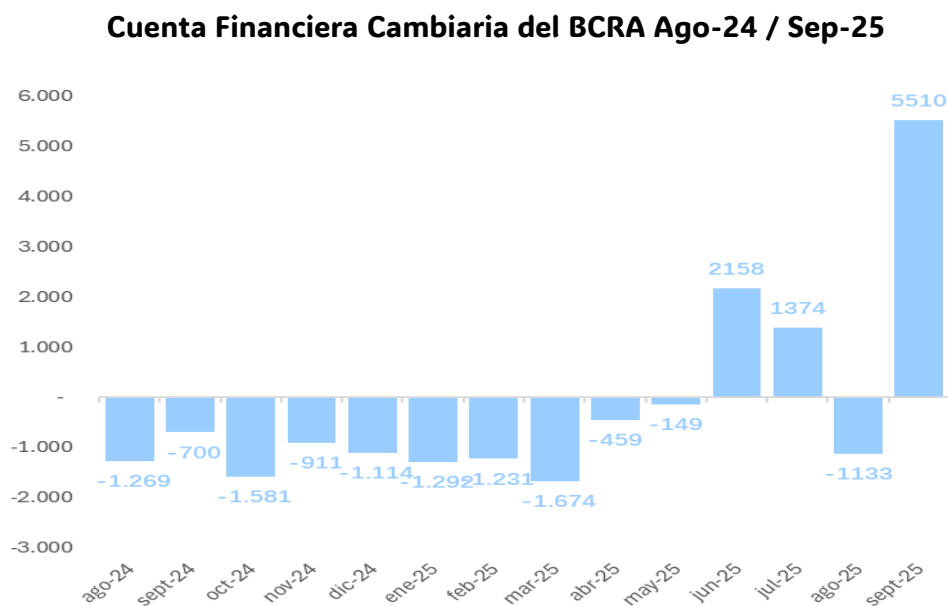


La contrapartida del resultado comercial es la cuenta de “Ingreso Primario” del BCRA, donde el gobierno acumula resultados negativos, que conforman el actual escenario de crisis cambiaria, haciendo que la solidez comercial no alcance para satisfacer la demanda de dólares de pago de intereses, utilidades y dividendos entre otros; arrojando un resultado negativo de US\$12.374 millones para los últimos 14 meses.



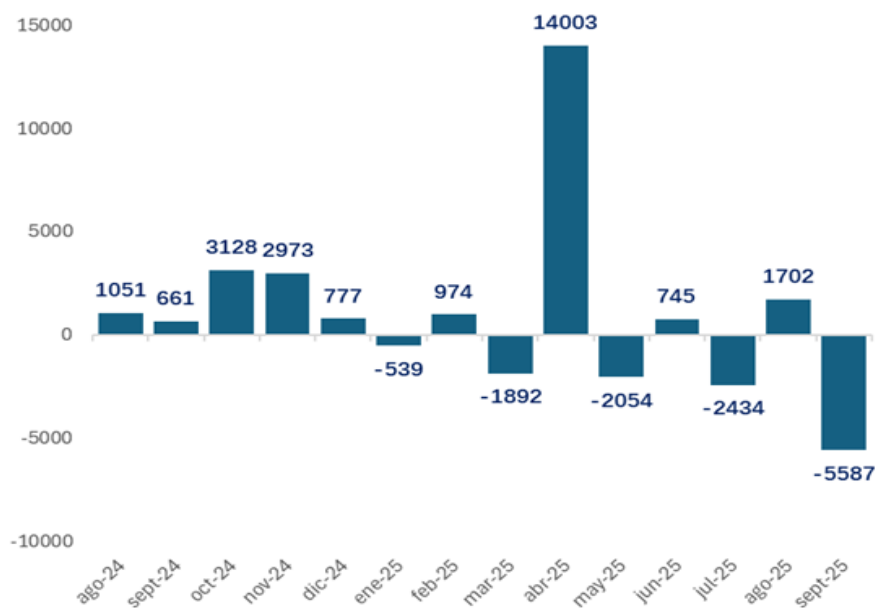
Elaboración propia en base a BCRA

La cuenta cambiaria total, arroja un saldo acumulado para los últimos 14 meses de aproximadamente US\$2.500 millones en negativo, es decir, el gobierno ha tenido que sacrificar esta cantidad de reservas para su operatoria normal. La tendencia durante el último año ha sido la pérdida de reservas a excepción de los meses de junio, julio y septiembre donde ha podido recuperar parte de las reservas por las situaciones descriptas.



Los resultados de la cuenta financiera son un resumen de este vaivén cambiario que está viviendo la Argentina en medio de la contienda electoral, consecuencias de un tipo de cambio atrasado, mayor endeudamiento, expectativas de devaluación crecientes y rescates o salvavidas, que le están posibilitando al gobierno llegar con una cierta “pax cambiaria” con un costo alto para el futuro de los argentinos.

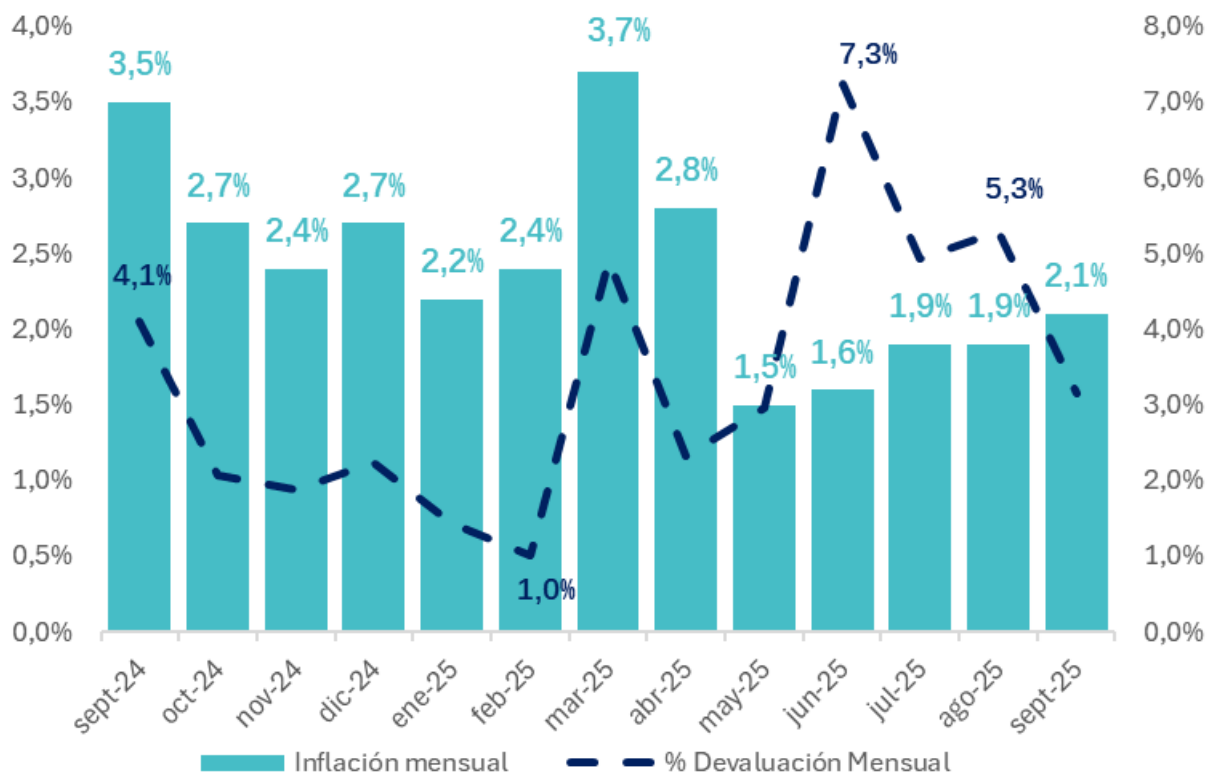
Cuenta Financiera del BCRA Ago-24 / Sep-25



Elaboración propia en base a Balance Cambiario del BCRA

El comportamiento de la inflación es una de las principales variables a tener en cuenta con la inestabilidad cambiaria, el gobierno apostó a poder controlar el aumento de los precios utilizando, además del ancla cambiaria, un ancla en el consumo generando sectores que están en niveles de consumo históricamente bajos, como el consumo de carnes y otros alimentos. Como contrapartida, podemos observar que hay un cambio de comportamiento a partir del segundo trimestre, donde el dólar oficial comienza a aumentar su volatilidad, dentro del esquema de flotación entre bandas, con un precio más elevado, mientras que la inflación, tiene un comportamiento algo más estable manteniendo una tendencia levemente creciente. Es decir hasta abril, se refleja un comportamiento en igual sentido entre devaluación e inflación, a partir de ese mes podemos afirmar que hay “inflación contenida” o que hay un mayor efecto de las cantidades como ancla inflacionaria.

Inflación mensual y % de devaluación mensual del Tipo de Cambio Oficial Sep-24 / Sep - 25



Elaboración propia en base a IPC-INDEC y BCRA

gobierno definió alinearse completamente con los Estados Unidos a cambio de un rescate, mediante un swap de monedas y otras herramientas propuestas por el tesoro norteamericano, a pesar de las intervenciones por parte del gobierno norteamericano y bancos amigos que también están operando en función de los intereses de la administración Milei. Mediante la supervisión directa del secretario del tesoro estadounidense y la impronta política de la administración Trump, le solicitaron públicamente que nuestro país deje de negociar con China, hecho que le valió críticas oficiales de parte de Beijing a las declaraciones de Bessent donde afirman que Argentina “no es el patio trasero de ningún país” y que es libre de su desarrollo.

Argentina eligió un tipo de cambio atrasado y una apertura importadora, con una tutela estadounidense en lo que respecta a las definiciones económicas, en la que se le exige abiertamente “ir dejando de lado a China”, país que llegó a ser el principal socio comercial de la Argentina. La economía estadounidense es muy competitiva para el perfil comercial de Argentina y el costo del endeudamiento y el tutelaje económico-político será

No solo que Argentina se deberá hacer cargo de este nuevo préstamo político, sino que también lo deberá hacer estando bajo la tutela económica y política de Estados Unidos, con los cuales se tiene una economía con una producción agropecuaria muy competitiva a la producción norteamericana existiendo la posibilidad de sujetar aún más la producción local a una dependencia de las necesidades del gobierno de los Estados Unidos, con un costo muy alto para la sociedad argentina en su conjunto.

ARTICULOS

En esta sección se presentan artículos que abordan problemáticas económicas, sociales y productivas desde la perspectiva del Justicialismo Económico. Los autores recuperan la tradición nacional y popular para interpretar procesos contemporáneos, proponer alternativas de política pública y disputar sentidos frente al neoliberalismo financiero

Argentina ante el desafío del capitalismo de plataformas

Por Augusto Soberon

1. Introducción

El siglo XXI se caracteriza por una transformación digital que no puede comprenderse únicamente como un proceso de modernización tecnológica, sino como una mutación estructural en la lógica de acumulación del capitalismo global. Si en el siglo XX la industrialización y la financiarización fueron las fuerzas hegemónicas, hoy el dato se ha convertido en el recurso estratégico por excelencia. La economía de plataformas constituye la expresión más clara de este fenómeno, al articular la extracción de datos con la intermediación digital, el control algorítmico y la concentración de poder en pocas corporaciones.

Este proceso hunde sus raíces en las últimas décadas del siglo pasado. Desde la expansión de internet en los años noventa hasta la consolidación de gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook y Apple, la economía digital se configuró como un nuevo régimen de acumulación. La primera “burbuja .com” (1997-2001) mostró tanto la fragilidad como el potencial de este sector: si bien numerosos startups desaparecieron, las que sobrevivieron lograron consolidar una posición dominante al aprovechar el efecto de red y la creciente capacidad de monetizar información personal y colectiva.

La especificidad de este nuevo paradigma radica en que la infraestructura digital no solo sostiene la comunicación y el entretenimiento, sino también el comercio, la producción, el transporte, la educación y la salud. En otras palabras, lo digital dejó de ser un sector más de la economía para convertirse en la columna vertebral de la vida social contemporánea. El carácter aparentemente inmaterial de lo digital —

encapsulado en metáforas como “la nube”— encubre una materialidad pesada: millones de kilómetros de cables submarinos, redes de telecomunicaciones, satélites, servidores y data centers que consumen ingentes cantidades de electricidad, agua y minerales críticos (Crawford, 2021).

“lo digital dejó de ser un sector más de la economía para convertirse en la columna vertebral de la vida social contemporánea.”

Frente a esta realidad, diversos autores han conceptualizado la emergencia de un capitalismo de plataformas (Srnicek, 2018), también denominado capitalismo de vigilancia (Zuboff, 2019) o capitalismo infraestructural (Bratton, 2016). Aunque difieren en matices, todos coinciden en señalar que el control sobre los datos y los algoritmos constituye la nueva fuente de poder económico y político. Las plataformas ya no son simples intermediarias: se erigen en nodos centrales de la economía global, capaces de dictar reglas, fijar precios y modelar comportamientos sociales.

Este fenómeno adquiere una relevancia particular en América Latina, una región históricamente atravesada por dinámicas de dependencia y subordinación tecnológica. La digitalización no escapa a esta lógica. Si bien la penetración de internet y de plataformas como Mercado Libre, Rappi o Uber se ha acelerado, la región sigue careciendo de infraestructuras propias de almacenamiento y procesamiento avanzado de datos, lo que implica una fuga de valor hacia los países del norte. Además, las debilidades en los sistemas energéticos y en las políticas de innovación limitan la posibilidad de construir un modelo autónomo y sostenible. En esta línea, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025) elaborado por CEPAL y CENIA confirma que la región sigue rezagada en infraestructura crítica, inversión y gobernanza digital. Pese al crecimiento del ecosistema digital, América Latina apenas capta el 1,12% de la inversión mundial en IA, lo que refuerza su condición periférica y dependiente.

El caso de Argentina refleja estas tensiones de manera nítida. Por un lado, existe un ecosistema digital dinámico, con startups y plataformas locales que han alcanzado proyección regional. Por otro lado, la infraestructura crítica —particularmente los centros de datos de gran escala— se encuentra mayormente fuera del país, lo que genera dependencia tecnológica y pérdida de soberanía sobre los datos. A ello se suma un contexto energético frágil, con restricciones recurrentes en el suministro eléctrico y tensiones derivadas de la transición hacia energías renovables.

“América Latina, una región históricamente atravesada por dinámicas de dependencia y subordinación tecnológica. La digitalización no escapa a esta lógica.”

A esta problemática infraestructural se agrega el impacto laboral. El modelo de negocios de las plataformas, caracterizado por su flexibilidad extrema y su baja inversión en activos, se traduce en una fragmentación del empleo y en la consolidación de un precariado digital (Standing, 2011). Los trabajadores de aplicaciones de delivery o transporte en Argentina ilustran esta dinámica: sometidos a la gestión algorítmica, sin derechos laborales plenos y obligados a absorber los costos y riesgos de la actividad.

La hipótesis central de este trabajo sostiene que la economía de plataformas, lejos de constituir un mero progreso tecnológico, reproduce y profundiza las dinámicas de concentración y dependencia propias del capitalismo global. La acumulación de capital financiero especulativo ha financiado la expansión de una infraestructura digital global que, basada en la extracción intensiva de datos, genera una demanda energética creciente y crítica. En el caso argentino, esta demanda choca con los límites estructurales de la matriz energética y con la dependencia de infraestructuras externas, lo que posiciona al país en desventaja frente a otras economías. Al mismo tiempo, el modelo laboral de las plataformas produce una precarización sistémica que socava derechos conquistados históricamente.

2. Marco Teórico: El Capitalismo de Plataformas y la Lógica de Acumulación

2.1. Definición y Fundamentos del Capitalismo de Plataformas

La economía de plataformas se ha convertido en una de las categorías centrales para comprender las transformaciones actuales del capitalismo. Según Srnicek (2018), una plataforma puede definirse como una infraestructura digital que posibilita interacciones entre distintos grupos de usuarios (proveedores, consumidores, anunciantes, trabajadores) y que, al mismo tiempo, extrae y monopoliza datos de dichas interacciones. El modelo de negocio radica en aprovechar el efecto de red —cuantos más usuarios participan, mayor es el valor de la plataforma— y en transformar los datos recopilados en recursos económicos estratégicos.

Srnicek distingue entre distintos tipos de plataformas:

- Plataformas publicitarias (ej. Google, Facebook), cuyo negocio consiste en recolectar datos de los usuarios para segmentar publicidad.
- Plataformas de la nube (cloud), como Amazon Web Services o Microsoft Azure, que proveen servicios de almacenamiento y procesamiento a terceros.
- Plataformas industriales, vinculadas a la automatización y la gestión de cadenas productivas.
- Plataformas de productos, como Apple, que articulan hardware, software y ecosistemas de aplicaciones.
- Plataformas lean, típicamente empresas como Uber o Rappi, que reducen al mínimo sus activos físicos y externalizan costos, operando como intermediarias puramente digitales.

Aunque heterogéneas, todas comparten una misma lógica: el monopolio de datos como insumo esencial y la construcción de barreras de entrada que consolidan posiciones dominantes.

En paralelo, Zuboff (2019) introduce el concepto de capitalismo de vigilancia, que enfatiza la dimensión de control social inherente a estas dinámicas. Según la autora, el capital ya no se limita a explotar trabajo asalariado, sino que extrae lo que denomina “excedente de comportamiento”: la experiencia humana convertida en datos que son analizados, modelados y utilizados para predecir —e incluso modificar— conductas futuras. En este esquema, la tecnología algorítmica y la inteligencia artificial no solo crean valor económico, sino que también redefinen las condiciones de autonomía y libertad de los individuos.

Este doble enfoque —plataformas como infraestructuras de acumulación y como dispositivos de vigilancia— permite comprender por qué la digitalización ha dejado de ser un fenómeno marginal y se ha convertido en el nuevo núcleo organizador del capitalismo global.

2.2. Financiarización y Expansión de la Infraestructura Digital

El crecimiento explosivo de las plataformas digitales no puede explicarse únicamente por la innovación tecnológica. La financiarización desempeñó un papel central en este proceso. De acuerdo con Piketty (2014), la acumulación de capital financiero especulativo, especialmente en las décadas recientes, buscó nuevos espacios de rentabilidad, encontrándolos en la promesa de los mercados digitales.

Las plataformas, al basar su rentabilidad en la expectativa de efectos de red y de apropiación de datos, atrajeron inversiones masivas de capital de riesgo y de grandes fondos financieros. Esta dinámica permitió que compañías deficitarias durante años —como Amazon en sus primeras dos décadas— pudieran sostener su expansión a costa de endeudamiento, financiamiento especulativo y reinversión continua.

Rikap (2021) denomina a esta dinámica Monopolio Intelectual del Capital, para resaltar que el poder no reside únicamente en la infraestructura material, sino también en el control sobre los conocimientos,

algoritmos, patentes y estándares tecnológicos. Este monopolio intelectual otorga a las empresas superestrellas (Orlik, Jiménez & Sam, 2021) la capacidad de consolidar posiciones dominantes y definir las reglas del juego económico global.

De esta manera, la economía de plataformas se sostiene en un entramado donde confluyen:

1. Innovación tecnológica en software, hardware y algoritmos.
2. Inversión financiera masiva que asegura expansión global.
3. Control de la infraestructura digital (cables submarinos, data centers, satélites).
4. Concentración de propiedad intelectual y datos, que refuerza las barreras de entrada.

2.3. La Lógica Exponencial: Datos, Algoritmos y Energía

El tercer pilar del capitalismo de plataformas es la lógica exponencial de generación y procesamiento de datos. Tradicionalmente, el progreso tecnológico se asociaba a la Ley de Moore (1965, 2015), que postulaba la duplicación de la capacidad de cómputo cada dos años. Sin embargo, en la era de la inteligencia artificial, el crecimiento en el volumen de datos y en la complejidad de los algoritmos supera con creces los avances en eficiencia del hardware.

Entrenar un modelo de IA de última generación requiere millones de gigabytes de datos y semanas de procesamiento en clusters de GPUs, lo que se traduce en un consumo energético enorme. Según estudios citados por Crawford (2021), el entrenamiento de un único modelo de procesamiento de lenguaje natural puede generar una huella de carbono equivalente a la de cinco automóviles durante toda su vida útil.

Así, el dato se convierte en una nueva huella material y energética. La supuesta “inmaterialidad” de lo digital oculta un costo global cada vez más evidente: la necesidad de electricidad, agua para refrigeración de servidores y minerales críticos para la fabricación de equipos. La economía de

plataformas, entonces, no solo plantea un debate económico y social, sino también un desafío ecológico de primera magnitud.

2.4. Perspectiva Latinoamericana: Dependencia Digital y Soberanía

Desde la perspectiva latinoamericana, el análisis del capitalismo de plataformas debe enmarcarse en las teorías de la dependencia y del estructuralismo (Prebisch, CEPAL). Al igual que en la industrialización, la región enfrenta el riesgo de insertarse en la economía digital de manera periférica, es decir, como usuaria y proveedora de datos, pero sin capacidad de controlar la infraestructura crítica ni de capturar el valor agregado del procesamiento avanzado.

En este sentido, CEPAL ha señalado que América Latina sufre una doble brecha digital: por un lado, de acceso a internet y dispositivos; por otro, de infraestructura avanzada de cloud computing, big data y capacidades de IA. Esto genera una nueva forma de dependencia tecnológica, donde el control de los datos y de los algoritmos queda en manos de corporaciones extranjeras.

Argentina ilustra esta problemática. A pesar de contar con un ecosistema emprendedor dinámico y con plataformas

locales de alcance regional como Mercado Libre, la mayor parte de los servicios críticos (almacenamiento en la nube, inteligencia artificial, telecomunicaciones) dependen de empresas extranjeras. Esta situación no solo tiene consecuencias económicas —fuga de valor, pérdida de competitividad—, sino también geopolíticas, al limitar la capacidad del país para ejercer soberanía digital.

2.5. Continuidades y Rupturas con la Teoría Económica Clásica

Para comprender la novedad del capitalismo de plataformas, resulta útil contrastarlo con tradiciones previas de la economía política. En el pensamiento marxista, el capital se caracteriza por la apropiación del trabajo excedente. En el

capitalismo digital, este excedente no solo se genera en la esfera de la producción asalariada, sino que se expande hacia la vida cotidiana de los individuos, transformando interacciones sociales, patrones de consumo y conductas culturales en insumos para la acumulación de capital. En este sentido, puede hablarse de un deterioro de la vida misma al capital, donde los límites entre trabajo y ocio se difuminan.

Por su parte, Schumpeter (1942) planteó que el capitalismo avanza a través de olas de “destrucción creativa”. Las plataformas representan una fase de este proceso, en la medida en que desplazan industrias enteras (el taxi, los medios de comunicación, el comercio minorista) y generan nuevos sectores económicos. Sin embargo, a diferencia de las innovaciones del pasado, las plataformas tienden a concentrar y centralizar la innovación, lo que limita la competencia schumpeteriana clásica y produce oligopolios digitales.

Finalmente, Polanyi (1944) advertía sobre la “mercantilización de la sociedad” en el capitalismo industrial. Hoy, la plataforma profundiza esta lógica al mercantilizar dimensiones antes no sujetas a transacción: la amistad, la movilidad urbana, la información personal o incluso las emociones. Esta expansión de la lógica mercantil plantea dilemas éticos y sociales sin precedentes.

2.6. El Impacto en el Trabajo y la Sociedad

Uno de los aspectos más debatidos en la literatura es el impacto del capitalismo de plataformas sobre las relaciones laborales. Autores como De Stefano (2016) hablan de un proceso de “uberización” del trabajo, donde se generalizan formas de empleo precario, fragmentado y carente de derechos.

En América Latina, plataformas como Rappi, PedidosYa y Uber han generado miles de puestos de trabajo, pero en condiciones caracterizadas por:

- Ausencia de protección social (obra social, jubilación, licencias).
- Flexibilidad extrema que se traduce en inseguridad.

- Subordinación algorítmica, ya que los trabajadores son evaluados y remunerados mediante sistemas automáticos.

Al mismo tiempo, estas plataformas han redefinido la cultura del trabajo, instalando la noción de que la autonomía individual y la flexibilidad compensan la pérdida de derechos. Esto se vincula con un discurso meritocrático que responsabiliza al trabajador de su éxito o fracaso en la plataforma.

Desde una mirada más estructural, podría plantearse que el capitalismo de plataformas contribuye a una dualización del mercado laboral: por un lado, empleos de alta calificación en sectores tecnológicos; por otro, una masa de trabajadores precarizados en tareas de baja remuneración y alta rotación.

2.7. Geopolítica y Regulación de las Plataformas

El crecimiento de las plataformas digitales también reconfigura el tablero geopolítico. Actualmente, tres polos principales definen las reglas del juego:

1. Estados Unidos, donde nacieron la mayoría de las plataformas globales (Google, Meta, Amazon, Microsoft) y cuyo marco regulatorio ha favorecido la concentración empresarial.
2. China, que desarrolló su propio ecosistema de plataformas (Alibaba, Tencent, ByteDance) bajo un modelo de capitalismo digital controlado por el Estado, con fuertes regulaciones y estrategias de soberanía tecnológica.
3. Unión Europea, que si bien no posee grandes campeones tecnológicos, ha liderado los intentos de regulación con políticas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Digital Markets Act, orientadas a limitar los abusos de posición dominante y a proteger a los consumidores.

América Latina, en cambio, se encuentra en una posición subordinada. La falta de grandes plataformas propias y de marcos regulatorios

robustos genera dependencia frente a los gigantes globales. La discusión sobre una estrategia regional de soberanía digital —impulsada tímidamente por la CEPAL y algunos gobiernos— resulta crucial para evitar que la región se consolide como un mero espacio de extracción de datos y consumo pasivo de servicios digitales.

3. El Costo Planetario: Datos, Energía e Infraestructura

3.1. La Relación Crítica: Procesamiento Masivo y Energía

El procesamiento de datos en gran escala requiere energía y minerales críticos. Crawford (2021) señala que entrenar un solo modelo de IA avanzado puede tener una huella de carbono comparable a la de cinco automóviles en toda su vida útil.

El ILIA 2025 añade una dimensión clave: solo 1 de cada 5 centros de datos en América Latina cumple estándares ambientales internacionales (ISO 50001, LEED, CEEDA). Además, la mayoría de los planes digitales nacionales no incorporan criterios de sustentabilidad. Esto demuestra que la transición digital avanza desligada de la transición energética y ecológica, ampliando la brecha ambiental de la región.

3.2. Infraestructura Digital en América Latina y Dependencia Tecnológica

Según la CEPAL y el ILIA 2025, América Latina enfrenta una doble brecha digital:

1. Acceso desigual a internet y dispositivos.
2. Falta de infraestructura crítica de IA y cloud computing.

Argentina reproduce esta condición: mientras plataformas locales como Mercado Libre o Ualá crecen, dependen de infraestructura externa ubicada en EE.UU., Europa o Asia. El ILIA revela que la región concentra gran volumen de datos, pero con baja disponibilidad y estandarización, lo que limita la innovación local.

3.3. La Demanda Energética: Un Cuello de Botella para el Desarrollo Digital

El procesamiento avanzado de datos requiere electricidad confiable y estable, que en Argentina se enfrenta a múltiples limitaciones:

- Infraestructura eléctrica fragmentada y vulnerable a cortes.
- Dependencia de combustibles fósiles con fluctuaciones de precios internacionales.
- Transición hacia energías renovables aún incipiente y limitada en escala para data centers masivos.

La adopción plena de tecnologías avanzadas como 5G, IoT o inteligencia artificial no solo exige mayor capacidad energética, sino también redundancia y resiliencia, para evitar interrupciones que afecten la operación de plataformas críticas. Sin esta inversión estratégica, Argentina corre el riesgo de permanecer como consumidor pasivo de plataformas globales, reproduciendo la periferia digital y limitando su inserción competitiva en la economía del conocimiento.

3.4. Infraestructura y Geopolítica Digital

La infraestructura digital tiene un valor geopolítico creciente. El control sobre data centers, cables submarinos, redes de telecomunicaciones y satélites se traduce en poder estratégico global. Estados Unidos y China lideran esta competencia:

- EE.UU. concentra gigantes tecnológicos y gran parte de la infraestructura global de cloud y servicios de IA.
- China combina plataformas nacionales con control estatal y regulaciones estrictas para asegurar soberanía tecnológica.

América Latina, incluida Argentina, se encuentra en una posición subordinada: la falta de infraestructura propia y marcos regulatorios robustos limita la capacidad de controlar el flujo de datos, desarrollar algoritmos locales o participar activamente en la gobernanza global de plataformas. La soberanía digital requiere inversión, regulación estratégica y políticas de cooperación regional para reducir dependencia de actores externos.

3.5. Impacto Ambiental y Desafíos de Sostenibilidad

El crecimiento exponencial de los data centers y el uso masivo de IA generan presiones ecológicas significativas:

- Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo energético.
- Contaminación por extracción de minerales críticos.
- Demanda de agua para refrigeración, que puede competir con necesidades humanas y agrícolas.

Esto convierte la economía digital en un factor crítico de la agenda de sostenibilidad global, que requiere repensar modelos de operación, eficiencia energética y gobernanza ambiental de la infraestructura tecnológica. La adopción de energías renovables, la optimización de algoritmos y la planificación de infraestructura resiliente son medidas necesarias para evitar que la expansión digital profundice desigualdades y destrucción ambiental.

4. La Precarización de la economía de plataformas: Impacto Laboral y Social

4.1. La Desestructuración del Empleo Tradicional

El modelo de negocio de las plataformas (Srnicsek, 2018) busca minimizar la propiedad de activos físicos y maximizar la flexibilidad operativa, trasladando riesgos y costos al trabajador. Esta lógica transforma la relación laboral tradicional, reemplazando la figura de trabajador asalariado por la del “colaborador” independiente.

De Stefano (2016) describe este fenómeno como la expansión de la “Just-in-Time Workforce”, donde los trabajadores son contratados bajo demanda y la plataforma actúa únicamente como intermediaria digital. En Argentina, ejemplos como Rappi, PedidosYa, Uber o Cabify muestran cómo se intensifica la fragmentación laboral:

- Jornadas irregulares y ausencia de horarios fijos.
- Evaluación y remuneración dictadas por algoritmos opacos.
- Responsabilidad total del colaborador sobre riesgos y costos operativos (vehículo, combustible, teléfono, etc.).

Esta desestructuración no solo genera inseguridad económica, sino que también impacta psicológicamente al trabajador, al aumentar la presión, la incertidumbre y la dependencia de un sistema algorítmico incontrolable.

4.2. Externalización de Costos y Transferencia de Riesgos

Uno de los rasgos distintivos del modelo Lean es la externalización de costos: las plataformas evitan asumir responsabilidades sobre beneficios sociales, seguros, capacitación y riesgos laborales. Esto tiene consecuencias directas sobre la seguridad y la estabilidad económica del trabajador.

En Argentina, la externalización se refleja en:

- Falta de aportes previsionales y cobertura sanitaria.
- Riesgo financiero en caso de accidentes o baja demanda.
- Carga de inversión en herramientas de trabajo (bicicletas, scooters, celulares).

Al trasladar la responsabilidad al colaborador, las plataformas logran reducción de costos operativos, alta flexibilidad y escalabilidad global, mientras el trabajador absorbe vulnerabilidades estructurales. Antunes (2018) subraya que este modelo reproduce un nuevo tipo de servidumbre digital, donde la autonomía aparente es una ilusión que encubre dependencia y precariedad.

4.3. La precarización digital: Una Nueva Clase Vulnerable

Standing (2011) acuña el término precariado para describir a una clase social caracterizada por:

- Inestabilidad laboral y económica.

- Identidad ocupacional difusa.
- Ausencia de derechos laborales plenos.

En la economía digital argentina, el precariado se manifiesta claramente en sectores como delivery, transporte y microtrabajo online. La gestión algorítmica intensiva obliga a jornadas extendidas y aumenta la presión sobre los trabajadores, mientras la falta de regulación impide la organización colectiva y la defensa de derechos.

Este fenómeno tiene implicaciones más amplias:

- Socioeconómicas: mayor desigualdad y vulnerabilidad ante crisis.
- Culturales: difusión de la idea meritocrática de que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo individual.
- Políticas: debilitamiento de sindicatos tradicionales y estructuras de negociación laboral.

En términos estructurales, la dualización del mercado laboral se profundiza:

1. Empleos de alta calificación vinculados a desarrollo de software, IA y análisis de datos, con alta remuneración.
2. Empleos precarizados en tareas intermedias o bajas, altamente flexibles pero sin derechos ni seguridad económica.

4.4. Implicancias Sociales y Éticas

Más allá del empleo, la lógica de las plataformas mercantiliza la vida cotidiana, tal como advertía Polanyi (1944). La movilidad urbana, la información personal, las emociones e incluso la sociabilidad se transforman en insumos para la acumulación de capital. Esto plantea dilemas éticos y sociales:

- Intensificación de desigualdades entre quienes controlan los algoritmos y quienes generan datos.
- Erosión de derechos laborales y sociales históricos.
- Dependencia tecnológica que condiciona la autonomía individual y colectiva.

5. Conclusiones y Propuestas Estratégicas

5.1. Síntesis de la Hipótesis y la Doble Desventaja

La economía de plataformas no constituye únicamente un avance tecnológico, sino que configura un nuevo régimen de acumulación basado en tres pilares interrelacionados:

- la extracción masiva y sistemática de datos como fuente principal de valor,
- la concentración de poder en un reducido número de corporaciones transnacionales,
- la externalización de costos y riesgos hacia los trabajadores y los Estados.

En el caso de Argentina y, por extensión, de América Latina, este modelo reproduce una doble desventaja estructural, que recuerda las dinámicas centro-periferias identificadas por Prebisch y la CEPAL:

Infraestructura y Energía

- La adopción de tecnologías como IA, cloud computing, IoT y 5G exige una capacidad energética que la matriz argentina aún no puede sostener sin comprometer la estabilidad del sistema.
- La dependencia de infraestructura digital extranjera —particularmente centros de datos en EE. UU., Europa y Asia— provoca fuga de valor agregado, pérdida de soberanía sobre los datos y exposición a vulnerabilidades geopolíticas.
- La falta de inversión estratégica local en infraestructura digital acelera la obsolescencia tecnológica, reproduciendo una situación análoga al viejo patrón de dependencia industrial descrito por la CEPAL en los años cincuenta.

Impacto Laboral y Social

- La uberización del trabajo genera un precariado digital marcado por inestabilidad, carencia de protección social y subordinación algorítmica.

- La mercantilización de la vida cotidiana convierte actividades básicas (movilidad, comunicación, interacción social) en insumos capitalizables, reforzando desigualdades y debilitando derechos colectivos.
- Se consolida una heterogeneidad estructural digital: empleos de alta calificación conviven con masas crecientes de trabajadores precarizados, reproduciendo la dualidad centro-periferia dentro del propio mercado laboral.

En síntesis, la economía de plataformas coloca a Argentina en una posición periférica en el capitalismo digital global, actualizando los dilemas históricos de la región: dependencia tecnológica, subordinación a dinámicas externas y captura insuficiente del valor agregado.

5.2. Definiciones y Propuestas Estratégicas Detalladas

Para revertir esta doble desventaja y transformar la digitalización en una ruta de desarrollo soberano, inclusivo y sostenible, se plantean tres ejes estratégicos interrelacionados.

5.2.1. Soberanía Energética e Infraestructura Digital

La soberanía energética supone garantizar la producción y distribución autónoma y sostenible de energía, mientras que la soberanía digital implica control sobre las infraestructuras críticas de datos y capacidad de procesamiento local.

Propuestas

1. Eficiencia y sostenibilidad energética: establecer incentivos regulatorios para que centros de datos funcionen con energías renovables y tecnologías de bajo consumo, mitigando la huella ambiental.
2. Inversión soberana estratégica: desarrollar centros de datos nacionales y regionales bajo alianzas público-privadas o con financiamiento de organismos multilaterales. Estos centros deberían

articularse con políticas de industrialización tecnológica y transición energética.

3. Planificación energética integral: vincular la expansión digital a la capacidad energética real del país, asegurando reservas estratégicas y redundancias que protejan la estabilidad del sistema eléctrico.

Tal como señalaba Prebisch, la industrialización periférica fracasaba al no controlar insumos estratégicos. En el siglo XXI, los datos y la energía son los “nuevos insumos industriales”. Una infraestructura soberana permitiría a Argentina y a América Latina capturar valor local, disminuir la dependencia externa y disputar posiciones en la gobernanza digital global.

5.2.2. Regulación Laboral de Plataformas

La regulación laboral de plataformas consiste en reconocer la dependencia funcional de trabajadores formalmente autónomos pero controlados por algoritmos, garantizando derechos básicos y equilibrando la relación con las corporaciones digitales.

Propuestas

1. Reconocimiento de la relación laboral encubierta: legislar para que la supervisión algorítmica y la asignación de tareas sean consideradas formas de subordinación laboral.
2. Protección social universal: crear fondos de seguridad social financiados en parte por las plataformas para cubrir jubilación, seguros y licencias.
3. Organización colectiva digital: fomentar sindicatos y cooperativas digitales que puedan negociar con las plataformas en condiciones de paridad.

La precarización digital reproduce la heterogeneidad estructural señalada por la CEPAL: coexistencia de sectores dinámicos y trabajadores excluidos. Una regulación adecuada puede mitigar

estas fracturas, ampliando ciudadanía social y evitando que la digitalización profundice desigualdades históricas.

5.2.3. Desarrollo de Plataformas Éticas y Locales

Se entiende por plataformas éticas y locales aquellas gestionadas bajo modelos cooperativos, universitarios, estatales o de innovación social, que priorizan la gobernanza democrática de datos, la sostenibilidad y el desarrollo de capacidades locales.

Propuestas

1. IA ética y gobernanza local: incentivar proyectos de inteligencia artificial desarrollados en universidades, cooperativas y organismos estatales, asegurando transparencia y control social.
2. Formación y capital humano: invertir en programas masivos de educación digital, análisis de datos y programación para reducir la brecha tecnológica.
3. Políticas de innovación estratégica: financiar startups y cooperativas digitales con alto valor agregado, articulando academia, Estado y sector privado en polos regionales de innovación.

Este modelo rompe la dependencia tecnológica al transformar a la región de consumidora pasiva en creadora de valor. Además, permite vincular la innovación digital con la sostenibilidad ambiental, evitando replicar la “maldición extractivista” en el campo tecnológico.

La doble desventaja identificada —energética/infraestructural y laboral/social— no es inevitable. Así como la CEPAL en el siglo XX planteó que la industrialización

6. Bibliografía

- Antunes, R. (2018). *O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital* (1a ed.). Boitempo.
- Barbero, M. (2001). *La conformación del mundo contemporáneo*. En J. Aróstegui, C. Buchrucker, & J. Saborido (Eds.), *El mundo contemporáneo: Historia y problemas* (pp. 67-118). Editorial Biblos.
- Bratton, B. H. (2016). *The Stack: On Software and Sovereignty*. The MIT Press.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). (Varios años). *El panorama de la economía digital en América Latina y el Caribe*. Publicaciones de CEPAL.
- Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. Yale University Press.
- De Stefano, V. (2016). *The Rise of the "Just-in-Time Workforce": On-Demand Work, Crowdsourcing and Labour Protection in the "Gig Economy"*. International Labour Office.
- Fassio, A., Pascual, L., & Suárez, F. (2002). *Introducción a la metodología de investigación aplicada al saber administrativo*. Ediciones Cooperativas.
- Floridi, L. (2019). *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford University Press.
- Moore, G. (1965). *Cramming more components onto integrated circuits*. *Electronics Magazine*, 38(8), 114-118.
- Moore, G. (2015). *Reflexiones sobre la Ley de Moore y temas relacionados*. Intel Press-kits. Recuperado de <https://newsroom.intel.la/press-kits/reflexiones-sobre-la-ley-de-moore-y-temas-relacionados/?wapkw=ley+de+moore#gs.HmGHEnyC>
- Orlik, T., Jiménez, J., & Sam, C. (2021, 21 de mayo). *Las empresas superestrellas que dominan el mundo se vuelven más grandes, más tecnológicas y chinas*. Bloomberg.
- Piketty, T. (2014). *El capital en el siglo XXI*. Fondo de Cultura Económica.
- Rikap, C. (2021). *Capitalism, Power and Innovation: Intellectual Monopoly Capitalism Uncovered*. Routledge.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Srnicek, N. (2018). *Capitalismo de Plataformas*. Caja Negra Editora.
- Srnicek, N., & Williams, A. (2015). *Inventing the Future*. Verso.
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury Academic.
- UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). (Varias publicaciones anuales). *Digital Economy Report*. Publicaciones de UNCTAD.
- Van Dijck, J. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford University Press.
- Vasilachis de Gialdino, I. (1992). *Métodos Cualitativos I. Los problemas teórico-epistemológicos*. Centro Editor de Latinoamérica.
- Wethein, D., & Magariños, C. (2017). *Llegar al Futuro, Por qué las nuevas tecnologías y el conocimiento pueden revolucionar la Argentina*. Sudamericana.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

Genealogía y fundamentos del pensamiento libertario

Por Lionel Stiglitz

1. Resumen

Este artículo ofrece una lectura crítica marxista de la trayectoria histórica, la epistemología y el rol de la ideología neoliberal. Se sostiene que el neoliberalismo es una forma ideológica históricamente determinada del capital que reconfigura la relación entre Estado, ciencia y sujeto trabajador en función de la centralización y reproducción ampliada del capital a escala mundial. El texto describe la genealogía intelectual que nace en los coloquios fundacionales de la Mont Pèlerin Society y examina la raíz epistemológica del proyecto neoliberal —la negativa a concebir un conocimiento social objetivo y la exaltación de la libertad negativa. Contrapone a ello una concepción marxista de la libertad y de la ciencia como momentos del desarrollo de las fuerzas productivas y de la autoconciencia social.

El neoliberalismo contemporáneo suele reducirse, en el debate público, a un conjunto de políticas: desregulación, privatizaciones, disciplina fiscal. Tal reducción oculta, sin embargo, que estamos ante una ideología que se corresponde con una forma particular en la que el capital organiza sus condiciones de reproducción. Sobre esa base histórica se conforma también la legitimidad discursiva del neoliberalismo: su presentación como “sentido común técnico” (una autoridad que “lo económico” impone sobre la política) depende de una trama intelectual que no puede desligarse de las necesidades de reproducción del propio capital.

Breve genealogía del pensamiento libertario

La construcción organizada del pensamiento neoliberal puede rastrearse, históricamente, hasta los debates que confluyeron en el Coloquio Walter Lippmann (1938) y, sobre todo, en la constitución de la Mont Pèlerin Society (1947). Los estudios

colectivos sobre esa trayectoria (Mirowski & Plehwe, 2009) muestran cómo un conjunto de intelectuales (Hayek, Friedman, Mises, Popper y otros) y sus redes institucionales (think tanks, fundaciones, centros de investigación) desarrollaron una estrategia coherente para rehacer la hegemonía ideológica del capital tras la revolución rusa y el ascenso político del comunismo y del socialismo.

En 1921, Heckscher (economista sueco) escribe «Viejo y nuevo liberalismo económico» sobre cuáles deberían ser las funciones del gobierno para asegurar un libre mercado. En esos años, a 860km de la Revolución Rusa el Partido Obrero Socialista de Suecia (SAP) ascendía en las elecciones. En 1925 encontramos la primera vez que se usa neoliberalismo: es en un libro del suizo Honegger donde plantea la defensa de la competencia y el emprendedurismo, contra el avance de las ideas socialistas y el bolchevismo en particular (Mirowski & Plehwe, 2009).

Luego llegamos a 1937, cuando se realiza el primer intento de organizar una doctrina. En el Coloquio Walter Lippmann se elige el término y se define neoliberalismo como:

- prioridad del mecanismo de precios,
- libre empresa,
- sistema de competencia, y
- estado fuerte e imparcial

En este encuentro fundan una publicación, un centro de estudios y oficinas en Ginebra, París, Nueva York y Londres (a cargo de Friedrich August von Hayek). Lippmann era autor de *The Good Society* (1937), donde escribió que en una sociedad libre, el estado no administra los asuntos de los

hombres, administra justicia entre los hombres que conducen sus propios asuntos. También definió que el totalitarismo se caracteriza por la falta de propiedad privada.

La II Guerra Mundial disuelve este primer intento, pero en 1947, bajo el auspicio de Hayek se juntan en Mont Pèlerin (Suiza) con el objetivo de elaborar los principios generales del orden liberal.

En su primera reunión, quién luego fuera designado su primer presidente, dirá: “lo que para los políticos son límites fijos de practicabilidad impuestos por la opinión pública no deben ser límites similares para nosotros. La opinión pública sobre estos asuntos es el trabajo de hombres como nosotros (...) quienes han creado el clima político en el que los políticos de nuestro tiempo deben moverse (...) Estoy seguro de que el poder de los intereses creados es muy exagerado en comparación con la invasión gradual de las ideas” (Hayek, citado en Cockett, 1995).

Situémonos: el nazismo había sido derrotado por el ejército rojo, las potencias capitalistas implementaban políticas keynesianas, movimientos de liberación nacional se desarrollaban en los países oprimidos. En ese momento se juntan estos grupos liberales a pensar ¿Qué hacemos? ¿Y cómo?

Esta sociedad debatió y debate hasta hoy cómo imponer el orden neoliberal. Alrededor de esta sociedad e impulsados por sus miembros, se crearon Think Tanks, fundaciones, se conquistaron espacios académicos y se realizó tarea de difusión y de asesoramiento político. Con un esquema de mamushkas rusas se construyó el largo camino desde la primera reunión de Mont Pèlerin hasta que miembros de esta sociedad formaron parte del establecimiento del Consenso de Washington y hegemonizaron la academia económica norteamericana.

La libertad para los libertarios

El pensamiento neoliberal sitúa a la libertad individual como “un principio moral de la acción política. Como todos los principios morales, exige que sea aceptado como un valor en sí mismo” (Hayek, 1960). La libertad, sólo puede ser negativa

(limitar al gobierno, garantizar libre interacción). En este eje se apoya la palanca neoliberal.

Las libertades positivas (lo que conocemos como derechos) son el camino, según Hayek, al totalitarismo. En este punto, Hayek divide al liberalismo con bisturí: la tradición inglesa, que considera positiva, se caracterizó por limitar al gobierno (Revolución Gloriosa). Por contra la tradición francesa, imbuida de un “espíritu racionalista” es “el ancestro del socialismo moderno”.

De esta manera, la democracia ilimitada es totalitaria, pero el autoritarismo puede ser liberal. Esto dice Hayek en Los principios del orden social neoliberal (1966), un trabajo presentado en un encuentro de la sociedad Mont Pèlerin. La cita en extenso vale absolutamente la pena:

1) Por ‘liberalismo’ entiendo aquí la concepción de un orden político deseable que fue llevado a cabo en primera instancia en Inglaterra desde el tiempo de los Old Whigs, en la última parte del siglo XVII, hasta el de los Gladstone al final del XIX. Podemos considerar a David Hume, Adam Smith, Edmund Burke, T.B Macaulay and Lord Acton como los típicos representantes [del partido] en Inglaterra. Fue esta concepción de libertad individual bajo el amparo de la ley lo que en primera instancia inspiró a los movimientos liberales en el continente y lo que se convertiría en la base de la tradición política Americana. Algunos de los principales pensadores políticos que encontramos en esos países, como B. Constant y A. de Tocqueville en Francia, I Kant, Frederick von Schiller, y Wilhelm von Humboldt en Alemania, y James Madison, John Marshall y Daniel Webster en Estados Unidos, pertenecen completamente a esta [ideología].

2) Este liberalismo no debe ser confundido con otro originalmente de tradición continental europea, también llamado ‘liberalismo’, del cual es un descendiente directo el que actualmente reclama este nombre en los Estados Unidos. Ese último enfoque, aunque comenzó con un intento de imitar la tradición original, la interpretó movida por el espíritu de un

racionalismo constructivista prevalente en Francia y por lo tanto hizo de ella algo muy diferente, y al final, en vez de abogar por limitaciones para los poderes gubernamentales, terminó sosteniendo el ideal de poderes ilimitados para la mayoría. Esta es la tradición de Voltaire, Rousseau, Condorcet y la revolución francesa, la cual se convirtió en la antecesora del socialismo moderno. El utilitarismo inglés se hizo cargo de una gran parte de esta tradición continental y el partido liberal inglés de fines del siglo XIX –el resultante de la fusión entre los Whigs liberales y los radicales utilitaristas– fue también un producto de esta mezcla.

*3) Liberalismo y democracia, aunque compatibles, no son lo mismo. Al primero le concierne la extensión del poder gubernamental, al segundo quien ocupa este poder. La diferencia se aprecia mejor si examinamos sus opuestos: lo opuesto al liberalismo es el totalitarismo, mientras que lo opuesto a la democracia es el autoritarismo. En consecuencia es posible, al menos en principio, que un gobierno democrático pueda llegar a ser totalitario y que un gobierno autoritario actúe en base a principios liberales. **La ya mencionada segunda clase de 'liberalismo' ha llegado a ser, en realidad, más bien democratismo que liberalismo y, exigir poder ilimitado de la mayoría, se ha convertido esencialmente en anti-liberal.***

Con esta ideología, Hayek fue asesor de Pinochet, un gobierno dictatorial que venía a restaurar la «libertad individual perdida» con Salvador Allende. Cuando los deudos de Hayek criollos como Javier Milei o Espert hablan de la libertad, lo hacen en este sentido. El derecho de los poderosos a disponer de un Estado que no limite sus privilegios ni combata la desigualdad.

El conocimiento neoliberal: el principio de incertidumbre

Otra de las piedras angulares del pensamiento neoliberal contemporáneo es su concepción del conocimiento social como fundamentalmente limitado, disperso y, en última instancia, imposible de centralizar. Esta “epistemología de la

incertidumbre” no es meramente un corolario técnico: es el núcleo filosófico desde el cual se legitima todo el orden del mercado. En Hayek, esa idea adquiere una forma sistemática. En su ensayo clásico *The Use of Knowledge in Society* (1945), afirma que el problema económico de la sociedad no es simplemente un problema de asignación de recursos, sino un problema de utilización del conocimiento que nadie posee en su totalidad. De allí se deriva su conclusión principal: ningún organismo central puede conocer las circunstancias particulares del tiempo y el lugar en que actúan los individuos, por lo que toda planificación racional está condenada al fracaso.

En *The Constitution of Liberty* (1960), Hayek extiende este principio y lo formula en términos de filosofía social: el conocimiento humano es inevitablemente falible, contextual, e incapaz de capturar la complejidad de los procesos sociales. En *The Counter-Revolution of Science* (1952), insiste en que las ciencias sociales deben emplear el individualismo metodológico, que busca comprender los fenómenos sociales complejos (como el mercado) a partir de las acciones de los individuos.

Si el mundo social es inherentemente complejo, y si el conocimiento individual es siempre parcial, cualquier intento de planificación equivale a querer reconstruir un proceso natural a mano, sustituyendo un orden espontáneo por un artificio precario. De allí que Hayek proponga reglas generales abstractas (propiedad, contrato, estabilidad monetaria) como los únicos marcos que permiten que ese orden se mantenga. La incertidumbre, en su visión, no es un defecto: es el principio organizador del orden liberal.

El corolario es: dado que el conocimiento es disperso, las instituciones deben limitarse a garantizar la libertad individual para que la información se coordine a través de los precios. Toda intervención estatal que intente reemplazar ese mecanismo debe fracasar por límites epistemológicos insalvables.

La economía como “ciencia”: Milton Friedman

Esa epistemología hayekiana se acopla, en la ortodoxia económica del siglo XX, con la concepción de la economía como ciencia positiva y moralmente neutra. Milton Friedman, en su influyente ensayo *The Methodology of Positive Economics* (1953), sostiene que:

“La economía positiva es en principio independiente de cualquier posición ética particular o de juicios normativos (...) En una palabra: la economía positiva es o puede ser una ciencia “objetiva”, precisamente en el mismo sentido que cualquiera de las ciencias físicas. Desde luego, del hecho de que la economía trate de las relaciones mutuas entre los seres humanos y de que el investigador sea a su vez parte del asunto a investigar en un sentido mucho más íntimo que en las ciencias físicas, surgen dificultades especiales al pretender lograr objetividad, al mismo tiempo que proporciona al investigador de lo social una serie de datos que no son accesibles al físico. Pero ni lo uno ni lo otro es, en mi opinión, una distinción fundamental entre los dos grupos de ciencias” (Friedman, 1953, p. 4)

Friedman no niega que la economía trate de seres humanos, pero subraya que el método científico debe abstraerse de las valoraciones. El realismo de los supuestos, agrega, no importa: una teoría se juzga por su capacidad predictiva, no por la veracidad de sus premisas. (ibid., p. 7). En otras palabras, los modelos pueden suponer agentes racionales, competencia perfecta o información completa, aunque tales condiciones no existan: su valor radica en producir predicciones “útiles”.

Al unirse ambas perspectivas —la hayekiana y la freidmaniana— se configura una epistemología coherente con el orden neoliberal: la sociedad es demasiado compleja para conocerla plenamente, pero suficientemente regular para modelarla con abstracciones que permitan prever ciertos resultados; la economía es una ciencia positiva, y sus teorías no deben someterse a juicios éticos o históricos; y las políticas deben diseñarse no a partir de un fin social (bienestar, equidad, desarrollo), sino

de la “eficiencia” medida en términos internos del modelo.

Esta interpretación aséptica y deshistorizada de la teoría económica se ubica en el corazón del mainstream contemporáneo. Presenta las técnicas como neutrales, los modelos como universales, y el problema económico como un fenómeno técnico sin determinaciones históricas y sociales. En consecuencia, el campo de la disputa política se traslada del conflicto social a la competencia entre “escuelas” de modelización: algunas corrientes heterodoxas combaten a la ortodoxia en el mismo terreno metodológico, sin cuestionar la base epistemológica ni el campo de batalla.

Esta concepción neoliberal, heredada de la trinchera que ocupó la escuela austríaca en el Methodenstreit, plantea que la sociedad y los fenómenos económicos pueden ser analizados de manera atomística y universal (independiente de sus determinaciones histórico-sociales): a partir de la definición de las categorías y supuestos, mediante razonamiento y lenguaje lógico-matemático.

Esto no es otra cosa que el reconocimiento y entronización del pensamiento económico vulgar que critica Marx tras la conquista del poder político por la burguesía. La teoría económica debía despejarse de su carácter científico y apoyarse en la apologética:

“La economía política, cuando es burguesa, es decir, cuando ve en el orden capitalista no una fase históricamente transitoria de desarrollo, sino la forma absoluta y definitiva de la producción social, sólo puede mantener su rango de ciencia mientras la lucha de clases permanece latente o se trasluce simplemente en manifestaciones aisladas.

Fijémonos en Inglaterra. Su economía política clásica aparece en un período en que aún no se ha desarrollado la lucha de clases. Es su último gran representante, Ricardo, quien por fin toma conscientemente como eje de sus investigaciones la contradicción de los intereses de clase, la contradicción entre el salario y la ganancia y entre la ganancia y la renta del suelo, aunque viendo

simplistamente en esta contradicción una ley natural de la sociedad. Al llegar aquí, la ciencia burguesa de la economía tropieza con una barrera para ella infranqueable.

[Luego de 1830] La burguesía había conquistado el poder político en Francia y en Inglaterra. A partir de este momento, la lucha de clases comienza a revestir, práctica y teóricamente, formas cada vez más acusadas y más amenazadoras. Había sonado la campana funeral de la ciencia económica burguesa. Ya no se trataba de si tal o cual teorema era o no verdadero, sino de si resultaba beneficioso o perjudicial, cómodo o molesto, de si infringía o no las ordenanzas de policía. Los investigadores desinteresados fueron sustituidos por espadachines a sueldo y los estudios científicos imparciales dejaron el puesto a la conciencia turbia y a las perversas intenciones de la apologética.” (Marx, 1975, Postfacio a la 2da edición de El Capital)

Los neoliberales hacen eso desembozadamente, planteando un fundamento moral y limitando la capacidad del conocimiento de la sociedad y su desarrollo histórico, estableciendo el individualismo metodológico como base para los planteos lógico-matemáticos. Sin embargo, esto cumple un rol para la conciencia capitalista: las ideas superficiales que surgen de la práctica comercial son justificadas con aparente cientificismo (Iñigo Carrera, 2007)

El neoliberalismo como momento histórico de la centralización del capital

Veamos, por último, cual es el fundamento del ascenso del proyecto neoliberal. El paso del Estado “intervencionista” al Estado “neoliberal” no constituye un giro contingente en la política económica, ni una simple victoria cultural del “mercado” sobre el “Estado”. Todas esas lecturas, incluso las más críticas, parten del análisis de las formas aparentes —discursos, políticas, ideologías— y no de las transformaciones materiales que las producen: las formas políticas e ideológicas no pueden comprenderse por sus diferencias exteriores, sino por ser la forma que

adopta, en diversos terrenos, el desarrollo del capital como relación social general.

Desde la crítica marxista de la economía política, el punto de partida debe situarse en el movimiento real de la acumulación y la centralización del capital. Durante gran parte del siglo XX, el proceso de acumulación tomó forma concreta en la expansión del Estado nacional como propietario directo de sectores estratégicos —energía, transporte, infraestructura— y como organizador del consumo social. En las economías centrales, ese movimiento se expresó en los Estados de bienestar; en las periféricas, en los Estados desarrollistas y nacional-populares. En todos los casos, el Estado actuó como capitalista colectivo: unificaba fracciones de capital, transfería renta de la tierra a la industria, garantizaba mercados, y sostenía la demanda agregada mediante el gasto público.

Sin embargo, la propia lógica expansiva del capital —su tendencia a la concentración y centralización— alcanzó un punto en que la escala nacional se volvió insuficiente. La competencia global exigía una dimensión de acumulación más allá de la que podía organizar cada Estado por separado. Lo que en una primera etapa había sido un medio para potenciar la acumulación —la propiedad estatal nacional— comenzó a convertirse en un obstáculo (Iñigo Carrera, 2013). El grado de centralización alcanzado por ciertos capitales individuales excede largamente las fronteras nacionales y plantea una nueva necesidad.

La transición del Estado interventor al Estado neoliberal no debe interpretarse, por tanto, como una reversión o una “retirada” del Estado, sino como su reconfiguración acorde a la necesidad del capital: el Estado se transforma de organizador directo de la producción social en ciertas ramas, a garante institucional del libre movimiento de capitales. Su rol ya no consiste en apoyar la acumulación y centralización a escala nacional, sino en asegurar las condiciones políticas, jurídicas y monetarias para la valorización del capital más allá de las fronteras nacionales.

Este cambio estructural tiene consecuencias ideológicas directas. La pérdida del Estado como propietario y organizador directo de la producción requiere una nueva legitimación del orden social. El discurso neoliberal cumple esa función, expresando en el plano de las ideas la necesidad objetiva de liberar al capital de las restricciones nacionales que obstaculizaban su centralización.

El neoliberalismo triunfa ideológicamente, entonces, porque la estructura material del capital mundial produce las condiciones para su propia representación: el discurso de la libertad, la eficiencia y la competencia se convierte en el modo espontáneo en que las clases dominantes conciben —y legitiman— el dominio del capital transnacional. La “retirada del Estado” aparece como realización de la libertad individual. La desconfianza hacia el Estado y la exaltación del mercado como ámbito de libertad traducen en lenguaje moral la necesidad económica de la época. El éxito del neoliberalismo no radica, por tanto, en su coherencia teórica o en su capacidad persuasiva, sino en su correspondencia estructural con el movimiento real del capital, porque expresa un momento real de su universalización. De ahí su poder ideológico: su promesa de libertad, mérito e individualismo refleja, aunque de forma mistificada, la expansión efectiva de las relaciones de producción capitalistas a escala global.

Así entendido, el neoliberalismo no es una anomalía histórica ni una simple doctrina económica, sino una forma ideológica particular coherente con el momento de la centralización del capital. Cabe preguntarnos entonces, por los límites históricos del mismo.

El capital, en tanto relación social, desarrolla la contradicción entre el contenido eminentemente social del trabajo humano y su forma privada. La prosecución de la centralización y la acumulación del capital pone cada vez más en evidencia la necesidad de superar la forma privada del trabajo social. Esa superación implica la capacidad del trabajo social de regular conscientemente el

proceso de metabolismo social, pasado de la libertad individual formal a la libertad real. En palabras de Marx (1971), se trata del pasaje al tercer estadio del metabolismo social:

“Las relaciones de dependencia personal (al comienzo sobre una base del todo natural) son las primeras formas sociales, en las que la productividad humana se desarrolla solamente en un ámbito restringido y en lugares aislados. La independencia personal fundada en la dependencia respecto a las cosas es la segunda forma importante en la que llega a constituirse un sistema de metabolismo social general, un sistema de relaciones universales, de necesidades universales y de capacidades universales. La libre individualidad, fundada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación de su productividad colectiva, social, como patrimonio social, constituye el tercer estadio. El segundo crea las condiciones del tercero.” (op. cit, p. 85)

En la clase obrera en tanto portadora de las potencias del trabajo social y el conocimiento científico (contrapuesto a la representación lógica neoliberal) vive la capacidad de desarrollar este tránsito.

Bibliografía

- Cockett, R. (1995). *Thinking the unthinkable: Think-tanks and the economic counter-revolution 1931-1983*. HarperCollins.
- Friedman, M. (1953). *The methodology of positive economics*. In - M. Friedman (Ed.), *Essays in positive economics* (pp. 2–43). University of Chicago Press
- Hayek, F. A. (1945). *The use of knowledge in society*. *The American Economic Review*, 35(4), 519–530.
- Hayek, F. A. (1952). *The counter-revolution of science: Studies on the abuse of reason*. The Free Press.
- Hayek, F. A. (1960). *The constitution of liberty*. The University of Chicago Press.
- Hayek, F. A. (1966) *Los principios de un orden social neoliberal*. Trabajo presentado en el encuentro de Tokio de la Sociedad Mont Pelerin, septiembre de 1966. Disponible en <https://jeffersonamericas.org/wp-content/uploads/2020/08/Hayek07.pdf>
- Iñigo Carrera, J. (2007). *Conocer el capital hoy. Usar críticamente El Capital*. Imago Mundi.
- Iñigo Carrera, J. (2013). *El Capital: Razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia* (2da ed.). Imago Mundi.
- Marx, K. (1971). *Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundrisse) 1857-1858*. Siglo XXI Editores.
- Marx, K. (1975). *El Capital*. Siglo XXI.
- Mirowski, P. Plehwe, D. (2009), *The road from Mont Pèlerin: the making of the neoliberal thought collective*.

Apuntes Para un Nuevo Proyecto Nacional

Por Javier Martínez

“Pero le contesto su inquietud: el eje de mi proyecto será aplicar un modelo de producción y trabajo, cuyo objetivo principal será reconstituir el tejido productivo doméstico mediante la elevación de la productividad global y la creación de puestos de trabajo a través de la elaboración de bienes y la prestación de servicios.”

“La reindustrialización se instrumentará mediante un ordenado proceso de sustitución de importaciones, que tendrá al mercado interno como su demandante básico. A partir de allí, se impulsará una agresiva estrategia exportadora.”

“Por supuesto, este plan de producción se encuadrará dentro de un proyecto nacional que planificará la aplicación de las herramientas crediticias, logísticas, de infraestructura y de apoyo tecnológico.” (Kirchner, Néstor y Di Tella, Torcuato S., 2003)

Así le contestaba Néstor Kirchner a Torcuato Di Tella, allá por 2002, respecto del proceso de reindustrialización que el primero proponía. Proceso que se inició, rindió sus resultados, pero quedó trunco.

Más de 20 años después, la cantidad de empresas que declararon empleo en la Argentina descendió de 571.586 a 560.443 (-1,9%) entre 2023 y 2024. Unas 11.143 empresas menos, con su equivalencia en destrucción de 125.428 empleos registrados (-1,85%) .

Pero, de dicho “número”, más de la mitad 66.624 (53,12%) corresponden al sector de la construcción y casi la cuarta parte 28.258 (22,53%) corresponden al de la industria, sectores que no solo

suelen “promediar para arriba” el nivel de los salarios registrados, sino que impulsan la creación de más empleo (registrado y no registrado), hacia adentro de dichos sectores y hacia afuera de ellos. El sector de minería y petróleo, aún con el auge de Vaca Muerta, apenas pudo exhibir un incremento de 125 puestos de trabajo en el mismo período. A estas cifras hay que adicionarle más de 55 mil empleos públicos. La evolución de estos datos, para el primer semestre de 2025, solo confirma la tendencia general descendente.

Las grandes potencias económicas surgidas con posterioridad a la Revolución Industrial fundamentaron su carácter de tales justamente en base al desarrollo de sus industrias. En una primera etapa (liderada hasta fines del siglo XX primero por Inglaterra y, luego, por los Estados Unidos), robusteciendo una diversificada “cartera” de “chimeneas” fabriles, protegiéndolas de la competencia externa en los mercados domésticos y administrando en su favor los saldos comerciales (exportaciones menos importaciones) en su intercambio con los mercados mundiales. Y, en una segunda etapa, desde inicios del siglo XXI, que explica el ascenso de China y su disputa de hegemonía económica a los Estados Unidos mediante el desarrollo, a partir del “know how” extraído de los procesos industriales, de la industria del conocimiento, traducida no solo en mayor eficiencia de procesos sino en patentes de invención.

En efecto: primero, “chimeneas”; industria del conocimiento (patentes), después. Pero siempre: industria. Porque los ingresos por exportaciones de las naciones industrializadas son mayores respecto

de las de países con estructuras productivas primarizadas, así como mayores son los niveles de independencia respecto de los vaivenes en los precios internacionales de “commodities”, las recaudaciones de sus fiscos, los niveles de ingresos de los hogares y la calidad de vida de sus sociedades.

Por motivos endógenos y exógenos varios, la Argentina nunca pudo (aún) transformar su estructura productiva lo suficiente como para poder caracterizarla de industrial. Con posterioridad a la crisis mundial del '30 (1930), los intentos de industrialización (inicialmente necesarios para producir localmente lo que ya no podía importarse debido al “cierre” de las naciones -y sus flujos de fondos- en sí mismas) quedaron trancos por motivos políticos no sin antes toparse, como paso previo al político (en la mayoría de los casos), con la “famosa” restricción externa: la escasez de dólares. El estado de cosas actual es este, con más el prácticamente nulo acceso al crédito internacional si fuera necesario echarse mano a este para financiar parcialmente un nuevo (y, a todas vistas, necesario) proceso de (re)industrialización. De hecho, por el contrario, un nuevo proyecto industrializador de la matriz productiva va a tener que destinar una mayor o menor parte de la riqueza que genere a hacer frente a las obligaciones contraídas, principalmente, en los períodos 2016-2019 y 2024 a la fecha, tanto con acreedores privados como (principalmente) con los organismos multilaterales de crédito (FMI, ante todos).

Las diagnosis economicistas abundan. Con mayores y menores grados de detalle. Con mayores y menores grados de fundamentación teórica y técnica. Con más o menos blancos, negros y grises. Es, entonces, necesario comenzar a “bucear” en otros desarrollos de ideas. Es necesario empezar a pensar “qué hacer”.

QUÉ HACER.

El subtítulo, así expresado, puede resultar grandilocuente (y hasta pedante). Pero solo busca dar un inicio claro al desarrollo posterior, el cual (luego de una brevísima introducción doctrinaria y empleando una metodología arbitraria pero útil) se estructurará conforme los cuatro componentes de la demanda agregada, a saber: consumo (C), inversión (I), gasto público (G), y exportaciones netas (Xn).

Objetivo. Breve digresión doctrinal.

La economía de cualquier nación es una combinación (cualquiera sea) de capital (K) y trabajo (L).

Las “formas” y “cantidades” relativas que asuman ambos factores depende de la corriente ideológica o (como en el caso del peronismo) doctrinaria del decisor, ergo, del Ejecutivo nacional (asumiendo, la Argentina, la forma de gobierno republicana).

Un gobierno es peronista cuando gobierna de acuerdo a la doctrina peronista. Y, cuando ello ocurre, en el centro de la planificación estratégica, táctica y posterior acción política (realizaciones) se encuentra el ser humano en comunidad, el cual debe realizarse materialmente para poder realizarse espiritualmente, individual y colectivamente. Por tanto, la economía se subordina a lo social, y lo social a la política, conducción de las dos anteriores.

Así, el objetivo económico de un plan económico peronista es organizar e incrementar la riqueza en convivencia armónica entre el capital (K) y el trabajo (L). La preponderancia de un factor en detrimento del otro solo produce la destrucción paulatina de este y, luego, del “todo”. De allí la necesidad de una “armonía”, que es dinámica y debe ser lograda por la conducción política, con vistas al bienestar de la comunidad.

El bienestar de la comunidad, así, implica que existe un concepto justicialista de riqueza. Para el

justicialismo, la riqueza es un bien individual que debe cumplir una función social al mismo tiempo, por lo que, si la riqueza de la nación crece, la riqueza de los hogares debe crecer en la misma magnitud. La riqueza, en un gobierno justicialista, debe: 1) crearse; y 2) ser de disfrute de todos quienes la producen; para 3) obtener un mayor bienestar social. La riqueza que hace grande a la nación es, únicamente, aquella que se genera sobre la base del trabajo de un pueblo feliz y satisfecho.

Existe consenso, hacia dentro del movimiento (peronismo y demás fuerzas del campo nacional y popular), en que el proceso que quedó trunco en 2015 respondía a la doctrina justicialista. Por otra parte, no son sino de perfil industrial (incluyendo la industria del conocimiento) las dos naciones-potencia que se disputan la hegemonía económica (y política) global, y todas aquellas naciones que (más o menos ajenas a dicha disputa) exhiben los mejores estándares de calidad de vida de sus comunidades. Siendo así, existe un proceso a retomar.

Gasto Público (G).

Todos los Estados nación “gastan”. En rigor, invierten. El uso de la palabra gasto es peyorativo, con la finalidad de degradar la “intromisión” del Estado en el ciclo económico y, así, legitimar aquella vieja afirmación (neo)liberal que reza “Achicar el Estado es agrandar la Nación”. Idea que busca favorecer el desequilibrio de los factores de producción en favor del factor capital (K) y en detrimento del factor trabajo (L). Desequilibrio de factores que es opuesto a la armonía entre los mismos, que es eje de la concepción económica peronista, la única que supo sostener los períodos más largos de industrialización y mejora de la calidad de vida de los hogares.

Pero vayamos al grano. Al “qué hacer”, respecto de este agregado.

Se han destruido empresas (principalmente, pequeñas y medianas) y puestos de trabajo. Y no hay empresas sin trabajadores, ni trabajadores (por lo menos, con salarios “aceptables”) sin empresas. De nuevo: la armonía entre el capital (K) y el trabajo (L).

No hay financiamiento privado que las empresas en crisis puedan tomar para que su crisis no termine en cierre definitivo: el costo financiero en pesos (de todas las distintas posibilidades de financiamiento que ofrece el sistema) está marcado por el interés que el BCRA y el Tesoro tienen que pagar por emitir deuda en pesos, de corto plazo, y así transformar la demanda de dólares en demanda de títulos en pesos.

Pero, aun si el costo del financiamiento fuere razonable: por un lado, el consumo privado (C) se encuentra en franco retroceso debido a la continua caída, en términos reales, de los ingresos de los hogares, y a la pérdida de empleos formales (privados y públicos) e informales; y, por el otro, con un tipo de cambio poco competitivo, solo grandes empresas y el complejo agroexportador pueden aún tener una performance aceptable. De hecho, el tipo de cambio y la propia desregulación de importaciones (la “des-administración” del comercio exterior) son otros dos factores que se suman al deterioro del consumo privado interno (C) para atentar contra la sobrevivencia de la industria nacional. En rigor, del empresariado nacional todo, que ya no puede compensar con mayor precio lo que no vende por cantidad, porque directamente “ya no vende más que lo que le pueden comprar”, que cada vez es menos. Menos, y con cada vez menor margen de utilidad: porque ya no puede trasladar al precio los mayores costos (mayores costos de servicios públicos –actualizaciones tarifarias-, de alquileres/arrendamientos de inmuebles y maquinarias, de financiamiento, logísticos, etc., etc., etc.).

Atender esta situación implica, desde el lado del gasto público (G), medidas como:

1. Reinstalar una política de subsidios e incentivos para las pequeñas y medianas empresas.

Las grandes empresas ya cuentan con innumerables subsidios y demás ventajas (tributarias, aduaneras, etc.). Pero incluso no contemplándolas, serían beneficiarias de poder mantener a sus mismas empresas proveedoras de los bienes y servicios que aplican o incorporan en sus ciclos productivos. Aquellas empresas de menor porte con las operan históricamente, con las que el mutuo conocimiento y cooperación redundan en beneficios “contantes y sonantes” (que se transforman en enormes costos cuando debe reemplazarse un proveedor por otro).

¿Qué subsidiar? Desde tarifas de servicios públicos, pasando por el interés de líneas de crédito bancario de capital de trabajo, siguiendo por las asimetrías competitivas en la exportación para aquellos productos y servicios intensivamente exportadores, hasta la compra de hipotecas, prendas y otras obligaciones de empresas para las cuales afrontar los pagos periódicos de las mismas las obligue a decidir entre ello o reducir personal.

“Di Tella: ‘Es verdad, pero usted no me está diciendo qué medidas hubiera aplicado...’

Kirchner: ‘Sin dudas y sin complejos, habría que haber aplicado políticas de subsidios para ayudar a nuestras pequeñas y medianas industrias.’

‘Esto ya lo hice en Santa Cruz, donde refinancié a los productores locales a 25 años de plazo con un dos por ciento de interés sobre saldo y tres años de gracia. Propuse la creación de un fondo fiduciario extrabancario que compre las hipotecas que tienen los productores y que beneficie a la gente permitiéndole pagar esos compromisos con tasas de interés razonables.’

‘Es decir, a los pequeños productores que están al borde de perderlo todo, darles hasta 30.000 pesos a devolver a cinco años sin interés, y al resto devolverle el dinero prestado a una tasa internacional baja, de

manera que el costo del dinero sea absolutamente inferior a la expectativa de rentabilidad, porque todo el que produce o tiene una empresa es lógico que quiera ganar dinero.’

‘Cuando el costo financiero es superior a la rentabilidad, nadie invierte en nada. Pero si se combina la evolución del capital operativo con el estímulo a la rentabilidad, se pone en marcha la estructura productiva.’

‘Torcuato, a la Argentina hay que pensarla estratégicamente. Hay que tener en cuenta que para aquellos momentos en que tengamos asimetrías en el mercado internacional, cuando nuestros productos no tengan niveles de competitividad, tenemos que subsidiar al productor. (Kirchner, Néstor y Di Tella, Torcuato S., 2003)

Nada nuevo bajo el Sol.

Nada que no se haya hecho ya.

2. Reanudar y generar nueva obra pública.

¿Cuál? Toda la que sirva a:

a. Calidad de vida actual: cloacas, pavimentación de calles y caminos urbanos y rurales, extensión de red de agua corriente, construcción de plantas potabilizadoras de agua, creación/mejora/mantenimiento de edificios de instituciones educativas públicas, etc.

b. Calidad de vida futura: entiéndase por “calidad de vida futura” aquella que deriva de obra pública que redefina el perfil productivo nacional hacia uno (como se postuló) eminentemente industrial, lo cual aseguraría un nivel de ingresos de los hogares sustancialmente superior que en comparación con los de una población con ingresos provenientes del empleo privado en los sectores de servicios o comerciales, sea que se trate de empleo en relación de dependencia y (con más razón aún) empleos cuentapropistas.

Este tipo de obras contempla:

- i) Mantenimiento y ampliación de red de rutas nacionales.
- ii) Reanudación de proyectos producción energética.
Entre ellos, en particular, de reactores diseñados para la producción de electricidad en bajas o medianas potencia, como el del discontinuado proyecto CAREM. En este caso, además, para su licenciamiento comercial y producción para exportación “llave en mano”.
- iii) Ampliación de red ferroviaria con fines turísticos y comerciales (carga).
- iv) Ampliación de la capacidad portuaria pluvial y marítima.

... entre otras.

Consumo (C)

Habíamos dicho que, el consumo privado (C) se encuentra en franco retroceso debido al declive persistente, en términos reales, de los ingresos de los hogares, y a la pérdida de empleos formales e informales.

Se impone, entonces:

1. Convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y promover la apertura de negociaciones colectivas paritarias de todos los rubros de actividad.
2. Las políticas de subsidios e incentivos para pequeñas y medianas empresas ya mencionadas: otorgadas contra cumplimiento efectivo de metas de mantenimiento de nómina de personal en relación de dependencia y/o incorporación de personal nuevo y cesanteado, con número de ellos a definir entre representantes de las empresas, representantes sindicales, y autoridades del Poder

Ejecutivo nacional (en particular, de las carteras de Trabajo y Economía).

3. Reincorporación de trabajadores cesanteados de los Estados nacionales, provinciales y municipales. Respecto de los provinciales y municipales, con giro del Tesoro Nacional de los fondos necesarios para que la reincorporación se torne efectiva, con la mayor inmediatez posible, hasta tanto los erarios provinciales y municipales puedan hacerse cargo de dichas incorporaciones en la misma proporción de fondos nacionales, provinciales y municipales con que los salarios de los reincorporados se afrontaban al momento en que comenzaran las reducciones de plantas (permanentes, transitorias, contratados).

4. Si bien se las considera “transferencias del Estado”, se consideran en este acápite la actualización de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, asignación universal por hijo (AUH), y transferencias erogadas por la ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social). Respecto de las mismas, los sujetos de derecho de las mismas deberían ver actualizados sus importes, como mínimo, hasta percibir lo que hubiera correspondido si hubiera continuado vigente la última ley de Movilidad Jubilatoria (L.27.609, reemplazada por DNU N° 274/2024, hoy vigente).

Inversión (I)

Incentivar el Gasto Público (G) y el Consumo (C) funcionar, per se, como “polea de transmisión” para incentivar la Inversión (I). Cuando el sector público (G) y las personas (C) pasan de cierto nivel de capacidad de compra y de demanda de bienes y servicios (llamémosle “d”) a un nivel nuevo y superior (“d+1”), el sector privado (las empresas del mismo) (I) tendrá incentivos para adquirir una cantidad bienes y servicios adicional a la que adquiriría previamente (en el nivel de demanda $G+C="d"$).

El problema, hoy, radica en que es más redituable y más fácil y rápidamente capitalizable, invertir en

activos financieros que esperar el retorno de invertir en producir bienes y servicios. Esto es así dado el nivel de tasas de interés que el BCRA y el Tesoro necesitaron ofrecer, en forma de “papeles” (deuda) en pesos (\$), para “distraer” los pesos (\$) circulantes y en depósitos de su “corrida” hacia la compra de dólares (USD).

La “mitad de la biblioteca económica” consideraría que la expansión monetaria generada a partir de incrementar el Gasto Público (G) y el Consumo (C) derivaría en nuevos y más altos niveles de precios. Entre ellos, el precio del dólar (USD) y la tasa de interés (i) (la retribución de inmovilizar pesos -\$ prestándolos).

Pero también es verdad que las personas asalariadas (formales e informales), cuentapropistas, jubilados y pensionados, etc., suelen destinar la mayor parte de sus ingresos a consumir bienes y servicios y que, además, dichos consumos ya se encuentran muy deprimidos incluso respecto de otros momentos pasados en que también destinaban la totalidad de sus ingresos a consumir. Esta noción indicaría que la mayor cantidad de pesos “circulando”, al recibirlos quienes los dedican casi íntegramente al Consumo (C), no debería tener un alto impacto en precios.

Entre una posición y la otra hay matices. Una de ellas tiene que ver con las expectativas que genera saber que habrá más pesos (\$) circulando, más que con la realidad efectiva de que ellos, efectivamente, se encuentren haciéndolo. Esta expectativa, en una economía que paga las tasas que paga en pesos para no “irse” a dólares (USD), indicaría que los “nuevos” pesos circulantes terminarían, más temprano que tarde, demandando de dólares (\$) (o cobrando esas altas tasas). Y eso “acelera” los precios aún antes de que “arranquen” (los pesos -\$ a circular).

El problema, en realidad, es la escasez de dólares. Brasil cuenta con reservas en dólares equivalentes a, por lo menos, el 15% de su PBI. Con ellos le alcanza y sobra para que a nadie en Brasil le interese

cambiar reales por dólares como “refugio” de su ahorro.

Para que, ni por expectativas ni por la realidad concreta, la expansión fiscal y monetaria no termine en precios y/o demanda de dólares que no se tienen y/o mayores tasas de interés (que desincentivan e imposibilitan el ciclo productivo), la Inversión (I) deberá volver a ser principalmente productiva. Ni financiera, ni de reventa de importados. Esto implica:

1. Restablecer y/o implementar nuevas restricciones a las importaciones de bienes y servicios. El egreso de dólares (USD) que implican solo podrá darse cuando:

a. Se correspondan con bienes y servicios que no se producen en el país;

b. Dichos bienes tengan, como destino, ser incorporados en procesos productivos locales de otro bien o servicio (no para su reventa en el estado en que se importaron);

c. La empresa importadora genera exportaciones en, como mínimo, la misma cuantía (medida en dólares -USD-) que sus importaciones.

d. Otras restricciones que los fines eficientizar las erogaciones de dólares por importaciones y proteger la producción nacional.

2. Los que dejaron de producir para “reconvertirse” en importadores de lo mismo que producían, deberán “volver a reconvertirse”, volviendo a producir lo que hoy importan. Obviamente, de la mano del Estado, con las herramientas mencionadas y las adicionales que hagan falta.

3. Reponer los importes máximos periódicos de compra de dólares en el mercado libre de cambios (MLC), para cada una de las distintas

finalidades para los cuales las personas jurídicas y humanas requieren de la divisa.

4. Evaluar y establecer desincentivos impositivos para el acceso a la divisa para fines de atesoramiento (y otros distintos a la producción de bienes y servicios).

Solo acumulando reservas (dólares -USD-), las políticas expansivas monetarias y/o fiscales pueden no traducirse (por lo menos, en forma directa e inmediata) en aumentos del nivel de precios (incluyendo al propio dólar -USD- y el esquema de tasas de interés -i-). Acumulando reservas se puede “desandar” y revertir tasas de interés en ascenso. Y solo desandando este camino, la renta productiva puede ser sólidamente una opción de preferencia frente a la renta financiera.

Por otro lado, para que asegurarse que el sector privado realmente invierta capital (K) en producir y demande trabajo (L), y evitar que, simplemente, ajuste el mayor de circulante con mayor precio, es menester administrar el comercio. Ordenar los ajustes de “precio por cantidad” ($p \times q$), de acuerdo a costos, márgenes de utilidad, con una Secretaria de Comercio que reúna (como otrora), el comercio interior y el exterior, y legislación vigente y nueva (que excede los límites del presente trabajo).

Exportaciones Netas (Xn).

Ya se ha dicho. Hay que acumular dólares. Dicho esto...

“Kirchner: ‘Lo que digo es que tengamos en manos del Estado el control de nuestros recursos en función del perfil de país que queremos tener. Pero vea, lo central es enfocar las políticas en la producción y el trabajo. Es una búsqueda para combinar producción, trabajo, sustitución de importaciones, aprovechar la capacidad tecnológica, profundizar las exportaciones tradicionales y consolidar las que no lo son para generar importantes beneficios y penetrar en los distintos mercados del mundo.’

‘Además (...), desarrollo de la industria agroalimentaria, el turismo, la energía, la minería, el software y las nuevas tecnologías como principales motores, sin dejar de lado el fomento de las exportaciones de productos de los sectores del calzado, textiles, vitivinícola y frutícola.’

‘Hay que desarrollar con fuerza la agroindustria. La agricultura, la ganadería y todas las especialidades dentro de la actividad primaria necesitan máquinas, tecnología, innovación, desarrollo e inventiva, lo cual se logra si hay una acción ininterrumpida de investigación sobre las posibilidades de los productos primarios y en el desarrollo de las manufacturas, tanto las vinculadas al campo como las que contribuyen a la prestación de servicios.’

‘Es importante el desarrollo de la industria de bienes de capital por su repercusión en la productividad del sector y su proyección como generadora de exportaciones.’

‘Las materias primas generadas por el agro deben recibir el mayor valor agregado que el avance de la investigación y el desarrollo permitan.’

‘En ese sentido, hay que promover la generación de una poderosa industria química basada no sólo en los cereales sino también en la utilización de sus desperdicios, como el marco de maíz, la cáscara de avena y otros que poseen un alto contenido de sustancias aprovechables y que un país productor como el nuestro no puede desperdiciar.’

‘La biotecnología y el desarrollo de semillas híbridas hay que considerarlos un tema estratégico para el desarrollo y la independencia del sector. También hay que dar un gran impulso a los cultivos orgánicos que tienen una importante perspectiva de proyectarse en los mercados consumidores de los países desarrollados.’

‘Debemos redoblar la promoción de la forestación para potenciar al país como productor de madera, celulosa y papel.’

'Mire Torcuato, si en la Argentina del 1 a 1, donde la producción local tuvo asimetrías cambiadas muy fuertes, hubiésemos protegido la producción propia, ahora no tendríamos este cuadro de desempleo y pobreza.'(...)

'Por medio de incentivos fiscales y financieros aceptados por la Organización Mundial de Comercio (OMC), hay que promover con particular intensidad las expoliaciones. Pero lo fundamental es la diagramación de una estrategia política y de comercialización para diversificar los productos y los

destinos a los fines de vender mayor valor agregado, reduciendo la participación relativa de los commodities en la oferta exportadora, evitando las fluctuaciones de precios tan frecuentes en esos mercados.'

'También hay que pensar en estructurar y capacitar a las agregadurías comerciales para que trabajen en estrecha relación con los sectores privados.'

(Kirchner, Néstor y Di Tella, Torcuato S., 2003)

Deuda y fuga: la valorización financiera como obstáculo al desarrollo

Por Laura Testa

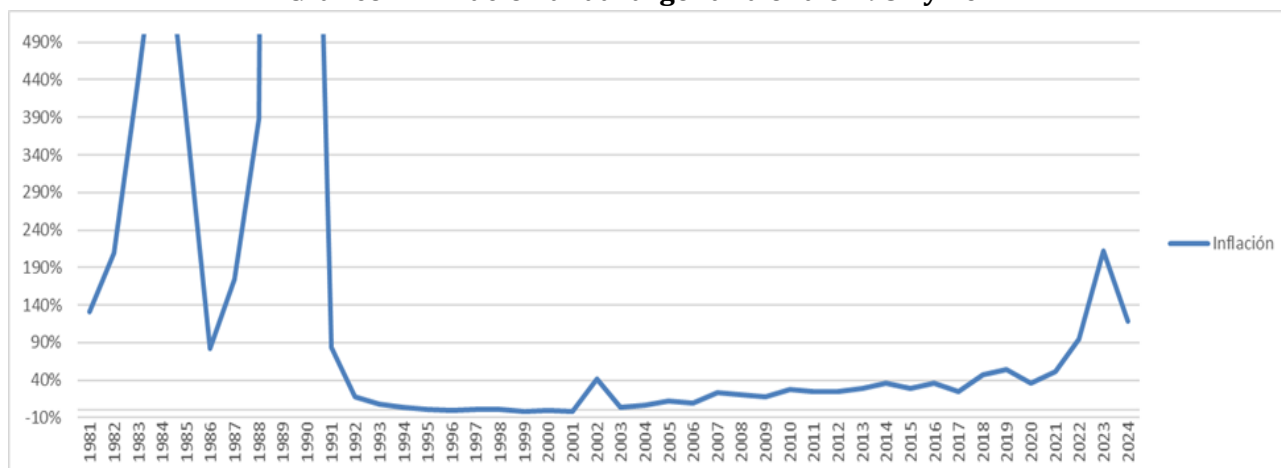
1. Introducción

Desde el retorno de la democracia en 1983, la economía argentina ha evidenciado de manera persistente dos fenómenos estructurales que condicionan su desarrollo: la restricción externa y la elevada inflación. Si bien estos problemas tienen antecedentes previos al período democrático, se toma dicho hito como punto de partida analítico por su relevancia institucional y política. En las últimas cuatro décadas, la Argentina ha atravesado ocho gobiernos elegidos por el voto popular, con orientaciones ideológicas, enfoques de política económica y alianzas sociales marcadamente diferentes. Sin embargo, todos ellos enfrentaron, de manera recurrente, una misma dificultad: la escasez de divisas —en particular, dólares

estadounidenses— y las tensiones inflacionarias asociadas.

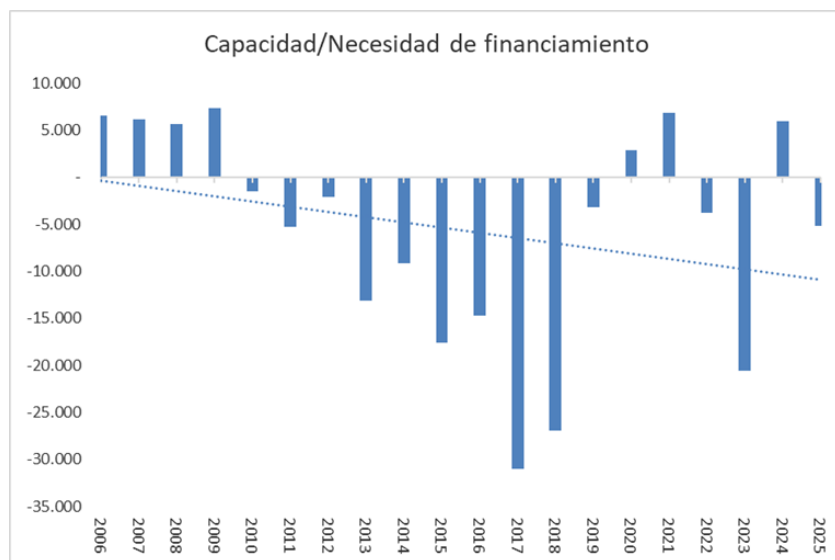
Este patrón de reiteración, más allá de las diferencias partidarias o doctrinarias, sugiere que tanto la restricción externa como la inflación no deben ser concebidas como fenómenos coyunturales ni atribuibles exclusivamente a errores de gestión. Por el contrario, constituyen manifestaciones de una estructura económica desequilibrada y dependiente, con un patrón de crecimiento que, al no generar de forma sostenida las divisas necesarias para financiar la expansión, se ve periódicamente interrumpido por crisis de balanza de pagos

Gráfico 1: Inflación anual argentina entre 1981 y 2024



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Gráfico 2: Cuadro de balanza de pagos argentino entre 2006 y primer trimestre 2025

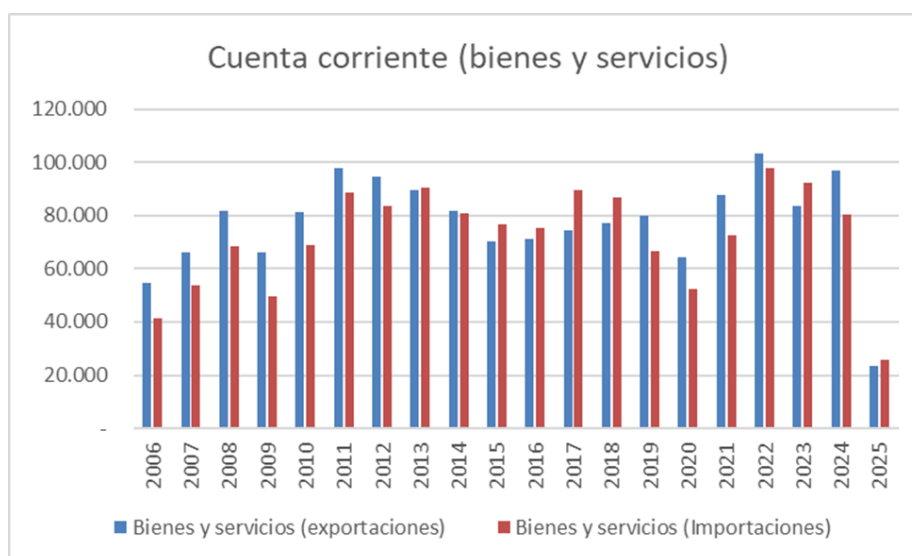


Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Acá vemos como entre el año 2006 y 2025, durante solamente 7 años se obtuvo un resultado positivo en torno a la balanza de pagos y por tanto capacidad de financiamiento, pero que en los 13 años restantes el resultado fue deficitario y se requirió equilibrar las cuentas, ya se por emisión de deuda, devaluaciones o pérdida de reservas.

En el siguiente cuadro, se muestra como la exportación de bienes y servicios, a pesar de ser superavitaria en la mayoría de los años (13 contra 7), la diferencia es muy poca para compensar la salida de dólares en torno a las otras cuentas de la balanza de pagos.

Gráfico 3: Cuenta corriente argentina entre 2006 y primer trimestre de 2025



Fuente: Elaboración propia en base datos.gob.ar

La restricción externa implica que, cuando la economía crece y se incrementa la demanda de importaciones —ya sea de insumos productivos, servicios o bienes asociados al turismo—, los dólares disponibles resultan insuficientes para sostener ese nivel de actividad. En esos contextos, la escasez de divisas genera presiones sobre el tipo de cambio y alimenta procesos inflacionarios, los cuales, a su vez, deterioran el poder adquisitivo, afectan la distribución del ingreso y ponen en riesgo la estabilidad política y social.

En este sentido, tanto la restricción externa como la inflación deben ser comprendidas no solo como desafíos económicos, sino como problemas estructurales que requieren abordajes de largo plazo. La persistencia de estos fenómenos, a pesar de los cambios de gobierno, indica la necesidad de revisar en profundidad los pilares del modelo económico argentino y avanzar hacia una transformación que permita superar los límites del actual régimen de acumulación.

Composición de la economía argentina

La economía argentina puede dividirse en tres grandes sectores con características, necesidades y capacidades diferenciadas. Esta segmentación —que se organiza según la capacidad de cada sector para generar o demandar divisas— permite comprender la dinámica estructural del ingreso y egreso de dólares en el país (Nicolini, 2016).

1. Sector no exportador

Este sector representa aproximadamente el 80 % del Producto Bruto Interno (PBI). Se compone, por un lado, de la industria orientada al mercado interno —que explica alrededor del 55 % del PBI— y, por otro, de los servicios públicos y privados no transables internacionalmente, que completan el 25 % restante. Dado que los servicios no generan ni demandan divisas de forma significativa, el análisis se focaliza en la industria no exportadora, clave para comprender las dinámicas asociadas a la restricción externa (Nicolini, 2016).

La industria orientada al mercado interno, aunque esencial para el abastecimiento local, presenta una limitación estructural: no genera divisas, pero sí las demanda en grandes volúmenes. Esto se debe a que, si bien Argentina produce una parte considerable de los bienes finales que consume, esa producción depende de insumos importados. A lo largo de sus cadenas de valor, estas industrias requieren bienes intermedios, equipamiento, repuestos y tecnología adquiridos en el exterior. En consecuencia, este sector necesita un tipo de cambio relativamente bajo para que sus costos no se disparen, dado que sus ingresos están denominados en pesos. Como advierte Nicolini (2016), esta característica explica que, en etapas de expansión económica, la demanda de divisas crezca de manera más que proporcional respecto del nivel de actividad.

Cuadro 1: composición de las importaciones en argentina:



Fuente: Elaboración propia en base a datos.gob.ar e INDEC

Se observa que la inflación se incrementa. Estudios empíricos muestran que, por cada punto porcentual de crecimiento del PBI, la demanda de divisas del sector industrial puede incrementarse hasta en tres puntos porcentuales, lo cual evidencia una elevada elasticidad de las importaciones respecto del crecimiento (Nicolini, 2016). En términos de empleo, este sector ocupa un lugar central en la economía nacional: contribuye significativamente al empleo formal privado, ofrece salarios promedio superiores a la media del conjunto de trabajadores registrados y exhibe mayores niveles de formalización que sectores como el comercio o los servicios personales. Asimismo, la industria posee un elevado efecto multiplicador, generando múltiples empleos indirectos en otras ramas de la economía.

Por último, cabe señalar que este sector presenta un alto grado de concentración económica, lo cual agrava los problemas vinculados al traslado de precios cuando se modifican las condiciones cambiarias. Esta dinámica será retomada más adelante en el análisis.

2. Industria exportadora

La industria orientada a la exportación representa aproximadamente el 5 % del PBI y cerca del 25 % de las exportaciones totales. Este sector enfrenta dificultades estructurales para competir en el mercado internacional, debido a un bajo nivel de innovación tecnológica, costos laborales relativamente elevados y una presión impositiva significativa. Por ello, requiere de un tipo de cambio real alto que compense dichas desventajas estructurales frente a países con mejor tecnología o menores costos (Nicolini, 2016). De allí se desprende la existencia de un segundo tipo de cambio de equilibrio, diferente del que necesita la industria orientada al mercado interno.

3. Sector agroexportador

El sector agroexportador explica aproximadamente el 15 % del PBI y el 60 % de las exportaciones totales. Se caracteriza por su baja demanda de mano de obra y su alta productividad, derivada de la fertilidad de la tierra y del uso de tecnologías de escala. Nicolini (2016) señala que este sector mantiene márgenes de rentabilidad incluso con tipos de cambio reales bajos, lo que lo convierte en el principal generador de divisas del país. No obstante, el capital migra hacia este sector a una velocidad menor que en otros países, lo que revela restricciones institucionales y estructurales. En síntesis, la coexistencia de estos tres sectores con requerimientos cambiarios divergentes constituye la base de las tensiones macroeconómicas persistentes de la economía argentina Nicolini (2016).

De acuerdo con el principio de rendimientos decrecientes establecido por David Ricardo en Principios de Economía Política y Tributación, a medida que se incorporan tierras menos fértiles al proceso productivo, el rendimiento marginal disminuye y el costo medio de producción aumenta. En este sentido, si inicialmente sólo se explotan las tierras más fértiles —por ejemplo, en la región pampeana— el costo por hectárea será bajo. Pero a medida que se incorporan tierras de menor calidad, el costo medio aumenta proporcionalmente.

El campo argentino podría exportar más de lo que actualmente exporta. Más adelante se analizarán las razones por las cuales el sector agroexportador no alcanza su capacidad plena de exportación. No obstante, lo central es que este sector puede operar con tipos de cambio reales muy distintos: aun con un tipo de cambio bajo logra exportar, mientras que con uno alto obtiene márgenes extraordinarios. Así, el agro encuentra condiciones de rentabilidad incluso en escenarios adversos, lo que define un tercer tipo de cambio de equilibrio.

El péndulo argentino

La coexistencia de estos tres sectores, con necesidades divergentes en materia cambiaria, da lugar a tensiones estructurales que se manifiestan en forma de oscilaciones cíclicas del tipo de cambio real y de la inflación. Este fenómeno ha sido caracterizado por Nicolini y Llosa (2016) como un “ciclo estructural del tipo de cambio real”, donde la economía alterna entre fases de apreciación y depreciación cambiaria según la dinámica del sector dominante.

En un escenario de tipo de cambio real bajo, favorable tanto para la industria no exportadora como para el sector agroexportador, se incrementa la actividad industrial y, con ella, la demanda de importaciones, turismo y bienes tecnológicos. Cuando el crecimiento supera la capacidad del sector agroexportador para generar divisas, se produce una caída de reservas internacionales que deriva en una devaluación. Esta devaluación, aunque mejora la competitividad de la industria exportadora, encarece los insumos importados de la industria orientada al mercado interno, generando aumentos de precios que reabsorben rápidamente las ganancias de competitividad (Nicolini, 2016).

El resultado es un ciclo recurrente de devaluación, inflación y nuevo atraso cambiario, que reproduce lo que Nicolini (2016) denomina el “péndulo argentino”: un movimiento pendular que alterna entre políticas de tipo de cambio bajo, que impulsan el consumo y el crecimiento hasta agotar las reservas, y devaluaciones que buscan corregir el desequilibrio externo, pero desatan inflación y pérdida del salario real. Este patrón cíclico afecta la inversión productiva, deteriora la distribución del ingreso y genera inestabilidad política y social, consolidando una economía que oscila sin alcanzar un equilibrio sostenible.

Consecuencias de las crisis por falta de dólares

Estas crisis recurrentes generan resentimiento en la economía y previsibilidad para aquellos que tienen espalda económica para llevarse una tajada

1) El endeudamiento externo como herramienta de política económica: usos y desvíos en la experiencia argentina

El endeudamiento externo, en sí mismo, no constituye una política negativa ni positiva per se; se trata de una herramienta de política económica que, bien empleada, ha contribuido históricamente al desarrollo de las naciones. A lo largo del tiempo, numerosos países han recurrido al crédito externo para financiar obras de infraestructura, promover la investigación científica y tecnológica, mejorar la conectividad territorial y apalancar procesos productivos orientados al desarrollo sostenible.

Sin embargo, la experiencia argentina ha estado marcada por un uso recurrentemente distorsionado del endeudamiento. Lejos de destinarse a inversiones estratégicas generadoras de divisas, la deuda externa ha sido frecuentemente utilizada como un mecanismo transitorio para paliar la escasez de dólares y contener, de forma parcial y temporal, los procesos de aceleración inflacionaria. Esta lógica ha derivado en una dependencia estructural del financiamiento externo, sin la correspondiente generación de capacidades productivas que permitan honrar los compromisos asumidos.

Cuando los recursos obtenidos mediante deuda no se canalizan hacia sectores que potencien la capacidad exportadora y generen divisas genuinas, el endeudamiento tiende a volverse insostenible en el mediano plazo. La consecuencia directa de esta dinámica ha sido la repetición cíclica de crisis de deuda, como la que estalló en 2001-2002, que llevó al país a incurrir en uno de los defaults más significativos de la historia económica contemporánea.

Desde el retorno de la democracia, Argentina ha debido renegociar su deuda en múltiples oportunidades. Actualmente, el país enfrenta nuevamente una relación deuda/PBI elevada con un flujo de vencimiento imposible de cumplir, producto de compromisos asumidos que, en su mayoría, no fueron orientados a fortalecer la infraestructura productiva ni a promover mejoras en la competitividad económica. Las divisas obtenidas no se utilizaron para construir rutas que faciliten el transporte de la producción, ni para fomentar la investigación científica y tecnológica, ni para desarrollar capacidades energéticas o tecnológicas estratégicas. En cambio, en muchos casos, esos recursos se fugaron del sistema económico, especialmente en contextos de crisis o ante la inminencia de nuevas devaluaciones, profundizando la vulnerabilidad externa del país.

2) Carry Trade y fuga de capitales

La valorización financiera constituye una modalidad específica de acumulación de capital en la cual el dinero no se valoriza a través de la producción, sino mediante la apropiación de una parte del excedente generado por la economía real. Su mecanismo central es la tasa de interés: el capital financiero obtiene rentabilidad sin pasar por el proceso productivo, capturando valor a partir de condiciones estructurales que favorecen la especulación. Para que este proceso se desarrolle, es indispensable que la tasa de interés interna se mantenga positiva en términos reales y superior a la tasa de interés internacional, medida en dólares y descontando la devaluación esperada. Este diferencial garantiza que los capitales financieros obtengan rendimientos superiores a los disponibles en otras economías.

A su vez, este esquema requiere que la tasa de interés local sea alta y rígida a la baja, lo cual se sostiene en la existencia de un tomador estructural de crédito: el Estado. Cuando el déficit fiscal es crónico y el endeudamiento a altas tasas se presenta como única alternativa para cerrar la brecha entre

ingresos y gastos, se configura un círculo funcional a la valorización financiera. El ciclo se completa cuando el Estado garantiza que las ganancias obtenidas no se verán afectadas por devaluaciones imprevistas ni por restricciones a la libre entrada y salida de capitales.

Desde 1976, Argentina ha atravesado distintos ciclos donde este modo de acumulación se impuso, articulado a procesos de endeudamiento externo, liberalización financiera y fuga de capitales. En todos ellos, el Estado desempeñó un rol central como garante de las condiciones que permitieron altos rendimientos financieros con bajo riesgo. En cambio, en los últimos años de la era Milei-Caputo, las medidas de atraso cambiario no persiguieron el fin de recuperar la actividad, sino que profundizaron una caída brusca de la actividad económica, como se analiza a continuación.

Primer ciclo: Dictadura cívico-militar (1976-1983)

El ciclo iniciado con la dictadura de 1976 marcó el inicio del modelo de valorización financiera en Argentina. A través de la Reforma Financiera impulsada por José Alfredo Martínez de Hoz. Se redujeron las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los aranceles a la importación, configurando un esquema aperturista, lo que forzó al Estado a acudir al endeudamiento externo.

El instrumento central de anclaje fue la denominada "tablita cambiaria", un esquema que anticipaba el tipo de cambio futuro y operaba como un seguro gratuito contra la devaluación, permitiendo arbitrajes rentables entre tasa de interés e inflación. Este esquema atrajo capitales especulativos que se beneficiaron de la diferencia entre las tasas internas y externas, en un contexto sin controles al movimiento de divisas. En 1981, con el fuerte atraso cambiario acumulado, estalló la burbuja financiera y se produjo una abrupta devaluación.

Este ciclo dio lugar a transformaciones estructurales de largo plazo, como la consolidación de la dolarización del comportamiento social. Mientras los sectores medios buscaron protegerse frente a la inflación, la alta burguesía y el capital extranjero multiplicaron su patrimonio a través de la especulación financiera y la posterior fuga al exterior. Para los grupos económicos locales, la deuda externa dejó de ser un instrumento de inversión productiva y pasó a ser un vehículo para la obtención de renta financiera.

Segundo ciclo: Gobierno de Carlos Menem (1989-1999)

Durante la década de 1990, la valorización financiera se reactivó con nuevas herramientas institucionales. La Ley de Convertibilidad, que fijó la paridad 1 peso = 1 dólar, funcionó como un nuevo seguro de cambio que incentivó el ingreso de capitales especulativos. El Estado asumió compromisos crecientes en dólares sin capacidad de emisión, consolidando su dependencia del financiamiento externo.

A ello se sumó una serie de reformas estructurales que desfinanciaron al Estado: reducción de aportes previsionales y la transferencia del sistema jubilatorio al sector privado (AFJPs), lo que obligó al Tesoro a endeudarse para cumplir con las obligaciones previsionales. La apertura comercial y la desregulación financiera completaron el esquema.

Durante este período se mantuvo el diferencial entre las tasas de interés internas y externas, y la liberalización total del mercado de capitales facilitó tanto el ingreso como la salida de divisas. En 2001, con el agotamiento del régimen, estalló la convertibilidad y se produjo una devaluación que evitó la dolarización completa de la economía.

Tercer ciclo: Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)

El tercer ciclo se inició con la eliminación de restricciones al movimiento de capitales y un rápido endeudamiento externo. Se redujeron retenciones a las exportaciones agro-mineras (salvo una baja parcial en soja), se pagó a los fondos buitres, y se eliminaron o redujeron impuestos a la importación, consumos suntuarios, el patrimonio y los dividendos.

En este contexto, el Banco Central absorbió pesos del mercado a través de LEBACs con tasas reales elevadas, muy superiores tanto a la inflación como a la devaluación esperada, generando fuertes incentivos para el ingreso de capitales financieros. El stock de LEBACs llegó a representar el 110% de la base monetaria.

El ciclo se desarrolló conforme al esquema clásico: ingreso de capitales para aprovechar tasas elevadas, estabilidad cambiaria garantizada, y posterior salida de divisas cuando se anticipó el cambio de condiciones. Este proceso volvió a poner en evidencia la relación directa entre endeudamiento externo y fuga de capitales, en un marco de desregulación cambiaria.

Cuarto ciclo: Gobierno Javier Milei (2023-actualidad)

En el ciclo actual, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permitió levantar el cepo cambiario e implementar un sistema de bandas que estabiliza el tipo de cambio dentro de márgenes preestablecidos. Esta previsibilidad, junto con tasas de interés reales elevadas, facilitó una nueva etapa de valorización financiera. Inversiones en pesos con cobertura cambiaria permitieron, en algunos casos, obtener rendimientos en dólares superiores al 8% mensual.

Consecuencias estructurales:

La valorización financiera, al fomentar la especulación y la fuga de capitales, impacta negativamente sobre la inversión productiva. Si bien no afecta el consumo de los sectores de altos

ingresos, reduce significativamente la reinversión interna de excedentes, estimada en una pérdida del 20 al 25%. Esta dinámica debilita la capacidad del país para sostener un proceso de desarrollo basado en la acumulación de capital productivo.

El aspecto más crítico de estos ciclos es que, una vez agotada la etapa de ingreso de capitales, el saldo neto de divisas resulta negativo: salen más dólares de los que ingresaron, lo que implica una pérdida neta de reservas internacionales y una mayor fragilidad externa. Este resultado se ve agravado por el hecho de que el Estado se endeudó para viabilizar el proceso, generando obligaciones futuras en moneda extranjera sin haber fortalecido la capacidad productiva y exportadora del país. Así, el legado de estos ciclos es una estructura económica más vulnerable, dependiente del financiamiento externo y con mayores restricciones al desarrollo autónomo.

Consecuencias de las crisis por default:

1) Aumento del gasto público:

En contextos de devaluaciones abruptas, algunos gobiernos adoptan políticas de expansión del gasto público con el objetivo de mitigar los efectos regresivos que dichas devaluaciones generan, particularmente en los sectores asalariados. Esta expansión busca compensar, al menos parcialmente, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores frente al beneficio relativo que obtienen los sectores exportadores.

Sin embargo, cuando el incremento del gasto no se encuentra respaldado por un aumento equivalente en la recaudación fiscal o por un mayor acceso al financiamiento en el mercado de capitales local, su financiamiento suele realizarse mediante emisión monetaria o impuestos que suelen entorpecer la economía. En economías ya debilitadas por la devaluación y marcadas por altos niveles de incertidumbre, esta emisión adicional tiende a acelerar aún más el proceso inflacionario,

profundizando los desequilibrios macroeconómicos existentes.

En consecuencia, los recursos emitidos con el fin de sostener el consumo de los sectores más vulnerables terminan, en muchos casos, siendo canalizados hacia la formación de activos externos por parte de los sectores de mayores ingresos, reproduciendo así dinámicas regresivas en la distribución del ingreso.

La repetición durante décadas de este ciclo de inflación, devaluación, recesión e incertidumbre genera, acumulativamente, mayor deuda externa, mayor pobreza, mayor presión fiscal sobre quienes no logran evadir, aumento de la economía informal y mayor incertidumbre. La acumulación de deuda externa disminuye la credibilidad acerca de la capacidad del sector público de repagar la deuda misma. De modo que el déficit fiscal solo se puede financiar con emisión monetaria, lo que eventualmente tiende a debilitar el peso y genera más incertidumbre.

Conclusión

Resulta evidente que, para superar los ciclos recurrentes de devaluaciones, procesos de alta inflación, endeudamiento y pobreza, Argentina debe encarar una reconversión profunda de su estructura económica. Este proceso debería orientarse a garantizar un flujo sostenido de divisas que posibilite el desarrollo de un entramado industrial dinámico y competitivo, capaz de generar empleo de calidad para toda la población.

En este marco, resulta imprescindible definir con claridad qué sectores de la economía serán priorizados en función de su relevancia estratégica. La protección del mercado interno mediante instrumentos como las barreras arancelarias puede justificarse no sólo por razones de soberanía, sino también por la necesidad de promover actividades con ventajas comparativas, actuales o potenciales. En efecto, incluso en aquellos casos donde tales

ventajas no se encuentran plenamente desarrolladas, la inversión en investigación, innovación y desarrollo tecnológico puede permitir su consolidación en el mediano y largo plazo.

La energía y los recursos naturales, particularmente el petróleo, el gas, el litio y la minería en general, constituyen sectores de especial relevancia en esta estrategia. La recuperación de YPF constituye un ejemplo significativo: a partir de dicha decisión se realizaron inversiones estratégicas que, a su vez, incentivaron la participación de empresas privadas,

tanto nacionales como internacionales, en la exploración y explotación de hidrocarburos.

Finalmente, el sector agropecuario, principal generador de divisas del país, requiere un rediseño de su esquema de exportaciones y retenciones. Si bien posee ventajas comparativas claras que le permiten incrementar su capacidad productiva y exportadora, el desafío consiste en encontrar un equilibrio que combine condiciones favorables para la rentabilidad del sector con políticas que resulten funcionales al desarrollo económico integral de la nación.

Bibliografía

- Nicolini, J. L., & Llosa, G. (2016). *The exchange rate cycle in Argentina*. *Journal of Post Keynesian Economics*, 39(4), 495–515. <https://doi.org/10.1080/01603477.2016.1243989>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC)
- Se consideró un índice de precios base 2015 construido a partir de las variaciones mensuales del IPC Nacional desde enero 2017 (INDEC), IPC-GBA (INDEC) de mayo a diciembre de 2016, las variaciones de los IPC Provinciales de las Provincias de San Luis, Córdoba y Neuquén y CABA desde enero de 2007 hasta abril de 2016 y el IPC GBA (INDEC) antes de 2007..

El rol del Estado en la generación de beneficios nacionales desde la electromovilidad y la energía exportable. Un ensayo crítico de la gestión de Milei

Por Hernán Herrera

1. Introducción

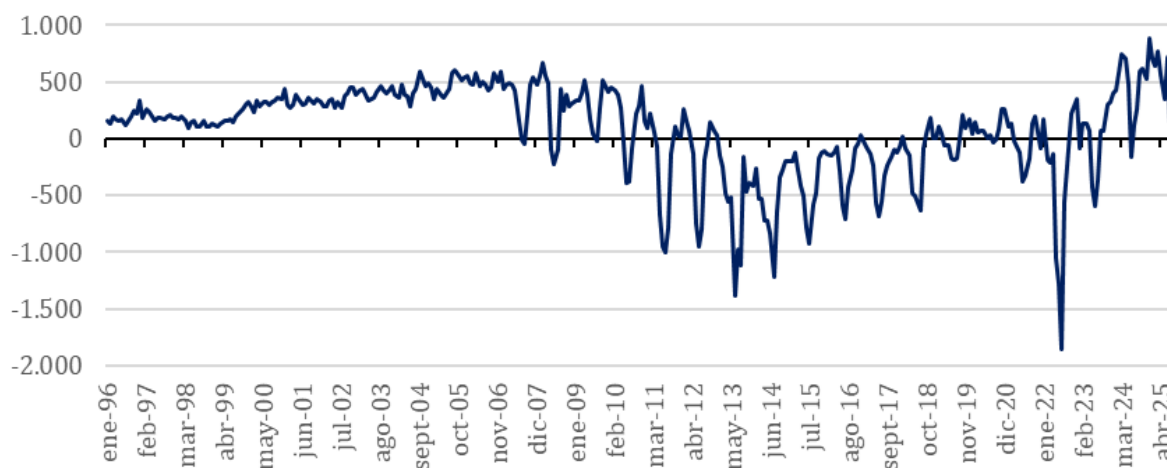
La Argentina entró en una fase en la que energía y minerales críticos ya generan superávit externo y acumulación de capacidad productiva. Entre enero y septiembre de 2025, el sector energético aportó un saldo externo positivo de USD 5.368 millones, con exportaciones por USD 8.131 millones (+13,1% interanual) e importaciones por USD 2.763 millones (-20,5%). Ese superávit energético acumulado mejoró en USD 1.656 millones frente al mismo período de 2024 y se sostiene desde hace quince meses consecutivos (Indec), configurando la racha más larga de saldo positivo en más de una década. Estas cifras –que hace cinco años no existían– muestran que la renta energética y minera ya es uno de los factores que están señalados para ordenar la macroeconomía argentina, no una promesa abstracta. Como se puede ver (gráfico 1), la evolución reciente de los saldos comerciales

energéticos tiene un crecimiento continuo y está asociada al descubrimiento y desarrollo de Vaca Muerta, conducido por YPF bajo control estatal, desde 2012.

La cuestión entonces, ahora, no es si hay recursos, la cuestión es quién los controla, cómo se los impulsa y quién los distribuye pensando en mayores exportaciones, en capacidades productivas locales y bajo qué marco institucional se administran las divisas que generan. Dicho de otra forma: si esa renta sirve para sostener el sendero macro (balanza de pagos, reservas, tipo de cambio, precios de la energía, salarios reales) y financiar un cambio estructural en la matriz productiva, o si se consolida un modelo de enclave exportador donde los dólares salen del subsuelo nacional pero no ingresan al circuito nacional.

Saldo comercial energético, mensual, en millones de dólares.

Fuente: Indec



Este artículo sostiene que la respuesta depende críticamente del Estado: de empresas públicas que operan en sectores estratégicos (YPF, YPF Litio, Nucleoeléctrica Argentina S.A.), de infraestructura energética y logística asociada (oleoductos, gasoductos, puertos, tecnologías sectoriales, infraestructura en general), de instrumentos regulatorios (política cambiaria, régimen fiscal a la exportación de recursos naturales, exigencias de contenido local), y de una arquitectura institucional que permita transformar renta extraordinaria en base tecnológica, empleo calificado y densidad productiva local. Este es precisamente el tipo de rol que Mariana Mazzucato denomina “Estado emprendedor”: un Estado que no se limita a corregir fallas de mercado ex post, sino que invierte tempranamente, orienta sectores y asume riesgo tecnológico en las etapas donde el capital privado no entra solo, y además captura parte del retorno (Mazzucato, 2015). Ese rol es condición para que la riqueza energética y mineral se convierta en desarrollo y no únicamente en extracción.

En línea con esa lógica, Andrés López et al, plantean que para aprovechar el litio Argentina necesita una estrategia deliberada de construcción decapacidades tecnológicas e industriales aguas abajo, en articulación entre empresas públicas, universidades, centros tecnológicos y el sector privado, de modo tal que el país no quede reducido al suministro de carbonato de litio “en boca de salar” sino que pueda integrarse en eslabones de mayor complejidad como materiales activos, celdas o directamente baterías (López, Obaya, Pascuini & Ramos, 2016; López, 2024, López, 2002). Esa En Vaca Muerta –segunda reserva mundial de gas no convencional y cuarta de petróleo no convencional– la producción de crudo alcanzó alrededor de 524.770 barriles diarios en agosto de 2025, frente a 402.706 barriles diarios en agosto de 2024, es decir un crecimiento interanual del 30,3%. Ese salto productivo explica que hoy “dos de cada tres barriles” de petróleo extraído en Argentina provengan de la cuenca neuquina no convencional.

discusión no es sectorial, es efectivamente, macroeconómica y geopolítica geopolítica.

Sobre esa base, este trabajo analiza ocho dimensiones interrelacionadas: transición energética y minerales críticos; el rol de YPF y Vaca Muerta; la cuestión litio; la situación de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y otras firmas estatales de alta complejidad tecnológica; la infraestructura física que convierte reservas en divisas; la balanza de pagos, el RIGI y la cuenta financiera; la relación entre empleo, salarios y productividad; y la disputa por la captura nacional de la renta y las capacidades tecnológicas. El enfoque es técnico-económico y se apoya en datos actualizados a octubre de 2025.

1. Transición energética y recursos críticos en Argentina

La transición energética global, motorizada por la electrificación del transporte, el almacenamiento de energía y la descarbonización gradual de las matrices eléctricas, elevó el valor estratégico de dos grandes conjuntos de activos donde Argentina tiene posición estructural:

- i) hidrocarburos no convencionales (petróleo y gas de Vaca Muerta) y
- ii) minerales críticos como litio y cobre, necesarios para baterías, redes eléctricas y equipamiento de electromovilidad (Baruj et al., 2022; López et al., 2016).

La dinámica no es marginal: el complejo hidrocarburífero ya está empujando las exportaciones energéticas a tasas de dos dígitos y, al mismo tiempo, sustituyendo importaciones de gasoil y GNL que históricamente drenaban divisas. Al mismo tiempo, la reversión del Gasoducto Norte comenzó a permitir el envío de gas de Vaca Muerta hacia el norte argentino y, en algunos casos, incluso a mercados regionales como Brasil a través de la

infraestructura boliviana, habilitando exportaciones de gas natural argentino al exterior durante 2025

En minerales críticos, Argentina integra con Bolivia y Chile el denominado “triángulo del litio”, que concentra la mayor parte de las reservas globales de salmueras de litio, insumo clave de las baterías recargables para vehículos eléctricos. Las exportaciones argentinas de litio superaron los USD 800 millones en 2023, dirigidas sobre todo a China, Estados Unidos y Corea, y la cartera de proyectos en Salta, Jujuy y Catamarca incluye más de 50 iniciativas en distintas fases, de las cuales cuatro ya se encuentran en operación comercial (Casalis & Herrera, 2024a). El cobre, crítico para cableado, motores eléctricos y transmisión, también muestra una cartera de inversiones incipiente particularmente en San Juan y Catamarca.

Esta dotación de recursos energéticos y minerales sitúa a la Argentina en una posición macroeconómica diferenciada: le brinda una fuente adicional y creciente de divisas no agroindustriales. Tradicionalmente, la restricción externa argentina descansaba casi por completo en el desempeño del complejo sojero y agroexportador. Hoy, la energía y los minerales estratégicos están empezando a jugar el mismo rol de oferta estructural de divisas que históricamente tuvo el agro, con la diferencia de que

de agregación de valor y creación de fondos soberanos intergeneracionales, como Noruega en petróleo o, más cerca de la Argentina, la propia CODELCO en Chile respecto del cobre, que financia infraestructura y gasto público (Chang, 2002; Gobierno de Chile, 2023). El problema, por tanto, no es el recurso en sí. El problema es la ausencia o la captura del Estado.

2. YPF, Vaca Muerta y el anclaje macroeconómico

YPF es el caso testigo del rol del Estado empresario en sectores estratégicos. Fue la primera petrolera

se trata de sectores intensivos en ingeniería, capital fijo e infraestructura tecnológica. Esto abre, objetivamente, una ventana de diversificación de la canasta exportadora y de la estructura productiva (Herrera, 2023; Argentina Productiva 2030, 2023).

Es por ello que emerge una oportunidad interesante: aplanar y elevar la liquidación de divisas durante el año es indispensable para salir de los ciclos de especulación y presión cambiaria, que históricamente tuvieron influencia sobre las decisiones del Estado. Se necesitan dispositivos que logren que la liquidación sea mucho más pareja durante los meses del año. Eso impediría la existencia de ciclos de apreciación, especulación y presión devaluatoria.

Por otro lado, la pata productivista también cumple un rol, esa ventana puede cerrarse si el país queda fijado en etapas extractivas de bajo valor agregado. La literatura latinoamericana discute desde hace décadas la “maldición de los recursos naturales”: la idea de que la abundancia de recursos puede traducirse en primarización, fragilidad macro y captura de renta por élites o capital extranjero, en lugar de desarrollo nacional (Sánchez, Pereyra & Miller, 2019). Esta hipótesis debe ser matizada. Existen ejemplos de países ricos en recursos que lograron evitar esa trampa vía instituciones estatales robustas y una política deliberada

estatal integrada en el mundo en 1922 (Belini & Rougier, 2008), sufrió la privatización en los años 90s y volvió a recuperar mayoría estatal en 2012 tras el deterioro de reservas y la necesidad de recomponer la seguridad energética (Carbajales, 2021). En la actualidad, YPF no solo produce cerca de un tercio del petróleo argentino, sino que opera la mayor parte de la producción no convencional de Vaca Muerta y coordina inversiones clave en infraestructura asociada a esa producción. En agosto de 2025, la producción operada por YPF rondó los 373.000 barriles diarios, y la formación neuquina en su conjunto aportó alrededor del 64% del crudo del país. Esa escala permite explicar por

qué el superávit energético argentino se consolidó en 2024-2025 tras más de una década de déficit y compras externas sistemáticas de energía.

Algún anclaje macro ya está visible. En 2025, las exportaciones de crudo y gas crecieron a tasas superiores al 40% interanual en volumen, mientras que las importaciones energéticas cayeron porque el gas interno sustituyó compras de gasoil y GNL en invierno. Es decir: a diferencia de la etapa 2011-2014 (o más cerca, en 2022), cuando el déficit energético obligó a usar reservas del Banco Central para importar combustible, hoy el complejo hidrocarburífero funciona como proveedor neto de divisas. Este giro no es neutral desde el punto de vista de la balanza de pagos, porque reduce la vulnerabilidad externa estructural de la economía (Fanelli, 2019).

Además, YPF articula la construcción de infraestructura crítica: oleoductos para evacuar crudo de Vaca Muerta hacia la costa atlántica (como el proyecto Vaca Muerta Sur) y ampliaciones en el sistema de transporte de gas para llevar gas neuquino hacia centros de demanda y, potencialmente, exportación. Estas inversiones en evacuación física son condición necesaria para sostener el crecimiento de exportaciones energéticas. Sin esa expansión logística, el cuello de botella deja de ser geológico y pasa a ser de transporte.

Por eso la eventual privatización, desintegración o venta en partes de YPF no es un tema contable ni ideológico; es estructural. Un retiro del Estado del núcleo de decisión de YPF implicaría ceder la capacidad de definir ritmos de producción, asociaciones tecnológicas, condiciones de reinversión local y, sobre todo, la forma de canalizar la renta hidrocarburífera hacia objetivos macroeconómicos nacionales. Este es exactamente el tipo de rol que Mazzucato identifica como distintivo del Estado emprendedor: el Estado no solo corrige fallas, sino que construye mercados, asume riesgo tecnológico inicial y orienta la captura

de beneficios hacia fines públicos (Mazzucato, 2015).

3. El complejo litio: captura de valor, regulación y articulación tecnológica

El litio condensa la disputa por el valor agregado. Argentina exporta mayormente carbonato e hidróxido de litio, es decir insumos intermedios que luego se utilizan para fabricar celdas y baterías de ion-litio en otros países. La mayor parte del valor de una batería (y por extensión, del vehículo eléctrico) no está en la salmuera ni en el carbonato técnicamente purificado, sino en etapas posteriores de la cadena: materiales activos de cátodo/ánodo, celdas y módulos, sistemas de gestión electrónica. López y coautores documentaron ya en 2016 que, sin políticas industriales deliberadas, Argentina corre riesgo de quedar atada al eslabón de menor complejidad tecnológica y menor captura de renta, reproduciendo un patrón extractivo clásico (López et al., 2016). Esa advertencia sigue vigente en 2025.

La respuesta institucional argentina comenzó a delinearse con la creación de YPF Litio S.A. en 2022 como subsidiaria de YPF, con la misión explícita de intervenir en exploración, explotación y – crucialmente– en la industrialización parcial del litio junto a Y-TEC (la empresa de I+D de YPF y el CONICET) y universidades nacionales. La lógica era replicar, en el litio, el modelo que hizo de YPF un actor tecnológico en petróleo y gas no convencional: participación estatal temprana en un sector intensivo en conocimiento, para construir capacidades locales aguas abajo. Esta estrategia es coherente con la visión de Mazzucato sobre el Estado como inversor paciente en tecnologías de frontera que el capital privado no desarrolla localmente si no tiene una señal clara de demanda (Mazzucato, 2015), y con la idea de un sistema nacional de innovación que articule ciencia pública, empresas públicas y proveedores privados nacionales (López, 2024).

El giro desregulatorio reciente bajo el gobierno de Milei pone tristemente en riesgo esa arquitectura. El Poder Ejecutivo, desde 2024-2025, anunció la intención de “desprenderse” de YPF Lito, simultáneamente a una política de incentivo a la inversión extranjera directa en minería que incluye desgravaciones y libre disponibilidad de divisas (Casalis & Herrera, 2024a). En agosto de 2025, a través del Decreto 563/2025, el gobierno redujo a 0% los derechos de exportación para 231 posiciones arancelarias mineras que hasta entonces tributaban en torno al 8%. Solo el litio y la plata mantuvieron una alícuota del 4,5%. Esta medida implica una transferencia fiscal inmediata hacia el sector minero-exportador: en 2024 esas retenciones (derechos de exportación, en rigor) mineras habían aportado al Tesoro cientos de miles de millones de pesos corrientes. El argumento oficial es “mejorar competitividad”, sobre todo para proyectos de cobre y litio. El efecto económico de fondo es reducir la porción de renta minera que captura el Estado nacional. Lo que perjudica la distribución del ingreso sectorial en base a una mayor debilidad del Estado nacional para generar mecanismos de promociones industriales estratégicas.

Esto tiene tres implicancias. Primero, limita la capacidad fiscal para financiar infraestructura energética y tecnológica asociada (gasoductos, nodos logísticos, plantas piloto de materiales activos), que son insumos necesarios para subir en la cadena de valor. Segundo, debilita la posibilidad de crear un fondo soberano que capitalice parte de esa renta –tomando como referencia el fondo petrolero noruego– para financiar inversión en ciencia, tecnología e infraestructura estratégica (Herrera, 2023). Tercero, refuerza un esquema de enclave: las provincias del NOA reciben regalías y canon, pero la mayor parte de la captura de valor agregado sigue ocurriendo fuera del territorio nacional, en plantas de materiales y gigafábricas de baterías ubicadas en Asia, Norteamérica o la UE.

El riesgo es caer en un “neoextractivismo desregulado”: un esquema donde el Estado renuncia

a condicionar la explotación (Gudynas, 2009), no exige encadenamientos productivos locales ni transferencia tecnológica, y al mismo tiempo renuncia a buena parte de la renta fiscal. Ese modelo no solo posterga la industrialización; también erosiona la legitimidad social del propio proyecto extractivo en las provincias productoras, porque la población local percibe los costos ambientales e hídricos sin ver proporcionalmente los beneficios en empleo calificado e infraestructura. (Arias Alvarado, Díaz Paz, Salas Barboza & Seghezze, 2022).

En síntesis: o el litio se convierte en palanca tecnológica y productiva nacional mediante empresas públicas articuladas con el sistema científico y proveedores locales, o se consolida como otro enclave primario con baja apropiación de renta y débil derrame territorial. La discusión es económica, y por tanto se dirime en la arena política.

4. NA-SA, control tecnológico estratégico y soberanía energética

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan alrededor del 7% de la generación eléctrica del país. Es un activo de altísimo contenido tecnológico: construcción, operación, extensión de vida útil de centrales, gestión del combustible nuclear y formación de cuadros técnicos especializados. Ese acervo es, en términos de complejidad productiva, uno de los núcleos más sofisticados que tiene la Argentina. Históricamente, NA-SA y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) han permitido sostener capacidades de ingeniería nuclear, fabricar componentes críticos y exportar servicios de alto valor agregado (Carbajales, 2021).

En 2025, el Poder Ejecutivo decidió avanzar en una privatización parcial de NA-SA. Mediante el Decreto 695/2025, publicado a fines de septiembre, el gobierno autorizó la venta en bloque de hasta el 44% de las acciones de la compañía mediante

licitación pública nacional e internacional, reservando un 5% adicional para un Programa de Propiedad Participada de trabajadores, con el argumento de que el Estado conservaría así el control con el 51% restante. Funcionarios justificaron la medida en la necesidad de atraer capital privado para financiar nuevos desarrollos (por ejemplo, un reactor modular de potencia y la eventual ampliación del parque nuclear).

Desde el punto de vista económico-tecnológico, el debate supera la cuestión fiscal inmediata. Privatizar parcialmente NA-SA abre la puerta a condicionar decisiones estratégicas de largo plazo – como cronograma de nuevas centrales, localización industrial de proveedores nucleares, política de gestión de residuos radiactivos y hasta la formación de especialistas– a objetivos de rentabilidad privada. El riesgo, señalado por trabajadores del sector y especialistas del área nuclear, es que se debilite la gobernanza pública de una infraestructura crítica, se introduzca presión de corto plazo sobre activos de altísimo ciclo de vida y se comprometa la continuidad de las capacidades soberanas acumuladas durante décadas. En un contexto en el que Estados Unidos ha ganado injerencia en las decisiones del gobierno de Javier Milei, perjudicando la soberanía energética local. En este frente, entra la discusión por la explotación del uranio local. La Argentina puede asumir un rol en la geopolítica mundial, negociando correctamente con las potencias, lo contrario a lo que propone el gobierno de Milei, que pretende convertir al sector en “granero energético” del mundo.

Es importante notar que NA-SA no es un caso aislado. ARSAT (telecomunicaciones satelitales y datos), INVAP (tecnología nuclear y satelital), YPF Litio y Y-TEC forman parte de un mismo ecosistema estatal-tecnológico que opera en fronteras tecnológicas donde el mercado argentino, por escala, no invierte espontáneamente. Ese ecosistema sostiene soberanía en órbitas críticas: comunicaciones satelitales, generación eléctrica nuclear, ciberseguridad de redes energéticas,

exploración y modelado geológico, etc. Frente a esto, la privatización parcial o total de NA-SA no debería ser leída como un mero traspaso accionario sino como un cambio de régimen: del Estado como arquitecto de capacidades estratégicas al Estado como vendedor de activos para obtener caja de corto plazo (Pryke, 2017).

5. Infraestructura energética y logística: GPNK, reversión del Gasoducto Norte y cuellos de transporte

La renta energética no se materializa sin infraestructura. El cuello de botella actual no es geológico –las reservas están, y los recursos incluso más– sino físico: capacidad para evacuar petróleo y gas desde Neuquén, procesarlo, llevarlo al sistema troncal, abastecer la demanda interna y exportar excedentes. De ahí la centralidad de tres grandes obras:

- i) la ampliación del sistema de oleoductos desde Vaca Muerta hasta puertos atlánticos;
- ii) el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y sus ampliaciones, que incrementan el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el centro del país; y,
- iii) la reversión del Gasoducto Norte, que invierte el flujo histórico del sur al norte para sustituir gas importado de Bolivia por gas.

El GPNK (rebautizado oficialmente por la actual administración con otro nombre, pero funcionalmente el mismo corredor troncal desde Tratayén en Neuquén hasta Salliqueló en Buenos Aires) fue diseñado con etapas sucesivas de compresión y ampliación que, una vez completadas, podrían casi cuadruplicar la capacidad actual de transporte hasta alrededor de 39 millones de m³ diarios. Esa expansión permitiría desplazar completamente importaciones invernales de gasoil y GNL para generación eléctrica y calefacción, y

liberar volúmenes exportables estacionales. La reversión del Gasoducto Norte, a su vez, es crítica para abastecer de gas neuquino al NOA y al centro-norte del país ante el declino de la producción boliviana y la caída de las entregas desde Bolivia. Además, esa reversión es la que habilitó durante 2025 las primeras exportaciones de gas argentino a Brasil vía Bolivia, abriendo una vía de integración energética regional inédita.

El cuadro hoy es dual. Por un lado, existe una oportunidad concreta de consolidar a la Argentina como exportador neto de gas natural y crudo no convencional, con capacidad de abastecer la demanda interna a precios competitivos y de colocar excedentes en la región. Por otro lado, la ejecución de las obras está siendo sometida a un giro de política pública: parte de la ampliación del sistema de gasoductos y de las estaciones compresoras quedó en suspenso o fue ralentizada durante 2025, a la espera de “financiamiento privado”, y las contratistas de la reversión del Gasoducto Norte vienen alertando sobre demoras de pago del Estado nacional y riesgo de parálisis a pesar del carácter estratégico del ducto para el abastecimiento invernal del NOA.

Esto revela un problema estructural: la infraestructura que convierte recursos en divisas es, casi por definición, infraestructura de red, con retornos sociales y macroeconómicos que exceden el flujo de caja inmediato de cada tramo de caño. Dejar estas inversiones libradas a la lógica de mercado puro ¹ implica subinvertir en etapas críticas (estaciones compresoras, ramales secundarios, ampliaciones troncales) y correr riesgos de desabastecimiento interno cuando la temperatura cae o la demanda industrial sube. El Estado, vía empresas como Energía Argentina S.A. (ENARSA) y con financiamiento multilateral y/o de un eventual fondo soberano, debería sostener y

coordinar estas obras porque son la condición material para que Vaca Muerta, el litio y el cobre se transformen en divisas estables y no en un cuello logístico recurrente.

6. Balanza de pagos, regulación financiera y el RIGI

El alivio sobre la balanza de pagos es ya observable. En los primeros nueve meses de 2025, el saldo energético positivo de USD 5.368 millones contribuyó de manera directa al superávit comercial total de la Argentina. Dicho saldo, cabe mencionar, se consigue en un contexto de ajuste sobre variables claves de la economía y el gasto público. Ese ajuste se confirma en la caída industrial de 10% sobre 2023, de 24% en construcción, de más de 80% en obra pública, y de innumerables datos de caída de consumo de las familias.

En este sentido, además, la estructura regulatoria actual corre el riesgo de neutralizar esa ganancia macro. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en la Ley de Bases (Ley 27.742), establece un conjunto de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de gran escala en sectores como el energético y minero. Entre ellos se encuentra la “estabilidad regulatoria” por 30 años y un esquema de incentivos cambiarios que autoriza a los Vehículos de Proyecto Único (VPU) a mantener en el exterior, con libre disponibilidad, una proporción creciente de las divisas obtenidas por exportaciones sin obligación de ingresarlas ni liquidarlas en el mercado de cambios local: 20% a partir del segundo año, 40% a partir del tercero y 100% a partir del cuarto año desde la puesta en marcha del proyecto.

Desde el punto de vista macroeconómico, el RIGI dentro de la Ley Bases, implica una desvinculación creciente entre la generación de divisas reales en la

¹ Los oleoductos con crudo para exportación crecen más rápido que el gas para la energía eléctrica local.

cuenta corriente (exportaciones de gas, petróleo, minerales críticos) y la acumulación de reservas internacionales del Banco Central. En otras palabras, el país puede registrar un superávit comercial energético elevado, pero no ver todo ese superávit transformado en reservas ni en oferta de dólares en el mercado oficial. El resultado práctico es que el BCRA pierde capacidad de usar la bonanza energética para estabilizar el tipo de cambio, anclar expectativas y sostener salarios reales en términos de poder de compra externo. Dado el historial argentino de crisis cambiarias gatilladas por escasez de reservas, este punto es crucial.

El artículo 198 de la Ley de Bases es particularmente sensible porque consagra la libre disponibilidad de las divisas generadas por estos proyectos en el exterior, mencionado más arriba, prohibiendo imponer restricciones futuras a esos flujos (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal [CPACF], 2024). En términos de balanza de pagos, se institucionaliza un mecanismo por el cual la renta extraordinaria de recursos estratégicos puede “fugarse legalmente” antes de convertirse en respaldo macroeconómico. Es decir, se formaliza un esquema de enclave financiero: el recurso se extrae localmente, se exporta, pero las divisas quedan fuera del alcance de la política económica nacional durante años.

El segundo componente relevante es el frente fiscal-minero. La reducción a 0% de los derechos de exportación para 231 posiciones mineras –manteniendo apenas una alícuota del 4,5% para litio y plata–, decidida en agosto de 2025, disminuye de manera inmediata la participación del Estado en la renta minera. Cuando esto se combina con el régimen cambiario del RIGI, el resultado es doblemente problemático: baja captura fiscal interna y libre disponibilidad externa de las divisas. En términos de economía política, el Estado asume el costo ambiental, territorial y macroeconómico del proyecto (impacto en agua en salares, conflictividad local, presión sobre infraestructura pública),

mientras desarma las herramientas clásicas de apropiación y reinversión nacional de la renta.

Este marco difiere de las experiencias exitosas en países que convirtieron recursos naturales en estabilidad macro y desarrollo. Noruega, por ejemplo, obligó desde el inicio a canalizar la renta petrolera a través de la empresa estatal (Statoil en su momento) y luego de un fondo soberano estrictamente regulado, maximizando la apropiación doméstica de la renta y esterilizándola para evitar apreciaciones cambiarias excesivas (Herrera, 2023). Chile, en cobre, mantuvo a CODELCO bajo control estatal para asegurar un flujo fiscal estratégico y, solo más recientemente, está transitando hacia un rol estatal mayor en litio, buscando asociarse con privados bajo condiciones fijadas por el Estado (Gobierno de Chile, 2023). En la Argentina post-2024, el RIGI y el artículo 198 avanzan en dirección inversa.

Estas líneas no buscan negar la herramienta de un RIGI para atraer inversiones externas en sectores estratégicos donde distintas corporaciones multinacionales tienen experiencia y capacidad de ejecución de proyectos con mucha mejor eficiencia y velocidad que los capitales locales. Pero sí pone en duda los aspectos mencionados aquí, que fueron aprobados en el RIGI actual.

La arquitectura institucional que hoy se intenta consolidar con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tiene un antecedente histórico directo en la política de apertura irrestricta al capital externo implementada durante la última dictadura militar. La Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382, sancionada en 1976 bajo la conducción económica de Martínez de Hoz, equiparó plenamente a los capitales extranjeros con los nacionales, permitió especulaciones extranjeras y locales monumentales, garantizó la libre remisión de utilidades al exterior y aseguró un trato fiscal y regulatorio estable orientado a “dar previsibilidad” al inversor externo (Bosisio, 2014). Ese esquema buscó atraer divisas sin exigir integración

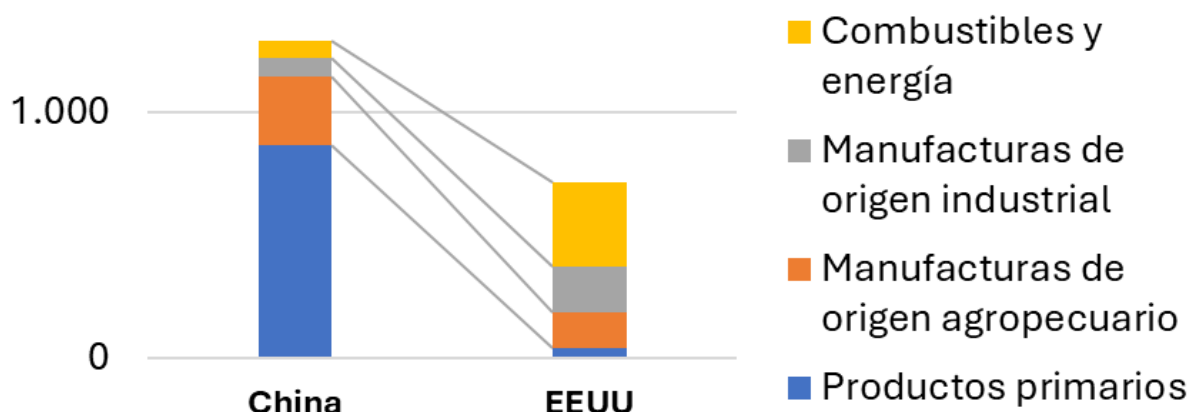
productiva, transferencia tecnológica ni encadenamientos locales, y se complementó con la desregulación financiera de 1977 que habilitó la valorización especulativa y la fuga sistemática de capitales (Bosisio, 2014).

El RIGI reproduce esa misma lógica en condiciones actuales: concede estabilidad normativa por décadas, reduce o elimina la carga tributaria efectiva sobre grandes proyectos extractivos y, mediante disposiciones como el artículo 198 de la Ley Bases, permite que las divisas generadas por las exportaciones no se liquiden en el mercado de cambios local durante varios años. En términos macroeconómicos, esto implica ceder capacidad de capturar y orientar la renta de recursos estratégicos hacia objetivos de industrialización nacional y reducción de la restricción externa. En ambos casos —1976 y el RIGI actual— el Estado se redefine como garante de la rentabilidad del capital transnacional en sectores clave, antes que, como planificador del desarrollo, desplazando el interés público de largo plazo en favor de la lógica de enclave exportador (Bosisio, 2014). La desagregación bilateral (ver gráfico 2) revela un sesgo estructural que el actual esquema de política profundiza en lugar de corregir. Recordemos que somos sustituibles con Estados Unidos (que también tiene producción agropecuaria, y es más competitivo industrialmente), mientras con China tenemos algunas oportunidades adicionales, con alguna complementariedad mayor, que a su vez no estamos explotando. Con China predominan primarios y MOA (manufacturas de origen agropecuario): flujo de divisas inmediato, pero bajo contenido tecnológico y elevada exposición a shocks (climáticos, sanitarios, paraarancelarios). Con EE. UU. la tracción es combustibles/energía y, en menor medida, MOI (manufacturas de origen industrial): una ventana para escalar hacia midstream/downstream (transporte, procesamiento, ingeniería, servicios intensivos en conocimiento). Sin embargo, el dispositivo regulatorio de la administración Milei —RIGI y

artículo 198— desacopla la exportación de la oferta efectiva de divisas y abarata la captura de renta (estabilidad fiscal prolongada, libre disponibilidad, menor presión tributaria efectiva), maximizando el atractivo del enclave, pero minimizando los encadenamientos. Resultado probable: más volumen a EE. UU. y mayor concentración sectorial, sin transmisión robusta a la inversión industrial, proveedores locales ni acumulación de reservas; y persistencia del sesgo primario con China, al que además se le agrega fricción política que encarece financiamiento e infraestructura. En términos de restricción externa, es la paradoja del “superávit que no entra” y, en términos productivos, el riesgo de enfermedad holandesa si el auge energético aprecia el tipo de cambio real sin contrapesos en productividad. Por ahora el riesgo más importante es el primero. El enfoque oficial de la administración Milei confía en que “la desregulación derrama”, pero las ecuaciones macro y micro no cierran sin condicionalidades. Para que la nueva canasta hacia EE. UU. reconfigure de verdad la balanza de pagos y la estructura productiva, se requieren: reglas de ingreso y cronogramas de liquidación (para convertir exportación en reservas); contenido local verificable y transferencia tecnológica en contratos (para transformar renta en capacidades); participación pública en nodos críticos (YPF, Y-TEC/YPF Litio, NA-SA; transporte, datos, estándares) y un fondo soberano que esterilice picos y financie infraestructura e I+D. En paralelo, con China conviene desideologizar y condicionar: estabilidad comercial y financiera a cambio de localizar eslabones de valor (materiales activos, reciclaje, equipamiento). Sin este giro, el “modelo Milei” tiende a consolidar un binomio primario-extractivo con alta volatilidad cambiaria y bajo impacto sobre salarios y productividad, reemplazando una dependencia por otra.

Grafico 2

Exportaciones argentinas por rubro (acumulado enero-septiembre de 2025, en millones de USD). Fuente: Indec



7. Empleo, salarios, productividad y organización territorial

El desempeño de hidrocarburos no convencionales ya está impactando en la estructura ocupacional regional. Entre 2018 y 2023, el empleo registrado en extracción de petróleo y gas en Neuquén y provincias asociadas creció por encima del 30%, acompañado por niveles salariales formales muy superiores al promedio nacional, producto de la alta productividad y la negociación colectiva sectorial (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2024). La expansión de Vaca Muerta, y en menor medida de los proyectos de litio, generó empleos directos e indirectos de alta calificación (ingeniería de perforación, operación de plantas de tratamiento, química de salmueras de litio, mantenimiento electromecánico especializado), además de servicios conexos (logística, metalmecánica, software industrial). Sin embargo, la experiencia reciente en Añelo (Neuquén) y en localidades del NOA cercanas a salares de litio

confirma que la dinámica no es automáticamente virtuosa. El shock de demanda energética puede tensionar infraestructura urbana, vivienda, servicios públicos y ambiente. En el NOA, las tensiones por el uso de agua dulce y salobre en salares de altura abren conflictos con comunidades originarias y productores locales (Arias Alvarado et al., 2022). En Neuquén, el aumento acelerado de población presiona sobre la oferta de vivienda y sobre redes viales y sanitarias, y expone la necesidad de planificación ambiental (metano fugitivo, disposición de barros de perforación).

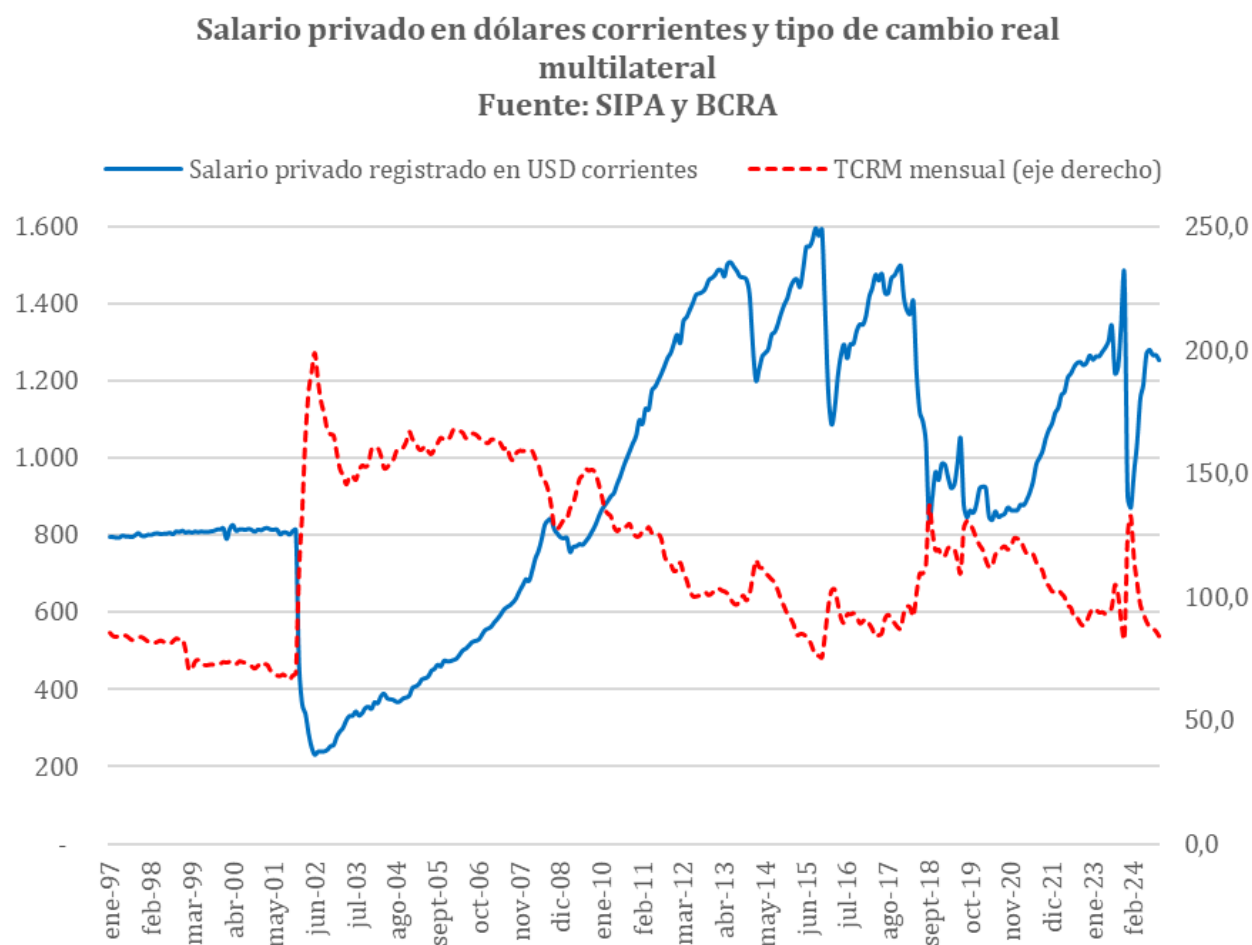
Por otro lado, el vínculo entre productividad y salarios tiene una deriva macro. Históricamente, cuando la Argentina enfrentó crisis de divisas, la “solución” fue devaluar, con impacto inmediato sobre el salario real. La estabilización cambiaria sostenida requiere dos cosas:

- oferta estructural de dólares (agro/energía/minerales); y,

- ii) regulaciones que aseguren que esa oferta efectivamente entre al circuito nacional (secciones 4 y 6). Si la renta energética/minera consolida un flujo de divisas estable y regulado, el país puede sostener un sendero donde salarios reales crezcan a la par de la productividad sin choques bruscos

devaluatorios. Si, en cambio, la renta se fuga sin pasar por el balance cambiario nacional, la economía vuelve al ciclo de escasez externa, devaluación y caída salarial. La discusión sobre salarios en Argentina no es ajena a Vaca Muerta ni al litio: está anclada en la administración de la restricción externa.

Gráfico 3



Por eso aplanar la curva de liquidación de divisas es parte de la solución. Y eso requiere institucionalidad

e incentivos correctos. Finalmente, la política territorial importa. Una empresa pública como YPF

Litio puede decidir montar una planta de materiales activos de baterías en Catamarca, no en el AMBA, para inducir encadenamientos locales. NA-SA puede sostener polos tecnológicos nucleares en el corredor Atucha-Campana-Zárate. ARSAT puede mantener talento satelital en Bariloche articulando con INVAP. La infraestructura de gas y oleoductos puede priorizar la conexión energética de provincias del norte históricamente relegadas. Estas decisiones no son neutras: son mecanismos concretos para usar sectores de alta productividad e intensidad de capital como motores de convergencia territorial y no como enclaves cerrados.

8.Estado, capacidades tecnológicas y captura nacional de la renta

El debate argentino no es “Estado sí vs. Estado no”. Es qué tipo de Estado, con qué instrumentos y con qué mandato. Mazzucato (2015) muestra que las principales innovaciones tecnológicas de las últimas décadas –incluyendo tecnologías que hoy integran teléfonos inteligentes, biotecnología avanzada o energías renovables– tuvieron detrás un Estado que asumió el riesgo de las primeras etapas, financió I+D de frontera, creó demanda y, en muchos casos, protegió a los primeros jugadores nacionales hasta que adquirieron escala. Es lo que se conoce como “Estado emprendedor”: un Estado que invierte, coordina y condiciona.

López (2024) lo baja a tierra en clave argentina: sin una política deliberada de articulación entre empresas públicas, sistema científico y entramado productivo local, la Argentina queda estructuralmente inhibida para capturar el tramo alto de la cadena de valor del litio y de otros insumos críticos de la transición energética. No se trata sólo de captar renta exclusivamente vía regalías o derechos de exportación, sino de construir un sistema nacional de innovación que permita absorber y recrear conocimiento, sostener proveedores nacionales, fijar estándares tecnológicos y participar en decisiones estratégicas

sobre dónde se localizan las etapas de mayor valor. Eso requiere densidad institucional y un Estado con poder efectivo.

El giro regulatorio 2024-2025 tensiona este objetivo. El esquema RIGI + artículo 198 de la Ley de Bases habilita la libre disponibilidad de divisas de exportación a partir del cuarto año del proyecto, con porcentajes crecientes antes de eso (20% al segundo año, 40% al tercero), y por lo tanto desengancha la generación de divisas de la acumulación de reservas nacionales. Paralelamente, la reducción a 0% de los derechos de exportación a la mayoría de los productos mineros (con la excepción parcial de litio y plata, que continúan al 4,5%) implica resignar captura fiscal de la renta minera en el corto plazo. Y, en simultáneo, se impulsa la privatización parcial o lisa y llana venta de activos estratégicos como NA-SA y YPF Litio, debilitando el entramado estatal-tecnológico que justamente permitiría internalizar conocimiento y valor agregado.

El resultado potencial es un modelo de enclave sofisticado: alta productividad física, alto potencial exportador, alta generación de divisas... pero baja apropiación nacional de esa renta, baja reinversión en infraestructura pública y baja consolidación de capacidades tecnológicas propias. Es un modelo que socializa riesgo y costos territoriales (ambientales, hídricos, laborales, de infraestructura) y privatiza tanto la renta extraordinaria como el acceso a las divisas. Eduardo Gudynas describió este tipo de configuraciones como “nuevo extractivismo”, en el cual incluso gobiernos que reivindicaban el desarrollo nacional terminan profundizando la exportación de recursos naturales sin alterar de fondo la dependencia tecnológica ni la estructura de captura de renta (Gudynas, 2009). Si a esa lógica se le quita la dimensión redistributiva y fiscal, queda un extractivismo desregulado, con resultados previsibles: volatilidad macro, dependencia externa y conflictividad interna.

Un enfoque alternativo existe y es viable: mantener el control público mayoritario en empresas estratégicas (YPF, NA-SA, ARSAT, YPF Litio), condicionar la inversión extranjera directa a encadenamientos productivos locales y transferencia tecnológica, acumular reservas y/o constituir un fondo soberano con una fracción de la renta energética y minera para estabilizar el ciclo externo, y dirigir parte de esa renta a infraestructura energética y logística (oleoductos, gasoductos, plantas compresoras), educación técnica e I+D aplicada. Esa es la única manera de que la actual ventana histórica –superávit energético sostenido, boom de Vaca Muerta, litio con demanda global creciente– no se agote en un ciclo corto de exportación primaria.

Subrayados finales

La Argentina de octubre de 2025 ya no está discutiendo hipótesis. Tiene hechos duros: un superávit energético acumulado de USD 5.368 millones en nueve meses, 15 meses consecutivos de saldo positivo en la balanza energética y una producción de crudo en Vaca Muerta que crece a tasas superiores al 30% interanual y ya explica aproximadamente dos tercios del petróleo nacional. La reversión del Gasoducto Norte habilitó exportaciones de gas neuquino hacia Brasil y redujo la dependencia histórica del gas boliviano. El litio se consolidó como el núcleo económico de buena parte del NOA. La infraestructura troncal de gas y petróleo se volvió la pieza que define el ritmo de todo el complejo. Es decir: la restricción externa energética, que durante años fue un cuello macroeconómico, hoy está objetivamente más relajada. Esa es la oportunidad. El riesgo es que la política económica vigente (más neoliberal clásica que libertaria) la desperdicie.

El régimen regulatorio actual, con el RIGI y el artículo 198 de la Ley de Bases, autoriza a los grandes proyectos a retener en el exterior y disponer libremente de las divisas generadas por exportaciones durante hasta cuatro años, y

simultáneamente baja a 0% los derechos de exportación para casi todo el resto de la canasta minera salvo litio y plata (que quedan en 4,5%). Eso implica que las divisas que podrían sostener el tipo de cambio, financiar infraestructura, robustecer reservas y estabilizar salarios reales pasan a ser, en gran medida, divisas de libre disponibilidad privada offshore. A la vez, se intenta privatizar parcialmente NA-SA –empresa nuclear con capacidades tecnológicas críticas– y desactivar YPF Litio, que fue creada justamente para asegurar que el país escale en la cadena de valor del litio.

No se busca negar la pertinencia de exenciones impositivas y ventajas comerciales para atraer inversiones externas dentro de un RIGI. Sin embargo, sí se ponen en duda los aspectos mencionados del RIGI actual. La consecuencia macro y estructural es clara: se consolida un patrón primario-exportador de enclave en sectores de frontera tecnológica, con fuga institucionalizada de divisas y debilitamiento del núcleo estatal que podría transformar esa renta en capacidades nacionales. Esto no es un destino inevitable. Es una decisión política.

Un sendero alternativo exige un Estado que actúe como inversor paciente, planificador de infraestructura, garante de la captura de renta y arquitecto de la articulación tecnológica entre recursos naturales y complejidad productiva. Ese Estado existe en la práctica en YPF, en NA-SA, en YPF Litio, en ARSAT, en INVAP, en Y-TEC. Desmontarlo es renunciar, en los hechos, a la posibilidad de que la riqueza energética y mineral financie estabilidad macro, salarios altos y convergencia territorial. Sostenerlo, ampliarlo y exigirle resultados –medibles en divisas, empleo calificado, innovación local e infraestructura energética– es, en cambio, una estrategia de desarrollo nacional compatible con una economía abierta, integrada y capitalista.

No hay desarrollo duradero, inclusión social, sin captura nacional de la renta estratégica y regulaciones macroprudenciales. No hay captura de

renta sin poder público efectivo sobre los sectores que la generan. Esa cadena causal de bajo beneficio para el conjunto productivo y social, durante la gestión Milei se ve con claridad, pero está en disputa.

Bibliografía

Adaro, R., & Burgos, M. (2023). *Minería metalífera y desarrollo en Argentina: una visión alternativa*. En M. Burgos & I. Sabbatella (Coords.), *Desarrollo y ambiente. Problemas y debates desde la periferia* (pp. 119-140). Buenos Aires: Ediciones del CCC.

Argentina Productiva 2030. (2023). *Misión 1. Duplicar las exportaciones para volver macroeconómicamente sostenibles las mejoras sociales y económicas*. Ministerio de Economía de la Nación.

Arias Alvarado, P., Díaz Paz, W., Salas Barboza, A., & Seghezzo, L. (2022). *Huella hídrica como indicador del consumo de agua en la minería del litio en la Puna argentina*. *Energías Renovables y Medio Ambiente*, 26, 223-234.

Banco Central de la República Argentina (BCRA). (2025). *Indicador de tipo de cambio real multilateral y evolución salarial 2000-2024*. Buenos Aires: BCRA (informe estadístico).

Baruj, G., Bril Mascarenhas, T., Gottig, A., Gutman, M., Porta, F., Rubio, J., Ubogui, M., & Vázquez, D. (2022). *Electromovilidad en la Argentina. Oportunidades y barreras para su desarrollo*. Buenos Aires: Fundar.

Belini, C., & Rougier, M. (2008). *El Estado empresario en la industria argentina. Conformación y crisis*. Buenos Aires: Manantial.

Burgos M. y Sabbatella I. (2023): *Desarrollo y ambiente. Problemas y debates desde la periferia*. Ed. Centro Cultural de la Cooperación: Buenos Aires.

Burgos M. (2024): *Empresas estatales y desarrollo: el caso de YPF (2002-2022)*. *Revista Estado y Políticas Públicas* Año XII, Núm. 23, octubre de 2024 - abril de 2025.

Carbajales J.J. (2021): *Manual de empresas públicas en Argentina (1946-2020)*. Editorial UNPAZ.

Casalis, A. (2019). *Litio y desarrollo territorial en Argentina: políticas, actores y conflictos en torno a la explotación e industrialización*. *Revista de Ciencias Sociales (UNQ)*, 36(2), 13-36.

Casalis, A., & Herrera, H. (2024a). *YPF Litio: el abandono de un proyecto de desarrollo*. *Página/12 – Suplemento Cash*, 1 de diciembre de 2024.

Casalis, A., & Herrera, H. (2024b). *Empresas con participación estatal en el desarrollo de tecnologías emergentes: Casos de estudio en Argentina (Informe YPF Litio)*. Buenos Aires: CIECTI, mimeo.

Chang, H. J. (2002). *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*. London: Anthem Press.

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). (2024). *Síntesis de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos: Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y régimen cambiario (arts. 198-200)*. Buenos Aires: CPACF.

Evans, P. (1996): "El Estado como problema y como solución". En: *Desarrollo Económico*, 35 (140), 529-562. Buenos Aires.

Fanelli J.M. (2019): "Recursos naturales y crecimiento sostenible: lecciones aprendidas del período de auge de precios" en R. Sánchez (ed.), *La bonanza de los recursos naturales para el desarrollo: dilemas de gobernanza*, Libros de la CEPAL, N° 157 (LC/PUB.2019/13-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Ferrer A. (2015): "Nuevos principios de la estrategia industrial". En: *Suplemento Cash*. Página 12. 16 de agosto de 2015.

Fornillo B. (2015): *Geopolítica del litio. Industria, ciencia y energía en Argentina*. Ed. CLACSO: Buenos Aires.

Gobierno de Chile. (2023). *Estrategia Nacional del Litio*. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Gudynas, E. (2009). *Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo*. En *Extractivismo, política y sociedad* (pp. 187-225). Quito: CAAP/CLAES.

Herrera, H. (2023): "Un Fondo Soberano para impulsar las exportaciones industriales de litio". En: *Suplemento Cash*. Página 12. <https://www.pagina12.com.ar/555963-un-fondo-soberano-para-impulsar-las-exportaciones-industrialInfobae>. (2025, 1 de octubre).

Infobae. (2025, 30 de septiembre). *El Gobierno avanzó con la privatización parcial de la empresa que opera los reactores nucleares*. Sección Economía.

Infoleg. (2024). *Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Ley 27.742 y normas reglamentarias*. Secretaría Legal y Técnica.

La Nación. (2025, 15 de septiembre). *El Gobierno avanza con otra privatización: NA-SA saldrá a la venta con el 44% en licitación y 5% para PPP*. Sección Economía/Energía.

Leiva, M. (2025, 9 de agosto). *El Gobierno nacional eliminó los derechos de exportación a más de 230 productos mineros: qué implica la medida*. Chequeado.

López, A. (2002): *Industrialización sustitutiva de importaciones y sistemanacional de innovación: un análisis del caso argentino*; *Redes*, vol. 10, núm. 19, diciembre, 2002, pp. 43-85; UnQui; Buenos Aires

López, A. (2024, 18 de junio). *Promesas del subsuelo*. *Alquimias Económicas*.

López, A., Obaya, M., Pascuini, P., & Ramos, M. (2016). Litio en la Argentina: oportunidades y desafíos para el desarrollo de la cadena de valor. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación / BID.

Mazzucatto M. (2015): El estado emprendedor. Ed. Taurus: Madrid.

Ministerio de Energía de la Nación. (2025, 23 de octubre). Argentina consolida su recuperación energética: superávit récord y 15 meses consecutivos de saldo positivo. Comunicado oficial.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (2024). Datos sectoriales de empleo, empresas y remuneraciones del sector hidrocarburífero (2018-2023). Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE). Buenos Aires.

Pryke, J. (2017). Resource nationalism trends in Latin America. Journal of Energy Policy, 45(3), 112-130.

Reuters. (2025, 17 de abril). Argentina registra superávit comercial energético en marzo por 527 millones de dólares. Reuters Latam – Negocios.

Reuters. (2025, 1 de abril). Argentina exporta gas de Vaca Muerta a Brasil vía Bolivia tras la reversión del Gasoducto Norte. Reuters Latam – Negocios.

Secretaría de Energía / Ámbito Financiero. (2025, octubre). La balanza comercial energética marcó un superávit récord y crecen las exportaciones de petróleo crudo. Ámbito Financiero, Energía.

ZONCERAS ECONOMICAS



La sección de Zonceras Económicas recupera el legado de Arturo Jauretche y su crítica a las falsas verdades que las elites económicas han instalado para condicionar el pensamiento nacional. Aquí desmontamos dogmas, prejuicios y lugares comunes que funcionan como instrumentos de dominación cultural en materia económica

El Modelo Económico Justicialista es el culpable del endeudamiento

Por Félix Schmitd

1. Introducción

Uno de los mitos más arraigados en el discurso económico liberal es la supuesta irresponsabilidad fiscal y tendencia al endeudamiento crónico del peronismo. Esta narrativa asocia al modelo justicialista con el origen de la deuda que ha cíclicamente ahogado a la economía argentina. Sin embargo, un análisis de los períodos 1945-1955 y 2003-2015 demuestra exactamente lo contrario. Lejos de ser el generador de la deuda, el peronismo ha sido históricamente el movimiento que ha ejecutado los procesos de desendeudamiento más profundos de la historia argentina.

Desarrollo del Mito

El mito sostiene que las políticas peronistas de "despilfarro" —altos salarios, gasto social, nacionalización de empresas— son fiscalmente insostenibles y se financian con deuda externa, generando una crisis de deuda que luego es resuelta por los "responsables de las cuentas fiscales" representados por la ortodoxia económica. Esta visión omite que el endeudamiento histórico argentino no ha sido consecuencia del gasto social, sino de la especulación financiera, la fuga de capitales y la desregulación, elementos centrales de los modelos neoliberales que el modelo económico justicialista busca refutar.

Refutación del Mito (Período 1945-1955)

El gobierno de Juan Domingo Perón no sólo no contrajo nueva deuda externa neta, sino que **canceló la totalidad de la deuda externa soberana** del país.

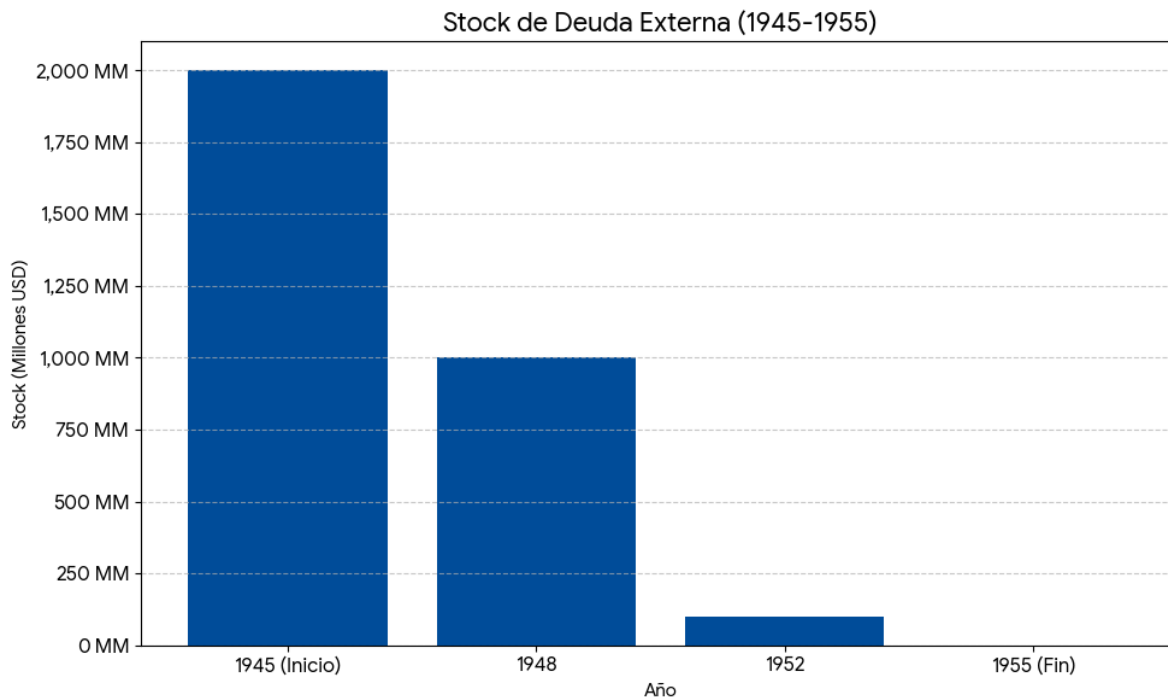
1. **Independencia Económica:** El peronismo utilizó las reservas acumuladas durante la Segunda Guerra Mundial para ejecutar la Declaración de la Independencia Económica (9 de julio de 1947). El gobierno utilizó las reservas de divisas acumuladas y los saldos del IAPI para la repatriación (pago) de la totalidad de la deuda externa y la nacionalización de los servicios públicos, que era otra forma de deuda externa, por la remisión de utilidades.
2. **Cancelación de la Deuda:** Entre 1946 y 1952, Argentina pagó la totalidad de su deuda soberana.
3. **Nacionalización (Compra de Activos):** En lugar de tomar deuda, el Estado compró los activos extranjeros que generaban deuda futura (remisión de utilidades). Los casos emblemáticos fueron la nacionalización de los ferrocarriles británicos (1948), los teléfonos (ITT), el gas y los servicios portuarios.
4. **Rechazo al FMI:** Perón se negó a incorporar a Argentina a los organismos de Bretton Woods (FMI y Banco Mundial), por considerar que el ingreso a dichos organismos era un condicionante sobre la soberanía económica y política del país.

El gráfico siguiente ilustra la refutación central al Mito, detallando la política de desendeudamiento del primer peronismo. Terminar con la deuda externa fue el resultado en 1952 de la política económica del presidente Juan Domingo Perón, objetivo iniciado en el **Acta de Independencia Económica** (Tucumán, 9 de julio de 1947).

Como se visualiza en la tendencia decreciente del gráfico, esta política se materializó en la repatriación sistemática de la deuda. Esto se debió a la acumulación de divisas al finalizar la Segunda Guerra Mundial y el superávit de la balanza comercial obtenido entre 1946 y 1948.

El rescate total de la deuda externa se logró en 1952. Este hito incluyó el pago de las últimas cuotas del empréstito argentino-británico contenido en el convenio Roca-Runciman (1933).

Gráfico 1: Evolución de la Deuda Externa (Stock) 1945-1955



Refutación del Mito (Período 2003-2015)

El período comienza en 2003, heredando el default de deuda privada producto del colapso del modelo neoliberal implementado durante la década del 90. Desde la asunción de Néstor Kirchner la política implementada, al igual que entre 1945 y 1955, fue la búsqueda del **desendeudamiento** como pilar de la soberanía.

1. **Reestructuración de Deuda (2005 y 2010):** El gobierno de Néstor Kirchner logró la reestructuración de la deuda en default con la quita (reducción de capital e intereses) más grande de la historia moderna.

2. **Cancelación de la deuda con el FMI:** En 2005, se pagó al contado la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, liberando al país de sus condicionamientos.

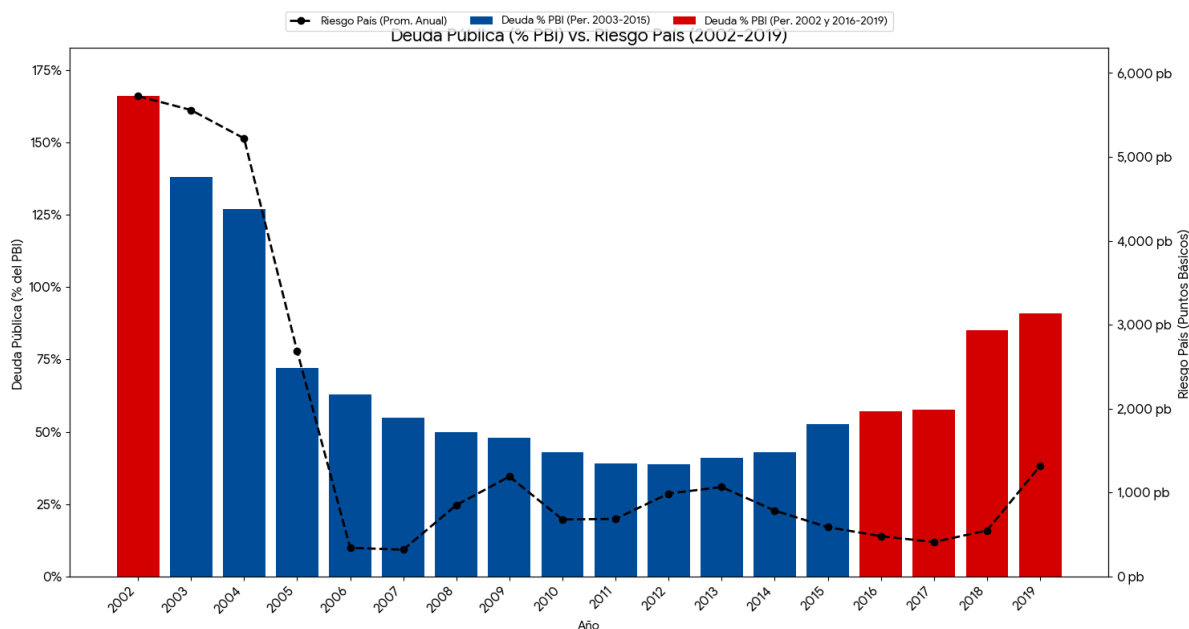
La Deuda Externa de la Administración Central como porcentaje del PIB mostró un descenso importante y sostenido, cayendo de picos post-default superiores al 150% del PBI a mínimos históricos en 2012-2013, manteniéndose en niveles sostenibles hasta 2015.

En 2016 con la llegada de Mauricio Macri al poder, vuelve a implementarse el modelo económico de Valorización Financiera. Se aprovechó un país

desendeudado y un riesgo país bajó para volver a los mercados de capitales. Durante 2017 y 2018, nuestro país tomó 1 dólar de cada 4 emitidos como deuda en la economía internacional, generando el endeudamiento más grande y rápido en la historia

para un país emergente. Al igual que la experiencia de 1976 a 1982, la deuda no tuvo un objetivo de desarrollo del entramado productivo, sino que fue para robustecer el modelo de *carry trade*.

Gráfico 3: Deuda Pública en dólares sobre PBI y Riesgo País



Fuente: elaboración propia en base datos del BCRA

Si analizamos el Flujo Neto Anual de divisas entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el período 2003-2019. La visualización permite contrastar dos políticas de endeudamiento diametralmente opuestas.

El análisis se inicia con el período justicialista (2003-2005), donde se observan flujos netos negativos, indicativos de que el país estaba realizando pagos netos al organismo. Esta política de desendeudamiento culmina en el año 2006, con el hito de la cancelación total de la deuda. Dicho evento se refleja en el gráfico como un egreso neto singular y significativo de aproximadamente 10.000 millones de dólares, llevando la relación financiera con el FMI a cero.

Posteriormente, se inauguró un período de once años consecutivos (2007-2017) donde el flujo neto es nulo, demostrando una completa independencia financiera del país respecto del organismo.

Esta tendencia se revierte en el período 2018-2019. El gráfico muestra la irrupción de flujos netos positivos masivos (barras azules), que representan los desembolsos del préstamo *stand-by* (el más grande en la historia del FMI). Estos ingresos netos de decenas de miles de millones de dólares coinciden temporalmente con la explosión de la fuga de capitales.

Por lo tanto, el gráfico desmiente visualmente la el mito de quien endeuda al país: el modelo 2003-2015 utilizó recursos propios para cancelar la deuda generando independencia de organismo

internacionales, mientras que el modelo 2016-2019 (flujo de entrada) para sostener su esquema recurrió a un endeudamiento masivo con el FMI financiero y financiar la fuga de capitales.

Gráfico 4: Evolución de la Deuda con el FMI (Stock) 2003-2019

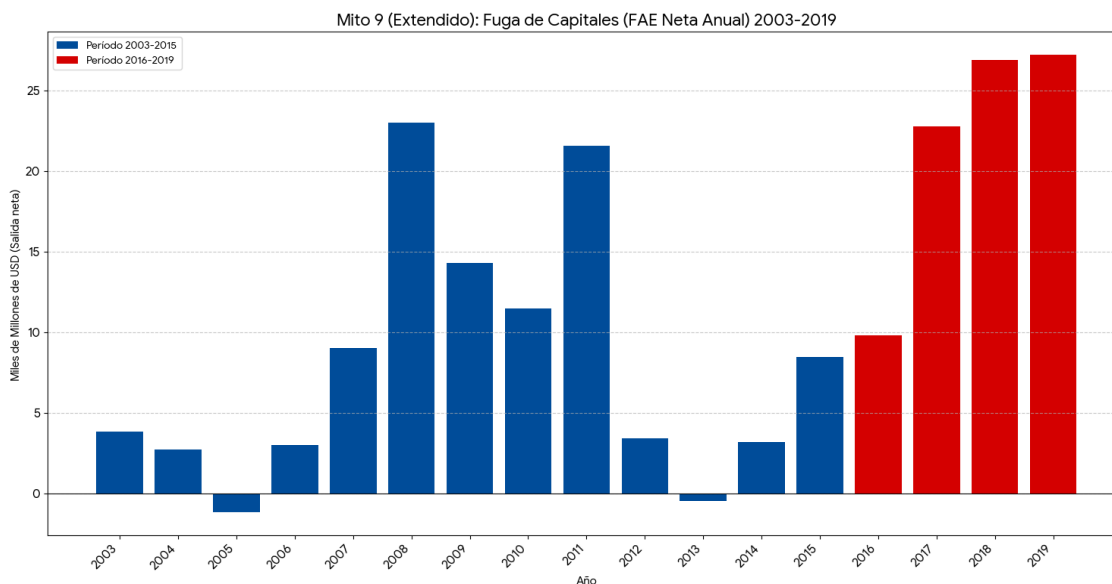
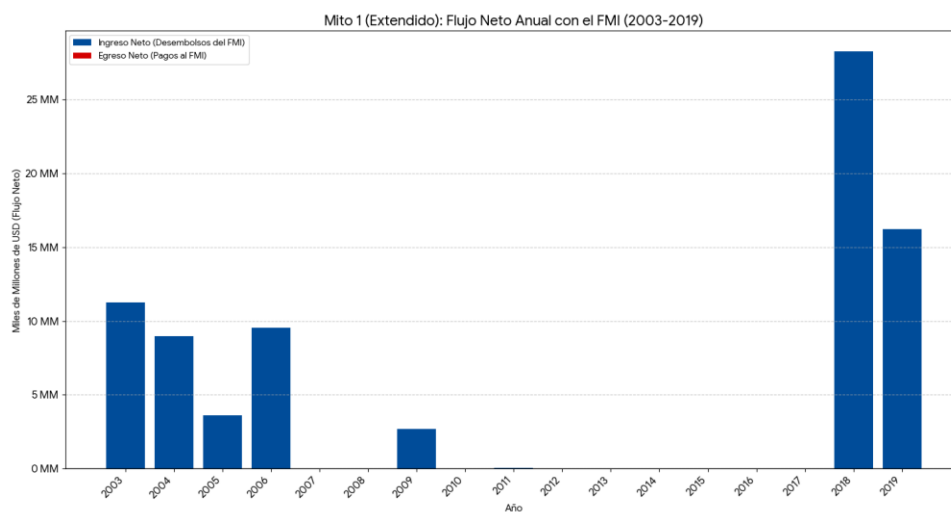


Gráfico 5: Deuda Externa de la Administración Central (% del PBI) 2003-2015



El peronismo es anti-inversión

Por Félix Schmitd

1. Introducción

El discurso mediático muy instalado en la sociedad acusa al peronismo de ser "anti-inversión", argumentando que su modelo de altos salarios, fuerte presencia estatal y regulaciones desalienta la llegada de capital privado. Se plantea la falsa dicotomía de que o se favorece al "capital" (con bajos salarios) o se favorece al "trabajo" condenando al país al estancamiento.

Desarrollo del Mito

El mito se basa en la idea del "clima de negocios". Se atacan las herramientas del Estado peronista (empresas públicas, controles) como "trabas" a la libre empresa. Se confunde la inversión productiva (que crea fábricas) con la inversión especulativa (que busca ganancias financieras de corto plazo), siendo esta última la única que el peronismo desalienta

Refutación del Mito (Período 1945-1955)

El primer peronismo ejecutó el plan de inversión de capital muy importante en términos históricos

1. Inversión Pública Estratégica (Planes Quinquenales): El Estado asumió el rol de inversor principal en áreas donde el capital privado no invertía:

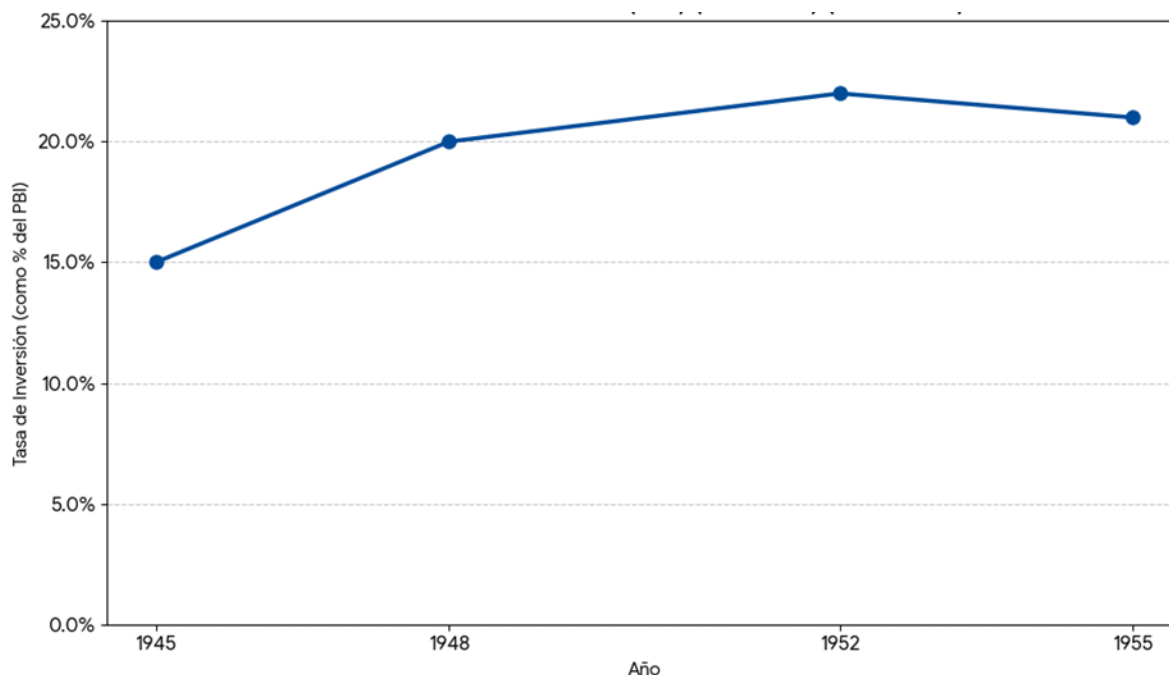
- **Energía:** Construcción del histórico Gasoducto presidente Perón (Comodoro Rivadavia-Buenos Aires), una obra récord a nivel mundial.

- **Transporte:** Nacionalización y modernización de ferrocarriles, creación de Aerolíneas Argentinas y construcción del Aeropuerto de Ezeiza.

- **Siderurgia:** Impulso al Plan Savio (SOMISA).

2. Inversión Privada Inducida: La inversión pública no "desplazó" (crowding out) a la privada; la incentivó. El Estado, a través del Banco de Crédito Industrial (nacionalización del crédito), financió la creación de miles de PyMEs para abastecer al creciente mercado interno. La Tasa de Inversión (IBIF/PBI) alcanzó picos superiores al 20%.

Gráfico 1: Tasa de Inversión (IBIF) como % del PBI (1945-1955)



Fuente: Elaboración propia en base a Fraschina & Gobbo, 2024

Refutación del Mito (Período 2003-2015)

Este período registró las tasas de inversión (IBIF % PBI) más altas y sostenidas de la historia reciente.

La Demanda como Motor: El modelo kirchnerista aplicó la doctrina de que la inversión responde a la demanda efectiva. La recuperación del salario y la demanda generó altas tasas de rentabilidad empresarial, que se reinvertieron.

Datos (Tasa de Inversión): Los datos del PBI muestran que la Tasa de Inversión/PBI superó el 20% en gran parte del período.

Inversión Pública y Tecnológica: El Estado invirtió en áreas abandonadas por el neoliberalismo:

Ciencia y Tecnología: Creación del Ministerio de Ciencia y repatriación de científicos (Plan Raíces).

Soberanía Tecnológica: Puesta en órbita de los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2.

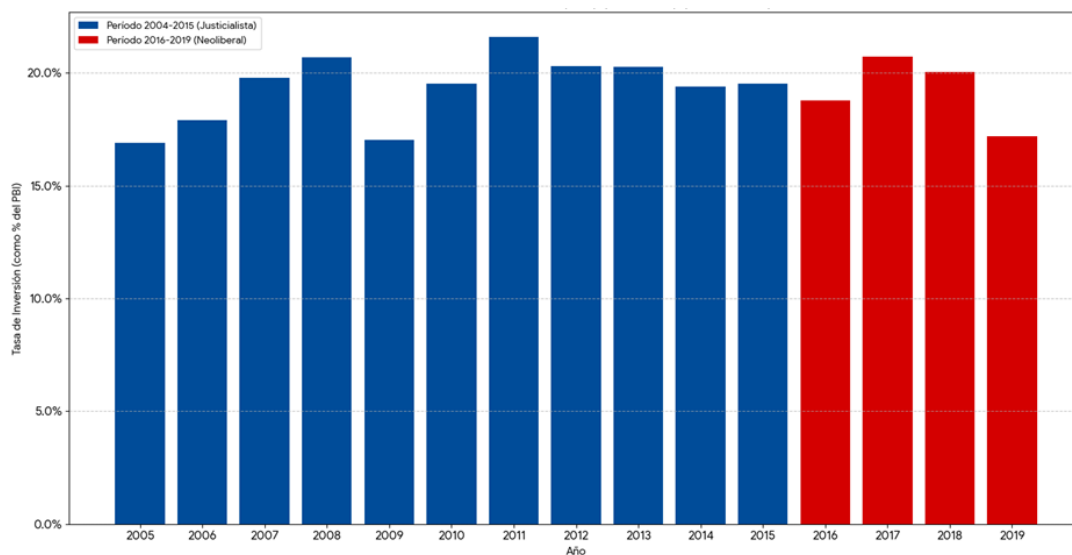
Recuperación de Activos: Re-estatización de YPF (para recuperar la inversión en energía) y Aerolíneas Argentinas.

Si bien a la hora de analizar la historia argentina, el Modelo Económico Justicialista, en cierto modo no se destaca en torno a la reinversión del sector privado, ya que se sitúa dentro del promedio histórico en torno al 20%. Ahora esto implica, que los demás modelos también están en torno al mismo porcentaje por lo cual, no es cierto que nuestro modelo ahuyenta la inversión. El modelo justicialista, basado en una fuerte demanda interna (altos salarios, bajo desempleo, generó un clima de

negocios rentable para la inversión productiva. A veces más que reglas claras, las empresas necesitan demanda. La Tasa de Inversión (IBIF/PBI) creció sostenidamente desde la salida de la crisis, alcanzando picos superiores al 20% y manteniéndose en un promedio alto durante todo el

período. En el período 2016-2019, el modelo neoliberal, que priorizó la "confianza" del mercado financiero, generó el efecto opuesto. Tras un breve pico inicial (2017), la Tasa de Inversión se retrocede, coincidiendo con la crisis de confianza y la caída del consumo.

Gráfico 2: Tasa de Inversión (IBIF) como % del PBI (2003-2019)



Fuente: Elaboración propia con datos del BCRA

Cuando enumeramos las condiciones para que una empresa decida invertir surgen como una de las primeras la frase dentro del sentido común: “se necesitan reglas claras”. Si bien la estabilidad económica y jurídica son necesarias, las políticas realizadas desde el modelo económico justicialista que buscan fortalecer el salario de los trabajadores, haberes y pensiones, producto de políticas redistributivas, de desarrollo del mercado interno y de fortalecimiento a la demanda agregada que significaron no solo mayor consumo de los que ya lo hacían en el 2003, sino mayor inversión y creación de empresas, que pudieron cubrir los nuevos nichos de mercado que se generaban, y con esto, también la

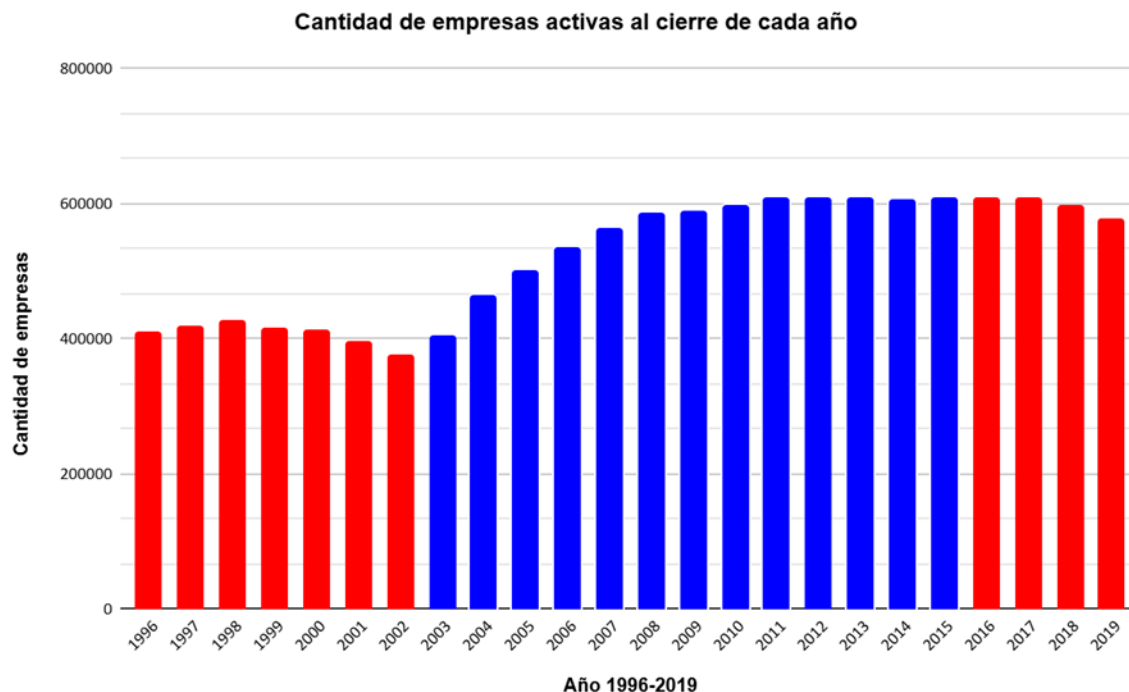
inclusión de millones de argentinos que accedieron a derechos, bienes materiales y servicios.

En contraposición a esta visión, la llevada adelante por los modelos neoliberales financieros ha sido la conocida como “teoría del derrame”. En lugar de empujar el crecimiento económico desde abajo, consiste en inyectar los beneficios a los sectores ya consolidados y que estos “derramen” hacia abajo. Los defensores de estas teorías buscan convencernos de que el consumo de los sectores medios y populares es malo para la economía y que el crecimiento económico se logrará con la inversión a largo plazo. Con lo cual hay que seducir a los inversores con medidas amistosas para el mercado

(tarifazos, apertura indiscriminada de las importaciones, libertad total al movimiento de capitales financieros especulativos) concentrar así los ingresos y las riquezas y esperar que la inversión produzca el ya conocido y nunca visto “efecto derrame”.

Sin embargo, la realidad muestra una situación completamente distinta. Tanto el PBI como sus componentes crecieron considerablemente entre 2003 y 2012.

Gráfico 4: Cantidad de empresas registradas



Fuente: secretaría de empleo, trabajo y seguridad social, del Ministerio de Capital Humano

Los datos del INDEC expresan con toda claridad que efectivamente crecieron el consumo privado y el público durante esta etapa, pero más lo hizo la Inversión, puesto que no hay misterio: la inversión crece en contextos de mayor actividad económica, de expectativas favorables de ventas y donde pueden realizarse las ganancias empresarias y no en tiempos como los actuales donde, por las altas tasas de interés vigentes, resulta más rentable colocar financieramente los excedentes que invertirlos en la producción y la generación de empleo

2004-2015. DEMANDA GLOBAL (a millones de \$ del 2004)

	2004	2015	Variación
DEMANDA GLOBAL	566.833	898.860	58,6%
Consumo privado	312.082	520.536	66,8%
Consumo público	53.919	96.649	79,2%
Exportaciones FOB	115.688	138.241	19,5%
Formacion bruta de capital fijo	77.103	141.421	83,4%

Fuente: Elaboración propia en base al INDEC

La pregunta final resulta en pensar: ¿Quien va a querer invertir con la reducción del mercado interno producto de los menores salarios reales, del aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia, el cierre de comercios y de MYPYMES, de tarifas que inviabilizan la producción y anulan la competitividad, de tasas de interés que invitan a la especulación y una capacidad ociosa cada vez mayor?

PENSAMIENTO NACIONAL



Este apartado presenta estudios y reflexiones sobre las corrientes del pensamiento nacional, entendidas como un campo intelectual que interpreta la economía y la política desde la experiencia histórica argentina. Cada texto busca reconstruir trayectorias, identificar categorías fundamentales y mostrar la vigencia de estas tradiciones en los debates actuales.

Pensando la economía nacional: La desinflación en la era Milei

Por Cecilia Wilhelm

1. Introducción

El pensamiento económico nacional debe incluir la articulación de los conceptos de la economía contemporánea para lograr pensarla in situ. Son múltiples los artículos de teorías que dispersan las explicaciones desde distintos puntos de vista y evitan sistematizar explicaciones desde donde tomar aprendizajes.

El presente artículo establece las causas de la baja de la inflación en los primeros dos años de la gestión mileista. Se argumentó en reiteradas oportunidades y obsesivamente que la baja de la inflación impulsaría el crecimiento. En línea con el ordenamiento de los precios se prestablecía que la reducción del déficit fiscal primario llevaría a un crecimiento irrefutable de la economía.

En este artículo se trabaja sobre la falsedad de este argumento, pensando a la economía argentina, desde la realidad de un país semiindustrial, con desequilibrios externos sostenidos y la consecuente escasez de divisas. Para pensar el crecimiento es necesario involucrar las variables de principal relevancia en el análisis y ser lo más riguroso posible. Se reconoce que la motorización del curso de la economía requiere de la articulación ineludible de los actores que la componen, por lo que de alguna manera se vincularon con la baja de la inflación y el estancamiento de los últimos años. Además, este artículo busca comprender las causas del fenómeno en los últimos años y tomar algunos aprendizajes para la visión justicialista que puedan ser apropiados en futuras experiencias.

Para ello, en el marco del pensamiento de una economía soberana e independiente, la argumentación aborda tres ejes: La presentación de

la inflación según distintas visiones, la interrelación o vinculación con los datos de los últimos diez años y por último se presenta una conclusión que se propone aportar algunas ideas a una visión “justicialista de la inflación”.

Presentación

Durante los últimos años los argentinos enfrentaron más de una década de alta y creciente inflación. Los efectos sobre la vida de la población y la actividad económica son múltiples y variados. A la hora de definirla, la inflación es la suba persistente y generalizada del nivel general de precios de una economía. Sin embargo, al momento de analizar las causas, este terreno se vuelve confuso, las visiones son diversas y la interpretación de los cursos de acción a seguir también.

Entre los costos implicados, se vuelve fundamental el malestar de la sociedad comprometido en la incertidumbre de una economía que se mueve con precios indexados a la inflación con la excepción de un precio fundamental: los salarios. En este sentido, las expectativas sobre el porvenir de la población son afectadas directamente por la inflación. Elemento fundamental, aunque no único, del malestar social que derivó en la derrota electoral del peronismo en 2023.

Tal como sostienen los teóricos del desarrollo latinoamericano, la inflación en la región se debe a los problemas estructurales de estas economías, donde los problemas del sector externo afectan directamente el desarrollo de los países (Sunkel; 1970).

Las Teorías de la Inflación y su Relación con las Visiones Económicas e Ideológicas

De los ensayos teóricos que intentan explicar el fenómeno inflacionario podemos decir que:

- a.** Los monetaristas niegan ciegamente la existencia de elementos relacionados con la puja distributiva
- b.** Los estructuralistas centran su análisis en las limitaciones de la balanza de pagos.
- c.** Los keynesianos se centran en el funcionamiento mas o menos matizado del multiplicador del dinero.
- d.** Los marginalistas argumentan linealmente la inflación por el impacto de la suba de precios en los costos de producción.

Entonces, sin buscar hacer meros ejercicios académicos, se piensa a estas explicaciones en una relación directa con las visiones económicas e ideológicas desde las cuales se formulan, condicionando el diagnóstico y, consecuentemente, las políticas públicas que se proponen para solucionar el problema de la inflación.

A continuación, se amplían cada una de las visiones:

1. La Inflación Monetarista: El Exceso de Emisión Monetaria

La explicación monetarista, apoyada en Friedman y otros, sostiene que la inflación es, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario. Su premisa central es que, una vez que los factores productivos (trabajo y capital) están plenamente utilizados, cualquier aumento en la cantidad de dinero no se traducirá en un mayor nivel de producción, sino que se diluirá necesariamente en un aumento general de los precios. Se postula así una relación automática y directa entre la base monetaria y el nivel de precios. Esta visión mecánica y economicista que históricamente ha ganado preeminencia en períodos de represión de la demanda y ajuste fiscal

aboga por liberar a las fuerzas del mercado de la intervención estatal, considerada distorsiva. Sin atender a las pujas de poder entre los actores sociales.

Estas ideas han estado vigentes en experiencias como la de la gestión de Martínez de Hoz durante la última dictadura militar argentina, y resurgen en contextos como el del mileismo. Martínez de Hoz (1981) argumentaba la necesidad de aplicar al máximo nivel posible las leyes del libre mercado en una economía que consideraba "sometida" a un intervencionismo estatal asfixiante desde la posguerra. La liberación económica se asociaba, en este discurso, a la libertad individual para alcanzar el bienestar mediante el esfuerzo propio, sin la interferencia de un "Estado paternalista" que, se supone, desordena el "ciclo natural" de la economía. Desde esta visión el crecimiento se alcanza al reducir el rol del estado en la economía mediante ajustes fiscales que recuperen la confianza en la moneda nacional y permitan el ingreso de divisas mediante inversiones extranjeras directas. De esta manera se recupera el equilibrio en situación de libre mercado. Omite ciegamente referirse a causas políticas/ sociales de la inflación provenientes de la puja distributiva.

2. El Enfoque Estructuralista: Rigideces Propias de la Periferia

Sobre la mitad del siglo XX surgió la visión del estructuralismo que atribuye las causas de la inflación a rigideces estructurales e institucionales profundas y arraigadas las formas productivas de las económicas. Para los estructuralistas, el crecimiento en países no industrializados depende críticamente de la evolución del sector externo. Las contracciones en las exportaciones generan tensiones inflacionarias, ya que el intento de mantener el nivel de actividad económica choca con la restricción externa.

En Argentina, fue Marcelo Diamand quien desarrolló algunas de las ideas más agudas sobre la

estructura económica del país, argumentando la existencia de un "desequilibrio estructural" entre un sector agroexportador de alta productividad y un sector industrial comparativamente menos productivo y dependiente crónico de divisas en concepto de importaciones y de deuda productiva. Esta heterogeneidad estructural, para Diamand, generaba presiones inflacionarias endémicas que las recetas ortodoxas no podían resolver. Su conocimiento, forjado desde la representación industrial y la gestión pública en gobiernos peronistas, le permitió elaborar una teoría que dialogaba directamente con las particularidades de la economía argentina, proponiendo soluciones originales que escapaban al dogmatismo de las teorías importadas.

3. La Inflación de Demanda: Un Enfoque Keynesiano

La teoría de la inflación por demanda, de raíz keynesiana, postula que el aumento generalizado de precios surge cuando la demanda agregada de bienes y servicios en una economía supera a la oferta agregada disponible. Para Keynes, el dinero no solo sirve para transacciones, sino también como reserva de valor (ahorro), rechazando la relación mecánica que los monetaristas establecen entre cantidad de dinero y nivel de precios. En este marco, una mejora en las expectativas empresariales o un aumento del gasto público puede generar un incremento "autónomo" de la demanda. Este exceso de demanda presiona sobre una capacidad productiva que, en el corto plazo, es relativamente rígida, motivando un alza de los precios hasta que se equilibre con el incremento del gasto. Este tipo de inflación suele asociarse a períodos de crecimiento económico vigoroso.

Esta visión keynesiana encuentra un eco cercano en la perspectiva justicialista, la cual incorpora una dimensión social y política al análisis. Desde este enfoque, el "Sujeto Nacional" no es un agente económico abstracto, sino una interrelación de necesidades sociales de diversos actores. La idea de

"Pueblo" trasciende la dicotomía clásica entre trabajadores y empresarios, fundándose en el bienestar de un entramado social más amplio que incluye al pueblo trabajador, a las PyMEs, a los comerciantes, a los clubes barriales, a la iglesia y a las militancias políticas y sociales. La complejidad del concepto "pueblo" implica comprender las necesidades específicas de cada sector y las particularidades del territorio. Por lo tanto, una política económica "justa" debe administrar la demanda de manera de satisfacer esta compleja trama de intereses sin generar desequilibrios inflacionarios que perjudiquen a los sectores más vulnerables. No obstante, la idea unívoca de la aplicabilidad de las premisas keynesianas en las experiencias de gobiernos peronistas también ha generado consecuencias adversas en el curso de la economía.

4. La Inflación de Costos: Una Perspectiva Microeconómica

Desde una visión microeconómica, la teoría de la inflación por costos sostiene que el aumento en los precios de los insumos que componen el proceso productivo se traslada de manera lineal a los precios finales. Si bien típicamente se enfatiza el costo laboral como el principal detonante –argumentando que los aumentos salariales por encima de las ganancias de productividad generan una espiral inflacionaria y recesión–, la inflación puede originarse también a partir de los shocks en precios de insumos como los costos de materias primas, energía o, efectivamente, en dinámicas de conflicto distributivo. Para lo cual, en momentos de normalidad económica (sin shocks), la inflación se controla manteniendo nominalmente o achicando la masa salarial de la economía.

En este artículo se aborda el fenómeno de la inflación suponiendo que todas las explicaciones presentadas pueden ser válidas, total o parcialmente.

Análisis de la baja de inflación desde las distintas visiones

Al momento de analizar el desempeño de los precios en la Argentina en los años recientes es un buen ejercicio la lectura de la inflación desde las visiones existentes. Para ello se presenta a continuación la serie general del índice de precios al consumidor (IPC) en el periodo (2017-2025), años disponibles en la serie de datos oficial.

En el gráfico 1 se muestra una aceleración del ritmo al que subieron los precios en los últimos ocho años. Entre diciembre del 2017 y su punto máximo en mayo de 2024 la inflación se multiplicó casi por doce pasando de 25% a 290%ia. respectivamente, siendo la Argentina el segundo país con mayor inflación interanual del mundo, según datos del Banco mundial. Mientras que, en los últimos catorce meses de la serie presentada, la inflación se desaceleró notablemente hasta ubicarse en 33,6% ia. en el mes de agosto del presente año .

Si se plantean relaciones, la visión monetarista argumenta a favor de la expansión de la base monetaria para lo cual en el presente trabajo se desarrolla este argumento. Desde el punto de vista de la inflación como producto del crecimiento, vale aclarar que solo en tres de los ocho años presentados la economía argentina creció.

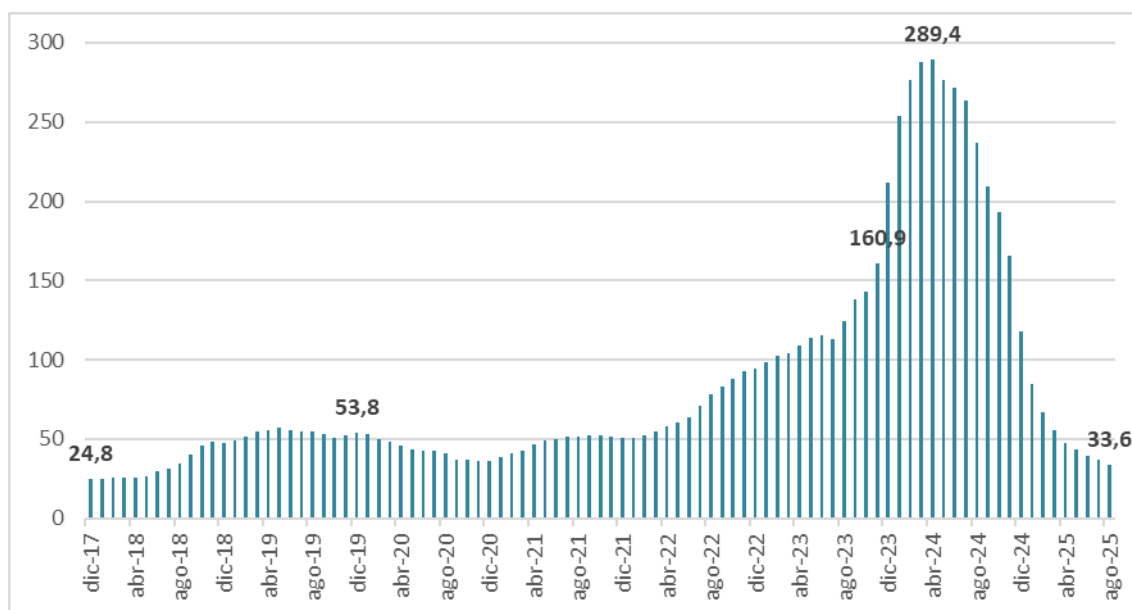
Asimismo, a continuación, se desarrolla el argumento desde la óptica de la explicación ortodoxa y típicamente asociada a sector empresarios, sobre la cual el costo laboral explica la suba persistente de precios. La cual implica que es

la mayoría de la población la que no debe aumentar su poder adquisitivo, de lo contrario la economía en su conjunto sufriría las consecuencias. Históricamente, estas medidas que, como se presentó, tuvieron momentáneamente distintas representaciones políticas, han llevado a la profundización de la pobreza en vez de solucionar el fenómeno.

Puntualmente, el problema central de la disparada de la inflación fue la falta de divisas, y la causa principal fue el endeudamiento de la gestión macrista previa (únicamente desde la deuda pública se acumuló más de USD 80 mil millones, pasando del 53% al 90% del PBI, según informes del Ministerio de Economía). Es insoslayable que el argumento monetarista evita considerar que la pandemia fue un imponderable transversal a todos los estados nacionales. No obstante, los costos derivados de shocks exógenos, como la sequía histórica y el aumento de los costos energéticos provocado por la guerra en Ucrania, también ejercieron una presión significativa sobre la economía.

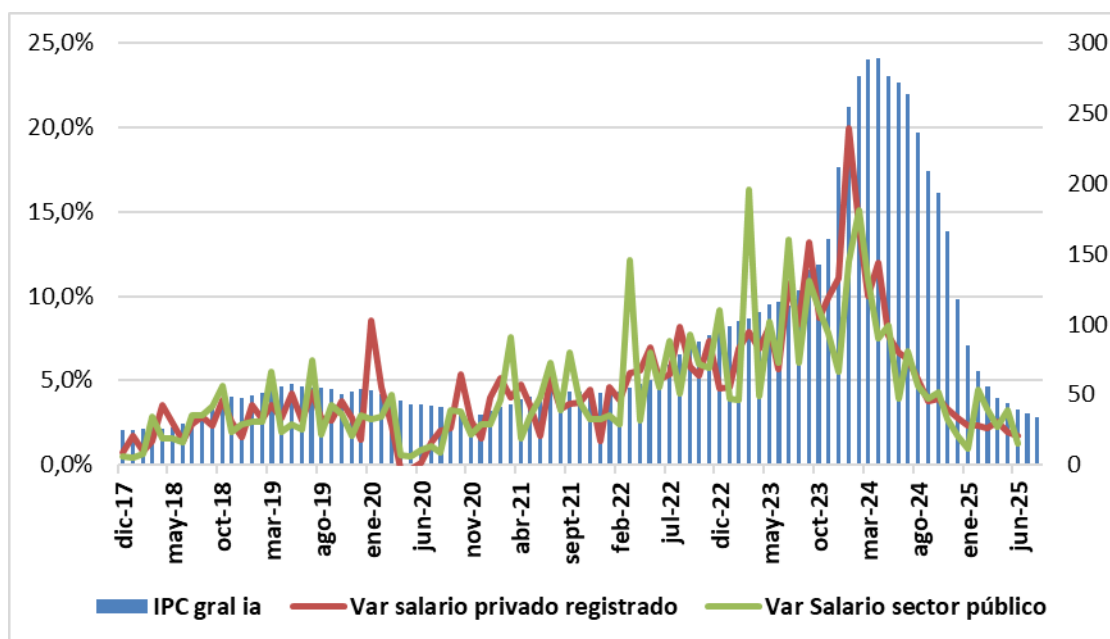
Esta presentación también resulta particularmente útil para pensar a la inflación y sus costos desde el punto de vista social. Para ello se presenta una comparación del índice RIPTE de salarios registrados y sector público con la serie del IPC general. Se reconoce la pérdida de representatividad del índice RIPTE por tratarse de un promedio de salarios, pero utilizarla permite la comparación histórica además de tratarse de los datos disponibles.

Gráfico 1: IPC Nivel general (2017-2025)



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Gráfico 2: comparación de IPC con RIPTE y Salarios del sector público



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Comparativamente, entre 2017 y el presente, la variación de los salarios analizados ha sido mayormente por debajo de la inflación, con ciertas excepciones entre 2020 y 2023, donde incluso se observan pico de mejoras en los salarios del sector público.

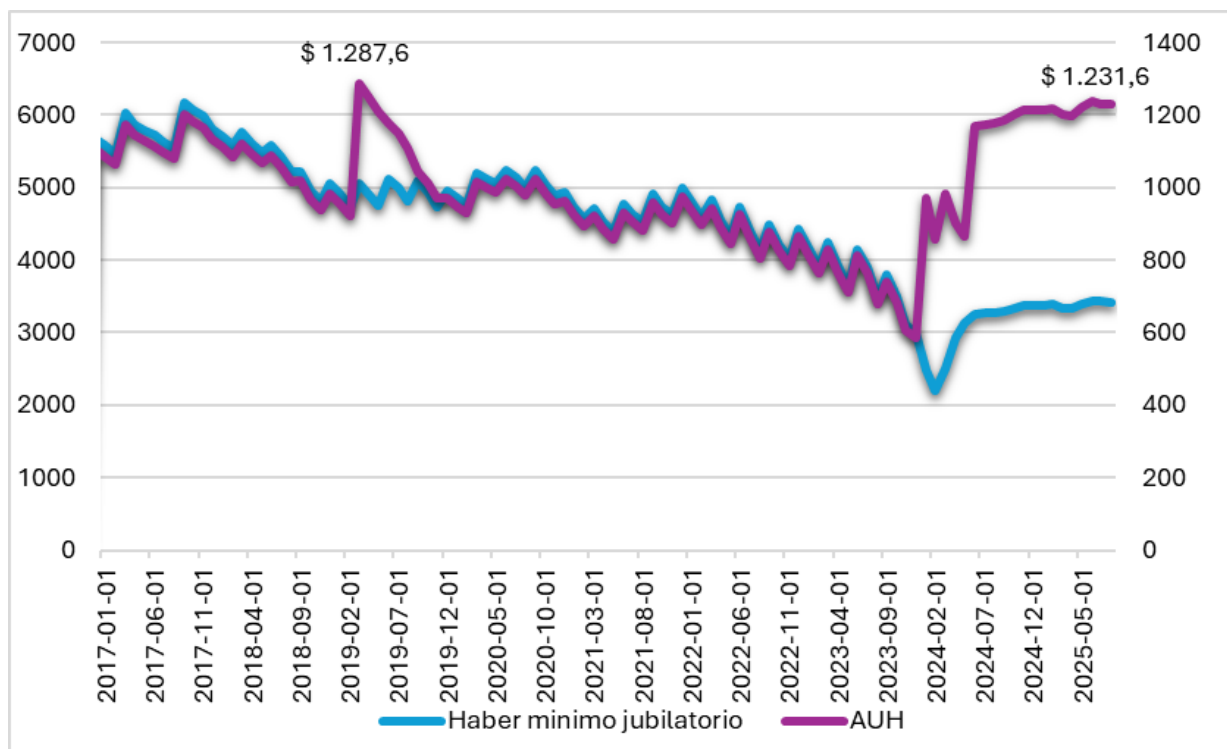
Es decir, en términos de las visiones ortodoxas, la pérdida de poder de compra de los sectores trabajadores no tendría que haber implicado una causa en la gestión macrista (hasta dic 2019), y si explican parte de la presión inflacionaria de los años de la gestión peronista (dic 2019 – dic 2023). Son múltiples los casos de este tipo, en un contexto notoriamente adverso en términos de otras variables macroeconómicas que vale la pena analizar en las siguientes páginas con los datos presentados, tal como en este caso (Lerner; 1949) y

la "Inflación de Empujón de Costos" (Cost-Push Inflation).

Desde la literatura Keynesiana son múltiples la autora citada sostiene que la inflación ocurre cuando la demanda agregada de bienes y servicios en una economía supera a la oferta agregada, cuando la economía está "sobrecalentada". "Demasiado dinero persigue muy pocos bienes". Y por lo tanto la solución propuesta es una política fiscal y monetaria restrictiva (subir impuestos, reducir gasto público, subir tasas de interés).

En la misma línea argumentativa, se presenta a continuación un gráfico con la dinámica que tuvieron los sectores de trabajadores no registrados de la economía (AUH) y las jubilaciones.

Gráfico 3: Jubilaciones y AUH en pesos de dic 2016 (enero-2017; mayo-2025)



Fuente: Elaboración propia en base datos.gob.ar

La serie de AUH en términos reales aumentó desde el 2024, y un trabajador no registrado está ganando lo mismo que en marzo del 2019. Se encuentra un matiz respecto a la teoría económica en el que los gobiernos neoliberales son los que más aumentan el ingreso no registrado.

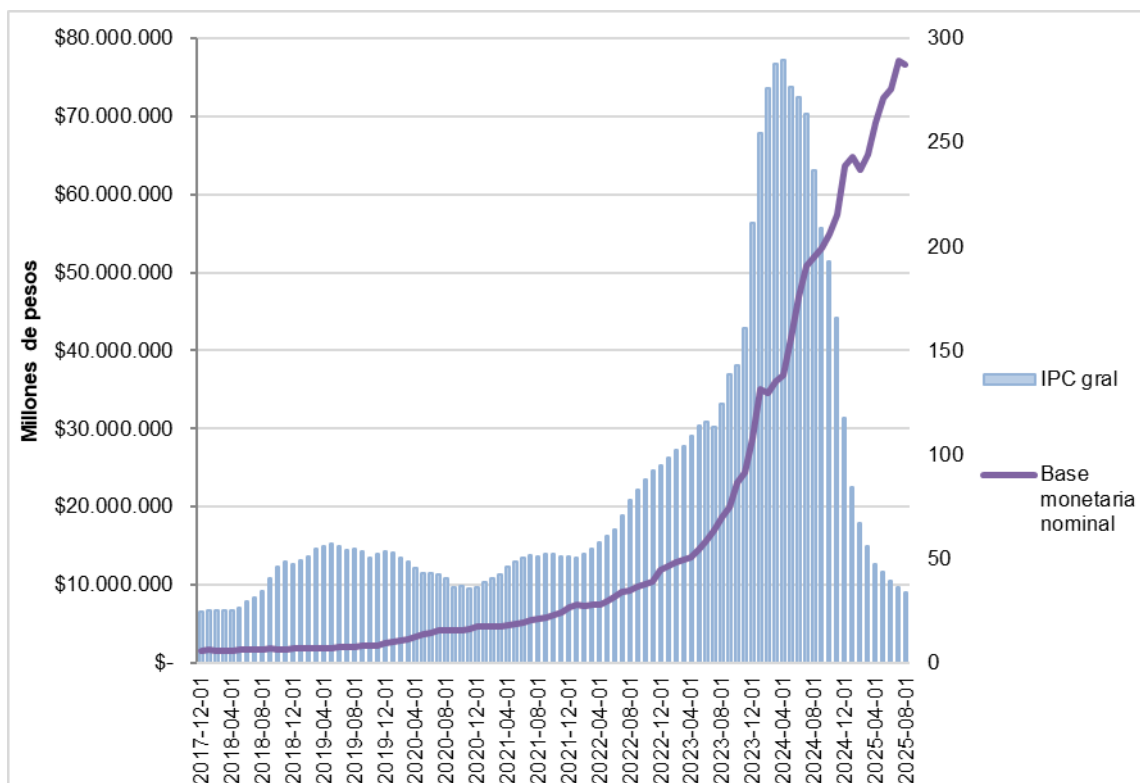
No ocurre lo mismo con el desempeño que tuvieron las jubilaciones en el periodo reciente. El poder adquisitivo de estos ingresos está casi al mismo nivel que en diciembre del 2023, y una pérdida del 43% en comparación al comienzo de la serie.

En resumen, desde el punto de vista de la participación de los costos salariales, la economía no explica su alta inflación, con la excepción de algunos años mencionados. Típicamente en los últimos ocho años, el poder de compra de los

sectores trabajadores y jubilados se ha reducido significativamente, afectando a la lectura de quienes consideran al costo de los ingresos como un factor explicativo de la inflación y unívoco.

Para presentar otras de las variables mencionadas típicamente por la visión liberal, se incluyen variables monetarias. Estos autores pregonan por el achicamiento de la base monetaria, para mejorar la confianza de la moneda y corregir desvíos en la económica, pero impidan el crecimiento, correlativamente tiene que explicar la menor inflación. Por lo cual se presenta la dinámica de la Base monetaria ampliada (M2) y la variación de los precios de la economía (IPC) para el mismo periodo analizado anteriormente buscando comprender la aplicabilidad de una lectura monetarista de la inflación.

Gráfico 4: IPC general y Base monetaria M2 (diciembre-2017; agosto-2025)



Fuente: Elaboración propia en base a datos.gob.ar e INDEC

Se observa que la inflación se incrementa notablemente a lo largo de todo el periodo analizado, mientras que la base monetaria aumenta la pendiente de su curva fundamentalmente desde 2020 con la respuesta estatal a la emergencia sanitaria por la pandemia.

Se observa que hay relación entre la base monetaria M2 en millones de pesos (en circulación, depósitos a la vista, depósitos privados, y otros activos financieros) y la aceleración del nivel general de los precios, sin embargo, desde junio 2024 la inflación comienza a desacelerarse y se invierte. Matemáticamente las series de la base monetaria y los precios presentan una correlación de 0,46 en los años analizados, lo que muestra una relación positiva poco significativa.

Particularmente, un monetarista argumentaría que el aumento de la pendiente de la base monetaria desde 2020 sentó las bases inflacionarias, creando un exceso de liquidez que, eventualmente, debía traducirse en precios, incluso si la relación no es perfecta en el corto plazo debido a "ruidos" en la economía.

La visión keynesiana sostiene que hay distintas visiones acerca de la explicación del dinero. En este sentido, resulta importante repensar el rol de las variables monetarias para analizar el desempeño de los precios, porque se comprende que insoslayablemente juegan un rol en la determinación de los precios, e influyen en la interacción básica de la actividad económica. Keynes sostiene que es incorrecto decir que cuando hay pleno empleo un incremento de la oferta monetaria se traduce en un aumento de precios porque los agentes no demandan dinero solo para transacciones. Y además desarrolla tres motivos a partir de donde se demanda dinero: Por motivos de transacciones, típicamente utilizada por las distintas escuelas de pensamiento, también está el motivo precaución y especulación (reserva de valor) para utilizar el dinero como activo de inversión (Keynes; 1936).

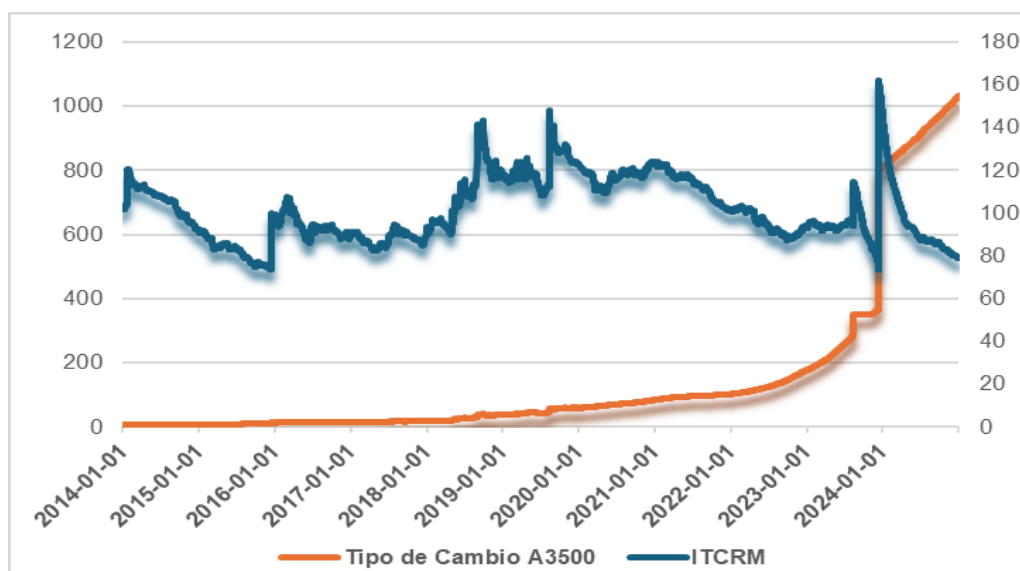
El incremento de la base monetaria, efectivamente, sostuvo la demanda agregada en un momento de crisis. Desde la visión keynesiana, la inflación posterior no se debe sólo al aumento de M2, sino al exceso de demanda sobre una oferta agregada que se vio golpeada por las disrupciones globales de las cadenas de suministro, para ello es necesario analizar el consumo de los sectores trabajadores para analizar si efectivamente hubo un exceso de demanda. Esto se analiza en el gráfico 8.

A lo largo del periodo analizado también habría que considerar especialmente en el rol de la deuda pública, donde los intereses han crecido significativamente en el último año analizado, por lo cual el crecimiento de la base monetaria sigue sin modificarse.

Con lo dicho, se corresponde pensar momentáneamente en la causa monetarista de la inflación, aunque al momento faltan argumentos para encontrar una explicación de la inflación, únicamente a partir del crecimiento de la base monetaria.

Desde el punto de vista estructuralista, es importante hacer alguna mención a al rol de las variables externas. Sintéticamente se presenta a continuación los tipos de cambio (nominal y real) a lo largo de la última década.

Gráfico 5: Evolución tipo de cambio nominal y real



Fuente: Elaboración propia en base a datos.gob.ar

El tipo de cambio nominal ha sufrido un aumento del 16000% desde enero del 2014, y el tipo de cambio real responde a un patrón muy claro de apreciación durante los gobiernos peronistas y abaratamiento durante los gobiernos neoliberales. Con la excepción de la última apreciación de la era Milei. El tipo de cambio real llegó a ubicarse a niveles de noviembre 2023 luego de la fuerte devaluación del 120% en diciembre del mismo año. Asimismo, el recorte sobre las cuentas públicas eliminó presiones sobre el tipo de cambio real, permitiendo sostener el “enfriamiento” de la economía.

Desde el punto de vista estructuralista se pregonaba por un rol “efectivo” o promotor del crecimiento económico, sin que esto signifique una apreciación sostenida del mismo. Dado que la devaluación se reconoce como una instancia necesaria del recupero de competitividad (Diamand; 1971). El encarecimiento extremo del tipo de cambio ocurrió al mismo tiempo de la baja de inflación y es un factor sine qua non de la baja de la inflación. La desaceleración de la inflación, tal como sostienen los economistas estructuralistas, podría ser el

resultado de políticas de shock heterodoxas (como un tipo de cambio atrasado) o de una pacificación temporal del conflicto distributivo (ejemplo: acuerdos de precios y salarios que, aunque frágiles, logran reducir la velocidad de la espiral por un tiempo). En este sentido la política económica ha seguido una lógica heterodoxa.

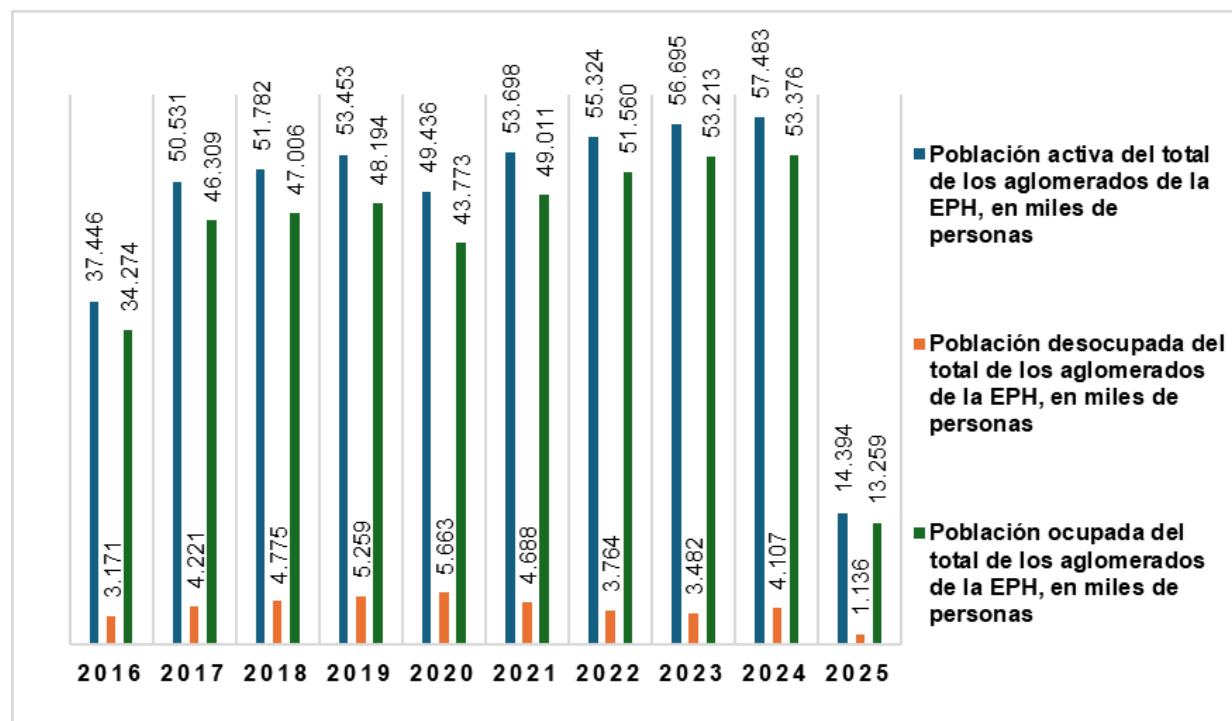
En una mención a Diamand, Sunkel, Olivera, las devaluaciones son mecanismos intrínsecos de nuestra estructura productiva, y son medida que se toman para sostener la actividad económica. La historia reciente muestra un caso de este estilo en el año 2014, donde la devaluación permitió recuperar competitividad internacional sin el costo de una recesión. Lo que se conoce típicamente como una devaluación compensada.

Son múltiples los aportes de los economistas mencionados, pero solo por citar una idea es importante considerar que: “no disponiéndose de divisas no se puede expandir el ingreso y la política de expansión es auto frustrante, ya que se traduce forzosamente en un nuevo ciclo de inflación cambiaria” (Diamand; 1971: 25).

En cambio, en los últimos años de la era Milei-Caputo, las medidas de atraso cambiario no persiguieron el fin de recuperar la actividad, sino

que profundizaron una caída brusca de la actividad económica, como se analiza a continuación:

Gráfico 4: IPC general y Base monetaria M2 (diciembre-2017; agosto-2025)



Fuente: Elaboración propia en base a datos.gob.ar

Entre 2016 y 2024 la ocupación aumentó un 55,7%. En el caso de la desocupación, pasó a 4.107 millones de personas en 2024, un 25,9% más que en 2016. Entre los años analizados, donde se destaca el año de la pandemia con un total de 5.663 millones de desocupados, asimismo solo en el año 2024 la desocupación aumentó un 18% ubicándose en 4.107 millones de personas. Si se analiza el dato de desocupación trimestral del 2025, la cifra aumenta a 4.544 millones. Estadísticamente este aumento puede deberse tanto a despidos concretamente o a un aumento de la masa de población que busca empleo.

Dada la magnitud de la cifra (18% de aumento anual) es insoslayable pensar que se encuentra en la

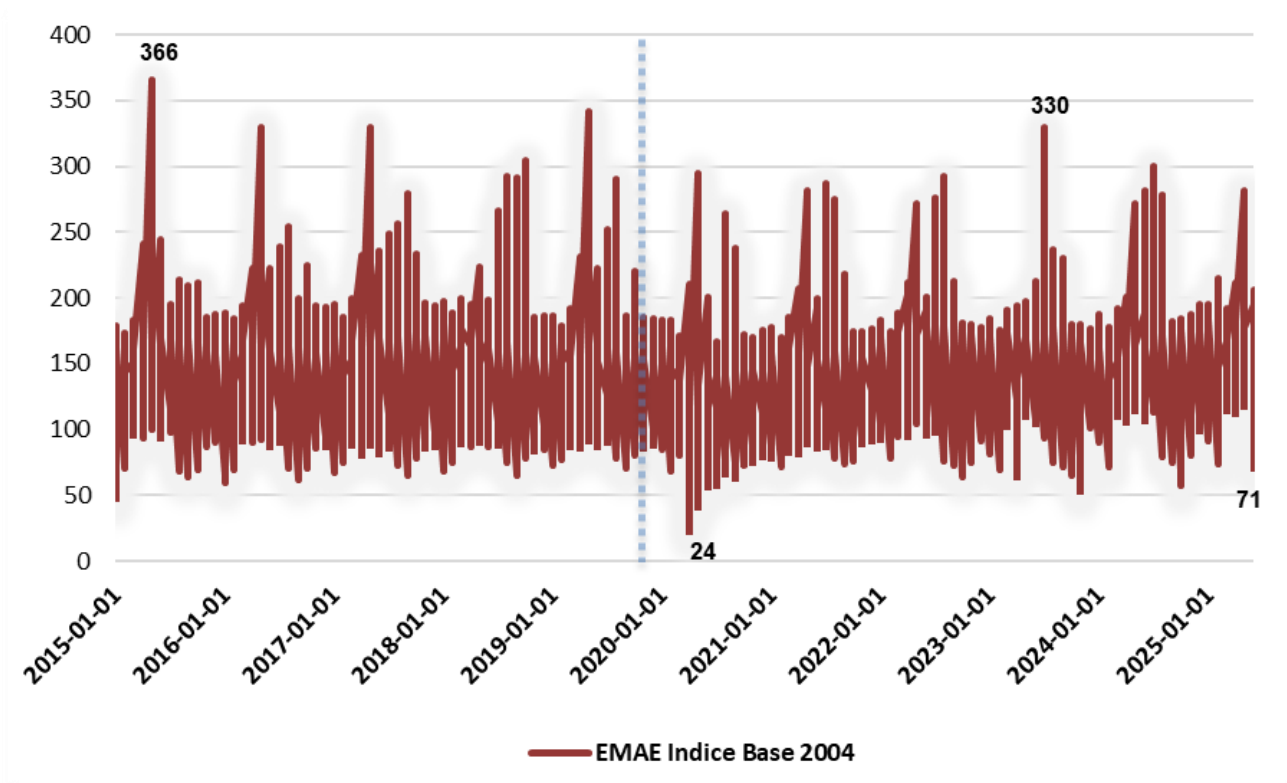
pérdida de puestos de trabajo a una causa importante de la baja de inflación. Es decir, es una economía con precios estables, pero con menor participación del sector trabajador, lo que presiona sobre la puja distributiva y el poder de negociación de este sector.

La desocupación es el mecanismo más sencillo para reducir la aceleración de los precios es, desde la óptica de la teoría cuantitativa del dinero una menor velocidad de transacción por el simple motivo de reducción de ventas. Simultáneamente, los costos asociados a las pérdidas en empresarias intensifican la recesión, tal como se presenta en el Gráfico 7.

Para el justicialismo no tendría razón de ser un ajuste de este estilo, que presione a la baja la inflación con una represión de salarios y baja de los puestos de trabajo.

Adicionalmente, es importante analizar la dinámica de la actividad para analizar alguna variable que comprenda en curso de la economía durante este mismo periodo analizado. Si la desocupación tuviera un efecto en la mejora de los niveles de actividad, podrían explicar la baja transitoria de estos empleos

Gráfico 7. Evolución del Estimador mensual de actividad económica (EMAE) (enero-2015; junio-2025)



Fuente: Elaboración propia en base a datos.gob.ar

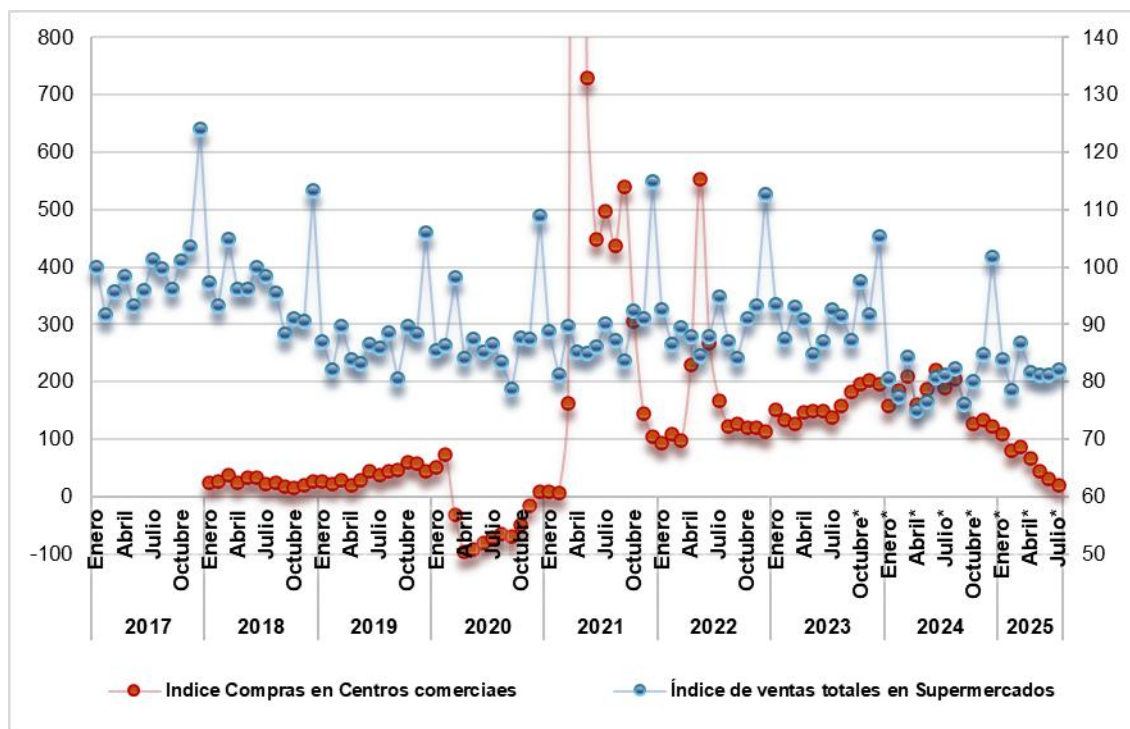
En la última década el EMAE la actividad pasó de 366 en mayo de 2015 a 281 en el mismo mes de 2025, la tendencia del estimador de actividad en la última década es negativa, con un último punto máximo en julio de 2023.

Aun con menores costos en el trabajo, la actividad no se recuperó. El menor costo de la masa salarial no compenso explica la mejora en la inversión productiva, generó recesión en la actividad económica.

Desde la óptica liberal de ajuste, que reduzca bruscamente el gasto público a fin de reducir el Estado, responde a ideologías que poco se relacionan con la mejora en el curso de la economía.

En el siguiente gráfico se presentan los datos de consumo en supermercados y en centros comerciales.

Gráfico 8. Índice de consumo en Supermercados y Centros comerciales (enero-2017; julio-2025)



Fuente: Elaboración propia en base a datos.gob.ar

Se observan una tendencia negativa en el consumo privado de las familias. Las compras en supermercados pasaron de 100 en enero del 2017 a 82 en julio de 2025, (caída de 18%) mientras que el comportamiento del índice de compras en centros comerciales es más errático, con una tendencia mayormente al alza, excepto desde julio del 2024 que sostiene una caída hasta el último periodo registrado.

Es decir, es posible reconstruir que el menor consumo, la menor inversión (a partir de analizar la actividad) y el desempleo creciente son costos fundamentales a partir desde donde analizar la

reducción de la inflación en la etapa del mileísmo. Si se tiene en cuenta que el consumo conforma el 76% de la composición del PBI, son pocos los motivos para pensar en el crecimiento derivado de esta combinación de variables.

El ajuste se ha acentuado principalmente sobre el consumo de las clases trabajadoras, incluyendo puntualmente un desplome del consumo, el aumento significativo del desempleo durante esta etapa, y el ajuste sobre el ingreso de las jubilaciones, y ha posibilitado una baja de la inflación por el importe apreciación del tipo de cambio, aun cuando es una tendencia de los gobiernos que pregonan por

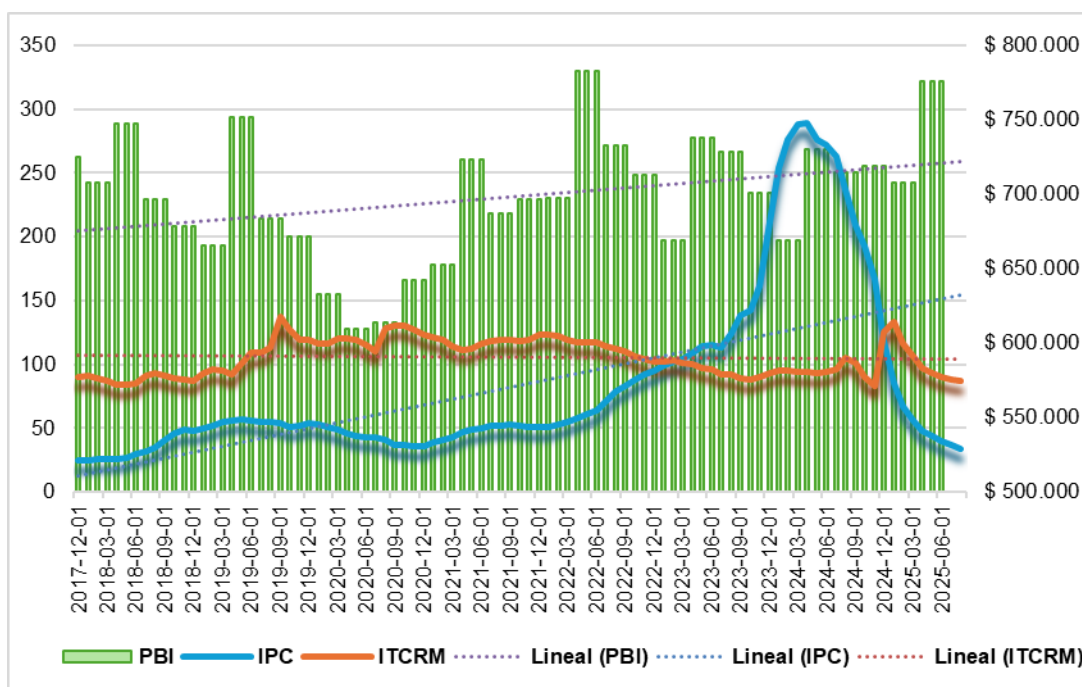
el crecimiento en base al consumo interno. El menor consumo, posibilidad la reducción de la inflación al quitar el efecto de la demanda que empuje los precios al alza, en el típico crecimiento tirado por la demanda interna.

Se demuestra entonces, el particular pragmatismo que ha tenido el tándem Milei- Caputo a la hora de cumplir con uno de los principales lemas de campaña: “inflación cero”. Para lo cual fue significativo el apoyo de otros actores. En primer lugar, el rol del crédito externo del FMI que sostuvo las reservas con un préstamo inicial de 20.000 mil millones y permitió el encarecimiento del tipo de cambio e intervenciones en el mercado de cambios. También resulta un apoyo fundamental el sector agroexportador que mantuvo liquidaciones regulares para el mismo fin de control del tipo de cambio.

En cualquiera de los casos, todos los autores que han trabajado el desarrollo argentino plantean un análisis conceptual profundo entre la vinculación del crecimiento y el fomento a la demanda agregada. Desde los mitos que se lograron refutar está presente “el sacrificio popular y la postergación del consumo para incrementar el ahorro, y acelerar así el crecimiento, frente al incremento inmediato del consumo por razones sociales, o sea, el dilema entre lo económico y lo social” (Diamand; 1971). Por lo cual es refutable la idea del sacrificio de la población para alcanzar el crecimiento.

Por último, para un análisis conjunto, se incluye un gráfico que muestra el desempeño que tuvo el PBI en los últimos ocho años, junto con la vinculación del tipo de cambio real y la inflación

Gráfico 9: Tipo de cambio real, inflación, PBI.



Fuente: Elaboración propia en base a datos.gob.ar

Se evidencia una caída promedio del Producto Bruto interno de 1,7% en el año 2024, que luego mejora en

términos interanuales, e incluso la estadística mejora contra los últimos cuatro años previos,

donde la economía se enfrentó a diversos shocks exógenos. La comparación interanual es “sucía” por incluir los efectos de una devaluación inicial que congeló la actividad económica como se presentó. En términos de “liberar al mercado” la actividad inicial fue reprimida, y la inflación respondió a la menor actividad. Mientras que la apreciación del tipo de cambio permitió motorizar la economía momentánea en el resto del periodo mileista, hasta la actualidad. La sostenibilidad de este tipo de cambio era netamente dependiente de la estabilidad financiera de las reservas otorgadas a Milei.

Por lo tanto, se puede reducir la inflación a partir de atrasar el tipo de cambio, pisar los salarios reales y aun así la sostenibilidad del crecimiento no es significativa. Por lo cual solo responde a un esquema momentáneo de variables sostenidas por el ingreso de reservas.

Conclusiones

El pensamiento económico nacional debe incluir la articulación de los conceptos de la economía contemporánea para lograr pensarla in situ. El aprendizaje que se encuentra de este artículo es la priorización de las cuentas externas, sin temerle a la toma de decisiones heterodoxas (u ortodoxas) en la medida que se sostenga un esquema cambiario con el apoyo entre actores correspondiente.

El monetarismo liberal explica la base de liquidez que hizo posible la inflación, pero no puede explicar su timing, su intensidad variable ni su desaceleración reciente, desde donde no es posible argüir a mismo motivo una desinflación de la economía, como se ha visto en este artículo. Por su parte, el keynesianismo explica el canal de la demanda que activó la presión inflacionaria en

2020-2023, y el enfriamiento de la economía que la sostiene baja en el último bienio. El estructuralismo proporciona el marco esencial para entender por qué la economía argentina es tan propensa a estos episodios, debido a su restricción externa y la importancia de equilibrar el frente externo de la mano de un tipo de cambio políticamente arbitrado. Y la teoría de costos y conflicto distributivo ayuda a entender los componentes de inercia y cómo los shocks externos y la puja interna alimentaron la espiral salario-inflación, evento presenciado históricamente en el periodo 1972-1974.

Frente a las limitaciones que presentan estas visiones están algunas que pretenden trasladar el planteo de Keynes desarrollado para Estados Unidos en los años treinta, a la Argentina de los 2000.

Sin embargo, es posible un crecimiento con inflación controlada a partir del multiplicador keynesiano, cuando en simultáneo se considera las particularidades de la estructura productiva desequilibrada de la Argentina. Es decir, la vinculación entre keynesianismo y estructuralismo permite diagnosticar y encontrar un curso de acción para los problemas de nuestra economía, atendiendo, principalmente al crecimiento con distribución.

El conjunto de estos puntos hace a considerar un aprendizaje para la fuerza justicialista. La utilización de diversos instrumentos, sean de la escuela económica que fueran, permite responder a las demandas sociales, lo cual demuestra la experiencia de política económica más reciente. Únicamente es posible a partir de la generación de la fuerza política que acompañe las medidas necesarias.

Bibliografía

Blanchard O. (2017)- Macroeconomía. 7ª ed. Pearson Educación,

Diamand M. La Estructura Productiva Desequilibrada Argentina y el Tipo de Cambio. Desarrollo Económico Vol. 12 N° 45. 197

Diamand M (1971) Seis Falsos Dilemas en el Debate Económico Nacional, "El Cronista Comercial"; y Centro de Estudios Industriales,, N° 5

Friedman M. (1962). Capitalismo y libertad. Chicago: University of Chicago Press

Keynes, J. M. (1994). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Planeta. Fuente de Academia.edu.

Lerner Abba (1949) "The Inflationary Process. Some Theoretical Aspects" Revista: The Review of Economics and Statistics, Vol. 31, No. 4.

Martínez de Hoz, J. (1981). Bases para una Argentina moderna. Buenos Aires: Compañía impresora argentina S.A.

Poder ejecutivo nacional (1973). Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. Obtenido de <https://www.iade.org.ar/noticias/plan-trienal-para-la-reconstruccion-y-la-liberacion-nacional#:~:text=El%2021%20de%20Diciembre%20de,de%20Per%C3%B3n%20en%20esa%20C3%A1rea>.

Prebisch, R. (1948). El desarrollo económico de la. América Latina y algunos de sus principales problemas. Santiago de Chile: CEPAL.

Sunkel, Osvaldo (1973) Inflación y estructura económica /; - (Autor) · Libro · Spanish · Buenos Aires, Argentina: Paidós,. · Biblioteca América Latina.

Entendiendo el Modelo Económico Justicialista

Por Agustín Acevedo Gómez

Introducción

Para comprender el proyecto de país que representa el justicialismo, es fundamental analizar su corazón económico: el Modelo Económico Justicialista (MEJ). Lejos de ser un manual de instrucciones rígido o una teoría abstracta, el MEJ es un esquema flexible y dinámico, diseñado para adaptarse a los desafíos de cada momento histórico sin traicionar a sus principios fundamentales. No se trata de una copia de modelos liberales o socialistas; es una alternativa que nace de nuestra propia historia, poniendo al trabajo en el centro del desarrollo y al Estado como garante del equilibrio social.

El modelo justicialista se sostiene sobre las tres banderas históricas del peronismo, que se traducen en conceptos económicos claros y concretos.

1. SOBERANÍA POLÍTICA

En un contexto marcado por presiones externas y la influencia de grupos concentrados, la soberanía política emerge como uno de los principios fundamentales para garantizar que la economía responda a los intereses nacionales y de la voluntad popular. Bajo este principio, se sostiene la necesidad de un Estado fuerte y autónomo; solo así será posible tomar decisiones estratégicas que reflejen la voluntad popular.

La soberanía política garantiza que de que la política económica se diseñe y ejecute respetando el bienestar de todos los argentinos; asegurando la independencia en las decisiones estratégicas frente a cualquier intento de injerencia externa.

2. INDEPENDENCIA ECONÓMICA

La independencia económica es considerada un requisito fundamental para alcanzar la soberanía plena. Un país verdaderamente soberano debe controlar sus recursos estratégicos y su aparato productivo

En este sentido, el MEJ marca una diferencia clave frente a otros modelos: limita el endeudamiento externo únicamente a aquello que resulte estrictamente necesario. Esta decisión parte de la premisa de que las inversiones y el desarrollo deben responder, ante todo, a los intereses nacionales.

Así, se busca blindar al país frente a las presiones internacionales y garantizar que cada paso en materia económica esté orientado al fortalecimiento de la industria local, que, en conjunto con el control de los sectores clave -a través de la nacionalización de servicios públicos y empresas estratégicas- garantice asimismo la soberanía sobre nuestros recursos fundamentales.

La nacionalización del Banco Central, la creación del IAPI y la recuperación de los ferrocarriles en la década del 40 junto con la reestatización de YPF en 2012 son algunos ejemplos de acciones que promueven la consolidación de un modelo de desarrollo autónomo y sustentable.

3. JUSTICIA SOCIAL

La justicia social orienta la economía como una herramienta al servicio del bienestar colectivo y la dignidad humana. Este principio se traduce en la garantía de una distribución equitativa de la riqueza, la ampliación de derechos laborales y sociales, junto con la certeza de que el crecimiento económico se refleje en una mejora concreta y real

en la vida de las mayorías populares. Así, el modelo justicialista asegura que el desarrollo económico esté orientado a la inclusión y la dignificación de los trabajadores.

EL TRABAJO Y LA INDUSTRIA NACIONAL

En el marco del Modelo Económico Justicialista, el trabajo y la industria nacional ocupan un lugar central y diferenciado respecto a otros enfoques económicos. Mientras que ciertos modelos consideran el salario como un costo a minimizar, desde la perspectiva justicialista se lo entiende como la palanca fundamental para poner en marcha un círculo virtuoso de crecimiento. Este enfoque reconoce a la clase trabajadora y al empresariado industrial nacional no solo como beneficiarios, sino como protagonistas activos del desarrollo.

1. MEJORES SALARIOS Y DERECHOS LABORALES

La dignificación del trabajador es un principio rector. El trabajador deja de ser visto como un simple recurso productivo y pasa a ser considerado un sujeto político y social con derechos. Elevar el poder adquisitivo de los trabajadores no es solamente un acto de justicia social, sino que constituye el punto de partida para dinamizar toda la economía. Con mejores salarios y condiciones laborales, se fortalece el tejido social y se generan las bases para un crecimiento sostenible.

2. EXPANSIÓN DEL MERCADO INTERNO

El aumento del ingreso en manos de las mayorías populares se traduce en una mayor capacidad de consumo. Este crecimiento en la demanda interna resulta fundamental para la industria nacional, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que encuentran en el mercado interno a su principal cliente. Así, el bienestar de los trabajadores y el fortalecimiento del consumo interno se retroalimentan, generando nuevas oportunidades y consolidando el desarrollo económico nacional.

3. CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Para responder a esta demanda creciente, el empresariado industrial invierte, incrementa la producción y crea nuevos empleos, lo que a su vez refuerza el círculo virtuoso del modelo. El Estado cumple un rol activo en este proceso, facilitando crédito productivo en condiciones accesibles y aplicando políticas que protegen a la industria local frente a la competencia externa desleal. De esta manera, se garantiza que el desarrollo industrial no solo beneficie al sector empresarial, sino que también contribuya a la generación de empleo y al bienestar general.



Fuente: Elaboración propia

EL ROL DEL ESTADO ACTIVO

Para que este modelo funcione, el rol del Estado es insustituible. No debe ser concebido como un mero observador o un interventor burocrático, sino como un estado activo: planificador, emprendedor y articulador de los intereses de la Nación.

Su objetivo principal consiste en alinear los intereses del capital y el trabajo en pos del proyecto nacional, mediante la gestión soberana de todos los instrumentos de política económica:

POLÍTICA FISCAL: El gasto público es considerado una inversión destinada al fortalecimiento de la infraestructura productiva (comunicación, energía) y al desarrollo del capital social (educación, salud), siendo un mecanismo relevante para propiciar la movilidad social ascendente.

POLÍTICA MONETARIA: Se promueve que el crédito sea asequible y económico para los productores, desincentivando la especulación financiera. El Banco Central actúa regulando el sistema para evitar la concentración y la fuga de capitales.

POLÍTICA TRIBUTARIA: Se busca implementar una estructura progresiva, gravando las rentas extraordinarias y otorgando incentivos fiscales a aquellas empresas que reinvierten dentro del país, en vez de transferir sus utilidades al exterior.

POLÍTICA INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA: Impulsa la sustitución de importaciones y el desarrollo de sectores estratégicos, incluyendo la creación de empresas de alta tecnología como INVAP o ARSAT.

El Estado Activo es el pilar sobre el cual se edifica el Modelo Económico Justicialista, el mismo no actúa

como un espectador del mercado, sino que es el corazón ejecutor del proyecto de nación, transformando los principios doctrinarios en una realidad económica tangible.

La gestión coordinada y soberana de las políticas cambiaria, fiscal, monetaria y tributaria no representan medidas aisladas, sino un conjunto que busca canalizar los recursos hacia la producción, la protección de la industria nacional, la creación de empleo de calidad y la garantía de que la riqueza se redistribuya con un criterio de justicia social.

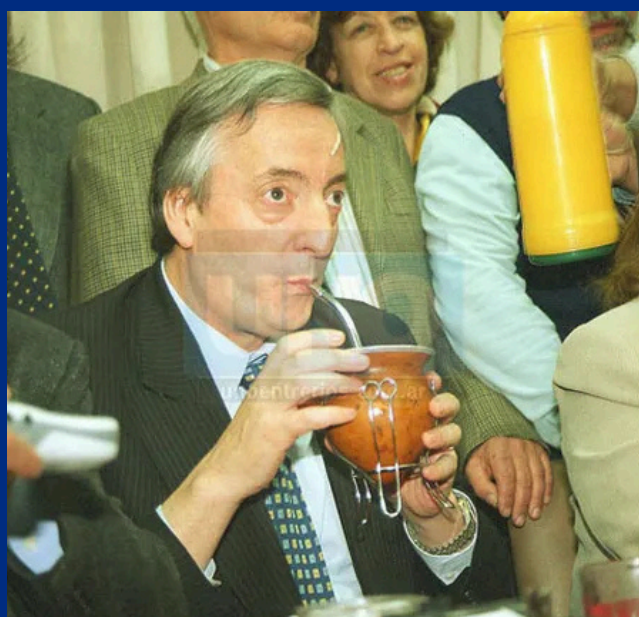
ACTUALIDAD Y DESAFÍOS DEL MODELO ECONÓMICO JUSTICIALISTA

La globalización financiera, la digitalización de la economía y la aparición de nuevas formas de trabajo precario plantean desafíos inéditos para nuestro modelo. El ascenso de nuevas potencias y formas de cooperación internacional también nos invitan a repensar cómo lograr la independencia económica en un mundo hiperconectado.

A pesar de estos nuevos escenarios, creemos que los principios del Modelo Económico Justicialista siguen plenamente vigentes. La construcción de una economía al servicio del pueblo, que priorice la producción nacional y el trabajo digno sigue siendo el único camino para garantizar un futuro de justicia social, soberanía política e independencia económica para la Argentina.

En este sentido, resulta imprescindible fortalecer los espacios de participación y diálogo entre el Estado, los trabajadores y el sector empresarial, promoviendo consensos que permitan diseñar políticas públicas adaptadas a los desafíos actuales.

Solo a través de una acción coordinada y sostenida, podremos afrontar el desafío actual, que no consiste en cambiar el modelo, si no en encontrar las herramientas políticas para aplicarlo con inteligencia y audacia a la realidad del Siglo XXI, consolidando un modelo de desarrollo inclusivo que garantice la mejora permanente de la calidad de vida de todos los argentinos y asegure la inserción soberana del país en un nuevo contexto global.



ENTREVISTAS

En este espacio presentamos conversaciones con protagonistas del pensamiento y la acción política vinculados al Justicialismo Económico. Las entrevistas buscan recuperar voces que contribuyen a la construcción de un proyecto nacional basado en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, así como discutir los desafíos que plantea el neoliberalismo contemporáneo.

Entrevista A Delfina Rossi

Delfina Rossi: Magister en Economía de la Universidad de Florencia, Italia, directora del Banco Ciudad, Autora del libro: Conducir al Capital y docente universitaria.

Considerando el cambio de siglo, los cambios que venimos viviendo nosotros en Argentina muy puntualmente, del 2000 en la adelante y los cambios de hegemonía comercial también que están impactando fuertemente tanto a nivel global como nacional. Entonces la pregunta primera es ¿Cómo se hace política económica con una mirada y una visión justicialista durante este siglo?

Bueno, muy bien, en primer lugar, lo que me parece importante destacar es que el justicialismo es una ideología política que está situada en un momento histórico y que por tanto nos obliga a que todo el tiempo tengamos una visión crítica de cómo sostener las banderas del justicialismo, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política en cada momento histórico. Y eso evidentemente requiere lo que Yanina decía antes, que es una mirada del mundo, bueno, que se haga pregunta continuamente o que se haga resueno, que piense estratégicamente el rol de la Argentina en este mundo. En segundo lugar, evidentemente la política económica depende mucho también de factores, si se quiere, estructurales y factores coyunturales. Los estructurales están ligados a las capacidades productivas, la cadena de valor, las cadenas comerciales, la disponibilidad o no de recursos naturales, etcétera, etcétera, y la distribución, si se quiere, estructural del ingreso, de qué pasa con el ahorro y otras capacidades, y la coyuntural está más ligado al ciclo económico en el corto plazo, ¿no? Y ahí sí obviamente la política económica tiene que ver en cómo mantenemos esta idea de suavizar el ciclo, pero me parece que muchas veces lo que nos, lo que se aleja de la discusión



política pública es cómo construir esa tendencia a largo plazo de crecimiento económico, de desarrollo económico, donde puede haber un ciclo pero que la tendencia se sostenga, ¿no? Y digo que se aleja del debate político porque hay eventos que nos demuestran que la voluntad de nuestras fuerzas políticas y del justicialismo es inclinar hacia arriba esa tendencia, ¿no? Eventos particularmente como recuperar YPF y apostar por vaca muerta, está permitiendo que hoy haya un cambio estructural donde la Argentina no solo haya llegado al auto abastecimiento, sino pueda pensarse como exportadora, ¿no? Y esto es gracias a una política pública y una visión estratégica que no solamente parte de la recuperación de YPF por parte de Cristina Fernández de Kirchner, le voy a decir de memoria, en el 2010, creo que fue por ahí, estoy, corríjanme si no fue el año de reestatización, ¿un poquito más tarde? ¿2014? ah 2012 (se ríe) ahí va, gracias. Sino que también está el hecho fundacional que Néstor Kirchner cuando llega a la presidencia en el 2003 ya plantea un plan estratégico de energía nacional, ¿no? Entonces esas miradas de planes estratégicos, de tener un ministerio de planificación, de inversiones a largo plazo, de empresas públicas

que vayan a largo plazo, tienen que ver no solo con suavizar el ciclo económico, principalmente cuando es recesivo y que para eso también hay políticas que suavizan la expansión, etcétera, sino sobre todo en cómo inclinas la curva de la tendencia del PBI y del crecimiento económico, que me parece que es algo que nos tiene que ocupar más tiempo y a veces no sucede, ¿no? Pero insisto, tenés esas dos grandes miradas sobre las cuales hay que actuar y me parece que muchas veces discutimos mucho sobre las de coyuntura, las de ciclo económico y no las de largo plazo, ¿no?

Y en base a esto que decís, considerando obviamente esta evolución y considerando que tanto la presidencia de Néstor como de Cristina vinieron a marcar un punto de inflexión en el debate económico y político en nuestra historia, preguntarte en qué momento pensás vos que estamos en el debate económico en la Argentina, o sea, ¿en qué momento estamos hoy día puntualmente con estas cuestiones? Obviamente también que exceden el plano económico, como el encarcelamiento de Cristina, como la persecución política a distintos militantes y demás.

¿en qué lugar está el debate económico del peronismo hoy? ¿Y a qué responde eso?

Voy a empezar más grande al llegado a la primera pregunta. ¿Qué están debatiendo hoy los economistas de las principales escuelas del mundo, no? El debate hegemónico mundial. Bueno, hay un debate que está empezando a tener muy fuerte. Yo creo que hay dos debates esenciales. Uno de qué es lo que no funciona del capitalismo, ¿no? Y hay mucho de los límites que tiene la expansión del Estado en este mundo capitalista, en la mirada crítica de Occidente, que no dice cómo fue el Keynesianismo o el neoliberalismo, que está claro que era más o menos Estado. Creo que hay un debate más crítico en el mundo de qué tipo de Estado necesita el capitalismo hoy, ¿no? ¿Cuál es la gobernanza que tiene que darse? Obviamente hay detractores del estatismo y propulsores del libre

mercado y hay defensores del estatismo. Pero en el medio hay un debate crítico, ¿no? Hay un debate crítico de Mazzucato diciéndote si la innovación primaria necesita el Estado, pero por otro lado diciendo, bueno, hay que ver si es el Estado el que se tiene que hacer cargo de todo o no, o cómo tiene que cobrar impuestos ese Estado, los ricos haciéndose cada vez más ricos. Pero me parece que hay un debate interesante sobre hasta dónde llega el Estado.

hay un libro que ahora no recuerdo el autor, que es indio, que es *What Went Wrong With Capitalism*, que es como el último en la literatura de esto. Y hay otro libro muy interesante que se llama *Trade Wars Are Class Wars*, las guerras de comercio son guerras de clase. Y discute esta idea de *Michael Pettis*, que discute esta idea de que en realidad los desequilibrios y las guerras comerciales que estamos viendo tienen que ver con la opresión que hay en determinados estados hacia adentro de su propia clase trabajadora, ¿no? Entonces, si China no levanta los salarios, todo bien, siempre nos va a ser más barato importar productos de China. Dicho en sencillo, en criollo. Pero ahí hay un tema porque, bueno, claramente China estaba siendo oprimida por la expansión de las finanzas yankees y compensó eso ganando competitividad a partir de sostener salarios bajos. Bueno, ¿cuál es la estrategia? En un mundo en donde se diluye la gobernanza global, esos dos grandes temas, ¿qué pasa con el comercio internacional? Según las estrategias que cada país toma y, por otro lado, las desigualdades que se ramifican hacia adentro de los estados. Y, por otro lado, ¿cuál es el rol de los Estados? Bueno, aparece todo ramificado y desperdigado y perdido, ¿no?

¿Qué pasa en Argentina? Yo creo que lo coyuntural es un debate muy apasionado de defensas de intereses fragmentados y parciales, los que quieren defender el Garrahan, los que quieren defender el INTA, los que quieren defender la ANMAT, los que quieren luchar y defender el Banco Nación y todo

segmentado, creo que no hay grandes miradas, ¿no? Exceptuando quizás la de Cristina y en su medida Kicillof también, obviamente, de cómo todas esas luchas están interconectadas o cuál es el vínculo o cuál es, además, la solución superadora. Creo que desde el debate económico están los que dicen, bueno, el Estado tiene que hacerse cargo no importa cómo. Y los que entran en el cálculo financiero, bueno, este derecho cuesta tanto y entonces, como dice Milei se lo saco a los Pymes, el mismo Milei, de alguna manera decía, paguémosle a los jubilados a costa del desarrollo PyMe. Bueno, no sé si está, digo, es como que siempre es el juego de la sábana corta.

Creo que yo decía Cristina y Axel, intentan tener una narrativa global de lo que está sucediendo. Me olvidaba que quizás el que más narrativa global tiene y coherente desde su mirada es Milei, ¿no? Dice, bueno, yo quiero un mundo donde una economía donde, si tiene que haber cadáveres en la calle, los haya, ¿viste? Entonces, como del otro lado de Milei aparece disuelto o difuminado la alternativa, esa mirada de Milei, creo que toma más protagonismo. Era que realmente tienen una sociedad que yo creo que sí valora lo público, que sí valora que esté el club, que estén las escuelas, que estén los hospitales, digo, pero que queda difuminada en el debate público.

Hacia adentro del peronismo, como para cerrar esta segunda pregunta, yo creo que hay un reconocimiento de que es central en la estabilidad de precios para gobernar la economía argentina, que la economía bimonetaria y las debilidades en nuestra estructura productiva exacerban esta economía bimonetaria ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos que los precios estén estables en términos de política macro, me parece que no hay tanto consenso sobre cuáles son los instrumentos.

¿sí o sí para mantener estabilidad de precios necesitas superávit fiscal? Bueno, algunos dicen sí o sí porque más allá de que sepamos que la vía causal es difusa de déficit fiscal a precios, no todo es emisión monetaria. Eso lo entendemos como

consenso si pareciera que el mercado valida un aumento de precios si vos tenés déficit fiscal. Y como no juegas solo, pareciera que nos tenemos que casar con el superávit fiscal, ¿no? No lo sé. Digo, yo creo que tenemos un consenso de que necesitamos estabilidad de precios. No hay tanto consenso sobre la herramienta. Y creo que hay otro gran consenso que es que necesitamos exportar más y mejor. De nuevo, no hay consenso sobre la herramienta. Digo, no sé si hay un consenso dentro del peronismo sobre si está mal bajar retenciones. Porque la verdad es que yo creo que si vos bajas retenciones, pero le pedís al campo que reinvierta sus utilidades y que te genere mayor productividad, por ahí compensas ese incremento de precios de bienes primarios con una mayor capacidad de ingreso, que podemos generar con la rueda económica, ¿no? Creo que no tenemos consenso sobre el instrumento, sí, con estos dos grandes objetivos, ¿no? Estabilidad de precios, más exportación y que eso, obviamente, sí, con un Estado que al menos sea más humano a la hora de compensar situaciones marginales. Pero, de nuevo, creo que la experiencia de la llamada economía popular todavía no está metabolizada hacia adentro del movimiento peronista de si estamos a favor o en contra.

Me parece que hay defensores y detractores hacia adentro del peronismo. Y eso es un desafío hacia adelante, sobre todo en un esquema económico donde los avances tecnológicos, la IA, la automatización, hace que cada vez se necesite o que aumente la productividad del trabajo, algo que es positivo, pero que eso explique mayor rentabilidad del capital y, por tanto, peores condiciones laborales, a priori, o al menos mejores condiciones laborales e iguales, pero para menos gente. Y, entonces ¿cómo redistribuís? Creo que ahí hay un gran desafío. Insisto, yo creo que no hay saldado una posición como peronismo de qué pensamos de la economía popular. Entendiendo la economía popular, la cual es subsidiada por el Estado para existir, no es toda, hay un debate muy filosófico y profundo sobre lo que es la economía social, la

economía social y solidaria, etcétera, etcétera, pero ahí creo que tenemos un debate pendiente, sobre todo porque si las expectativas de dos ramas del peronismo es que lleguemos al gobierno y demos planes sociales y planes de trabajar a todos los desocupados sin que eso tenga mejoras de productividad, empleo, etcétera, me parece que eso colisiona con el objetivo de tener una macro más o menos estable. Pero, al mismo tiempo, tenés una necesidad social y humana muy fuerte. Y creo que no tenemos saldado ese problema de cuál va a ser la respuesta en el corto plazo.

Muchos lanzamientos de campañas vi que empezaban con el eslogan déficit cero. Y después había una reivindicación hacia el Estado. Hicimos tantos jardines y etc. ¿Por ahí no crees que al debate económico le corrió a la cancha esto de las cuentas fiscales por encima de la reivindicación del Estado sin importar el resultado fiscal? Estamos discutiendo las herramientas como objetivos.

Exacto. Exactamente. Sí, yo creo que discutimos las herramientas y no el objetivo. Pero porque también estaríamos, cuando uno, yo diagnosticaba en la campaña del 23, me acuerdo que varios me miraban mal y decían, la esperanza la tienen los de Milei. Y no habían pasado ni siquiera la primera vuelta. La esperanza era un buen activo del votante de Javier Milei. Y eso era un problema, ¿no? Porque nosotros como proyecto político que estuvimos a 3 puntos de ganar las elecciones en primera vuelta, no estábamos siendo capaces de generar una esperanza. ¿Y para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué te encerraste 2 años en la pandemia y viviste con barbijo y te sacrificaste y los trabajadores, muchos registrados pagaron el 30% de sus salarios para sostener la pandemia? ¿Para qué nos bancamos la inflación? Porque en realidad había perdido el sentido. Yo creo que nunca pudimos explicar que la emisión monetaria tenía que ver con que no teníamos capacidad de financiarlo de otra manera. Y que esa emisión fue a la gente, fue a las grandes

empresas, fue a Techint y a Clarín que recibían los repos en medio de la pandemia. Pero, además, no pudimos explicar eso para que te hubieras sentido el esfuerzo que hacían la mayoría de las familias argentinas. Y, sobre todo, no pudimos planear un horizonte. Teníamos el plan Argentina 2030, teníamos proyectos, etcétera. Pero me parece que nos había ganado la cotidianidad. Obviamente, ¿cómo decirlo? El legitimar el acuerdo con el FMI también nos impidió dar un debate político de por qué era ilegítima esta deuda y por qué era un acuerdo de Macri, por qué, etcétera, etcétera. Digo, yo creo que la legitimación, desde el minuto cero, ni siquiera hablo del momento de la votación. Políticamente habíamos legitimado esa línea. Y eso nos alejó mucho de la gente. A un pueblo que ya no tenía derechos y tenía cada vez más monotributos y cuentapartistas, le decíamos que iban a perder sus derechos. Entonces, la gente te miraba y te decía, ¿Qué derechos mami? Entonces, yo creo que hoy estamos en condiciones de tener un debate más sincero, al menos yo intento tener un debate más sincero, donde expliquemos que el modelo económico tiene que ver con mejorar las condiciones reales y materiales de la vida cotidiana de la gente. Y eso hoy, para mí, lo que quiere decir es que la gente tenga un poquito más de tranquilidad y recupere la capacidad de tener tiempo, de que no labure los fines de semana, de que pueda ir a buscar a sus hijos a la escuela, de que pueda ir de viaje a ver a un familiar, a una abuela, a un tío, que tenga la guita necesaria para volver a vivir dignamente. Y después van a llegar derechos.

Estamos en un nivel de explotación laboral y de supervivencia que lo primero que me parece que tenemos que ponernos de acuerdo es que salgamos de este nivel de trabajar para que el otro se haga rico y no para vivir. Una cosa es trabajar para vivir. Digo, pero ¿dónde está el trabajo dignifica? Bueno, después dijimos, trabajemos para vivir si el trabajo no dignifica. Ahora trabajamos para sobrevivir, simplemente para comer, porque ya no tiene sentido, porque el trabajo de tras las horas y horas,

changa tras changa, no se queda, no te alcanza para nada. Entonces, me parece que tenemos que primero empezar a recuperar el trabajo para vivir, para después empezar a que tenga sentido el trabajo dignifica, con derechos, con expansión, con un montón de cosas que requieren un cambio estructural, que requieren una macro ordenada, que requieren que puedas financiar el desarrollo nacional. Obviamente, con inversiones extranjeras directas, como decía Cristina, que de manera inteligente pidamos transferencia tecnológica, que pidamos la conexión de la Argentina con el mundo, que hagamos convenios inteligentes. Sí, pero también y sobre todo, lo que tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos y las argentinas, es que la plata que se produce en Argentina quede en Argentina, se reinvierta en Argentina, tenga sentido volverla a invertir acá. Y esto es simplemente, digo, Argentina a pesar de ser deudora del FMI, es la acreedora neta del resto del mundo.

as grandes riquezas de la Argentina están depositadas en el resto del mundo. Ahí tenés un problema. Entonces, lo que tenemos que intentar es bajar un poco los niveles de discusión política, poner algo de racionalidad e intentar llegar a acuerdos con determinados sectores —nos gusten más o menos— para que haya reinversión y para que la Argentina pueda crecer. Cuando le decís al campo: ‘che, te saco retenciones, pero reinvertí’, no le estás diciendo que el Estado se va a apropiarse de su riqueza; le estás diciendo: ‘macho, si te está yendo bien con la soja, ponete a invertir en fábricas de tractores, capitalízame Vicentin para que no se caiga’. No sé, hagan algo: sácame la mochila de la deuda que está concursada, invertí ahí y generame un complejo exportador más grande, en vez de estar importando naranja de Egipto. De eso es de lo que tendríamos que estar hablando.

Me parece que el mundo nos está dando una oportunidad con esta reconfiguración del comercio internacional que estamos viendo. Creo que falta altura y visión en la discusión política, y creo que la

única que estaba aportando esa mirada era Cristina, y por eso la sacan de la cancha.

Porque Cristina dijo, che, ok, no era más Estado, es un Estado eficiente. Bueno, discutamos cómo, y además dijo, automaticemos, pongamos guía en el Estado, y que los trabajadores del Estado salgan a recorrer el territorio. Ah, y el territorio no es solo el AMBA. Claro, porque mucho la nación, la nación, la nación, pero ¿cuántos funcionarios conocemos que estén recorriendo las provincias? ¿Cuántos conocíamos del gobierno anterior? Porque todo, fantástico, Milei por lo menos es coherente, nunca fue. Pero la realidad es que cuando uno recorre el territorio y vas a las provincias, y te juntás con la cooperadora que depende de Mirgor en Tierra del Fuego, que depende del régimen para producir, y entonces, bueno, ahí está la política pública real, efectiva, que cambia la vida de la gente, y que a su vez debe ser estructural.

¿cómo pensamos un sistema financiero parecido al que Perón diseñó en el '46 y el '49, con depósitos nacionalizados y orientado al desarrollo productivo? No digo nacionalizar los depósitos hoy, sino repensar un sistema financiero que vuelva a estar orientado al crédito, a la inversión, al consumo y al desarrollo productivo del país, en un contexto donde todavía seguimos bajo la Ley de Entidades Financieras que impuso la dictadura.

Yo no creo que el conflicto lo tengamos en la ley de entidades financieras. De hecho, Cristina, cuando modifica la carta orgánica del Banco Central, lo dice, que ella no consideraba que era algo que necesitabas modificar. Porque además, básicamente, después del 2001, la banca extranjera privada más o menos se retira del país. Pensá que el grupo Galicia es un grupo, en realidad, nacional. La banca extranjera privada que tenés es principalmente Santander y después tenés ICBC, HSBC. Pero los principales bancos de la Argentina, particularmente el Banco Nación, son los bancos públicos, ¿no?

Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenés un 6% a 8% de crédito a PBI cuando el resto de la región tiene niveles mucho superior, no? Estamos hablando de México, un 34% de crédito a PBI. Estamos hablando en Brasil, que llega casi al 70. Y estamos hablando de que en Chile llega a más del 100%, ¿no? Bueno, me parece que no hay, obviamente, una única respuesta. Pero lo que te da, básicamente, es que si vos estás, si vos, Estado, necesitás financiamiento, solamente que puedas pedir financiamiento al sistema financiero nacional, porque no te presta el mundo y no hay otros actores con grandes capitales, bueno, terminás haciendo un *crowding out*, ¿no? O sea, que optás el crédito disponible a costa de que vaya al sector privado. Porque, en definitiva, te aumentan las tasas.

Hubo tasas reales negativas. Hay defensores muy importantes de nuestro sector que creen en eso. Pero, ¿cuál es la contra cara de la tasa real negativa? Y que la moneda no te sirve de ahorro. Porque vos, cuando tenés inflación y vos tenés tasa real negativa, quiere decir que vas perdiendo contra la inflación si te quedas en pesos. Y en una economía bimonetaria, ¿qué quiere decir? Que te vas a dólares. Entonces, la tasa real negativa tiene una contraparte que tiene que ver con el debilitamiento de una de las funciones más importantes de la moneda, que es la capacidad de poder trasladar consumo ahorro presente a consumo o inversión futura. Entonces, no creo que sea acertado la orientación del crédito productivo con tasa negativa. Y, además, cuando has tenido tasa negativa, no necesariamente eso te produjo picos de crédito al PBI. ¿Por qué? Porque tenés también riesgos, porque tenés que ver otros elementos de la composición del crédito. Porque vos cuando tenés inflación, si vos hacés tasa real negativa, quiere decir que vas perdiendo contra la inflación si te quedas en pesos. Y en una economía bimonetaria, ¿qué quiere decir? Que te vas a dólares.

Entonces, yo creo que tenemos que estar muy cuidadosos, de nuevo, de no enamorarnos de las herramientas y ver los objetivos. Y también en

pensar cómo eso te opera con el mercado cambiario. Digo, hoy, ejemplo concreto, nosotros estamos empezando a ver carpetas acá que vas a decir, hoy vino con resultado negativo el 2024 o el primer semestre de 2025. ¿Por qué? Si es una buena empresa, tiene buenas ventas, es competitiva. ¿Qué pasó? Ah, está distribuyendo utilidades. ¿Por qué está distribuyendo utilidades? Porque me sacaste el cepo a las personas. Entonces, la formación de activos externos. ¿Y cómo financia la empresa eso? Viene al banco y me pide plata. Entonces, el aumento del préstamo del sector privado de esta época en pesos, bla, bla, bla, ¿tiene que ver con que hay más inversión, más trabajo? ¿O que en realidad está financiando con crédito una distribución de utilidades para comprar dólar barato porque tenés miedo de una devaluación? Digo, el hecho de que el dinero sea fungible nos pasó en su movimiento en el 23 con el tema del boom de las importaciones que veíamos. Uy, esta empresa tiene mal balance. ¿Por qué? Ah, no, porque se estoqueó en impto por los próximos 5 años. Entonces, va a recuperar y la expectativa de venta de no sé qué.

Los típicos casos que vimos hace poco es el tema del apalancamiento financiero que habían hecho las empresas de fertilizantes agropecuarias. Los Grobo, Profertil los vimos en las noticias, con comportamientos especulativos en el buen sentido, ¿sí? De una macro muy desordenada y sin largo plazo. Porque si vos no tenés un acuerdo de diferentes fuerzas políticas y diferentes actores, donde intentas recuperar en largo plazo el comportamiento del sistema financiero, por definición, sea con el gobierno, sin el gobierno, con bono del Estado, sin bono del Estado, es especulativo y es de corto. Porque no tenés macro de largo. Entonces, yo no quiero decir, los bancos son los malos y hacen carry. Macho, no tenés marco. Si no hago *carry*, me tengo que ir a dólar. Y si no hago dólar, me voy afuera. Entonces, todo el mundo dice qué el problema es que el crédito del PBI de la Argentina es bajo. OK, llevamos 25 años sin una crisis bancaria en este país. También lo quiero decir.

Perdón. Entonces, no, no, porque es un mercado concentrado, cerrado, hiperregulado, con normas muy estrictas, qué sé yo. ¿Y quiénes fueron los que aparecieron y pueden generar riesgo sistémico? Y los mercados pago de la vida. Ojo ahí. Porque esto, que es lo que el BIS, el *Bank of International Settlements*, llama *non-banking intermediaries*, intermediarios no bancarios, empiezan a tener una magnitud que es relevante para el sistema. ¿Cómo haces que cuando el endeudamiento de tus familias está también dentro de los intermediarios no bancarios? ¿Cómo recuperaste ese segmento? ¿No alcanzas solamente el comportamiento de una tasa diferencial? me acuerdo que en el 2015 pasamos a pérdida, no sé si eran 1,000 cuentas o más de deudores que teníamos del 2001. Y eran deudas de el 2015, listo, la pasaste a pérdida, súper devaluada, no importa. Pero esta persona sigue teniendo capacidad hoy de endeudarse, esto y lo otro. No sé qué pasa con los intermediadores no bancarios. O te hacen una deuda que es una bola con intereses enormes, mercado pago. No es lo mismo que un banco público. Y el juego ahí y la venta de carteras y cómo se regula eso. Y cuando es tan extendido el endeudamiento de las personas. Pero, bueno, ideas como aclarar. Y me parece muy riesgosa la tasa negativa en una economía bimonetaria. Creo que tenés que fomentar el crédito a pyme con otras herramientas, con la banca pública también, pero es más por ahí que no necesariamente la tasa negativa generalizada, porque genera efectos distorsivos con la funcionalidad de las monedas. Creo que tenés que tener crédito productivo a pyme con otros incentivos. Y después, si no hay largo plazo en la macro, no puedes pertenecer que las finanzas tengan largo plazo. Necesitas recuperar la macro a largo plazo para que las finanzas vayan a largo plazo.

La línea de inversión Productiva es un buen ejemplo para pensar estos temas. Fue una herramienta creada por Mercedes Marco del Pont desde el Banco Central, pero ahí surge una pregunta clave: ¿debería el Banco Central hacer política industrial? Mi impresión es que todas las instituciones del Estado

pueden contribuir, pero el problema de fondo es otro: la existencia de una deficiencia en el Ministerio de producción. Entonces, lo que debería hacer ese ministerio –implementación, incentivos, garantías, FOGAR, y todo lo demás– termina siendo suplido por el Banco Central. Y ahí volvemos al punto: ¿es realmente el Banco Central el lugar donde se define la política industrial? Porque uno puede generar incentivos modificando tasas con subsidios, garantías u otros instrumentos, sin necesidad de tocar los encajes ni la regulación monetaria. ¿Por que usamos herramientas de regulación monetaria para hacer política industrial? Bueno, justamente porque en muchos casos quedan pocas herramientas disponibles.

Si mi objetivo es que la Pyme crezca, no usemos todas las herramientas porque soy peronista. Digo, no es que me ofende ahora cuando tengo que pensar en un Estado más eficiente. Y el Banco Central hace política monetaria, no tendría que hacer política industrial, no tendría que hacer política comercial porque hace política cambiaria. Entonces, la política comercial la tiene que llevar otra área del gobierno. ¿Se entiende? No digo que sea independiente tampoco. Digo, tiene que haber una coordinación. Pero si no, tenemos regulación sobre regulación y después le dejás a Mercado Pago que te ponga cualquier tasa y yo le tengo que prestar barato a la PyMe y Mercado Pago te saca un microcrédito con tasa de 200%. Entonces, ¿qué onda? Ahí yo creo que se generan distorsiones en las regulaciones.

Por eso no es casual que Brasil haya avanzado con PIX en Brasil, que es la billetera y los medios de pago del Banco Central de Brasil. Y que esté teniendo tantos problemas con WhatsApp Pay y con las grandes tecnológicas del mundo. Nosotros necesitamos avanzar no con sistemas segmentados de billetera segmentada de los bancos, sino con un sistema único de pago de la Argentina con soberanía y trazabilidad. Y que estén nuestros satélites y en nuestra base de datos. Y que podamos tener independencia, sobre qué pasa con nuestro sistema

financiero del resto de la tecnología del mundo. Yo creo que la visión de un PIX Argentina, la visión de que Redlink se convierta en realidad en una gran empresa tecnológica, que no solamente te dé la agilidad que te dan hoy los *fintech*, pero también la seguridad y el resguardo que necesitamos es la discusión realmente para dar.

Bueno, hoy el dinero es digital. ¿Cómo pensamos nosotros resguardar la soberanía de nuestro dinero? Creo que ahí está el debate de futuro. Porque si no tenemos gobernanza sobre eso, lo que es la segmentación para poder hacer cadenas de valor, cambio estructural, poder incorporar áreas del territorio nacional que no tengan una sucursal, pero que te puedan atender con otros medios, no va a ser posible, digamos. Hoy pensar en un esquema de que por ser banco público tengo que abrir una sucursal, atrasa. Porque lo que tenemos que pensar es, bueno, necesitamos áreas de gobierno centralizado, donde vos tengas en un edificio el correo, ANSES, PAMI y, además, la trazabilidad del Banco Nación. Porque la realidad es que mismo durante el Kirchnerismo, si vos vivías en el norte de la provincia de Santa Fe, tenías que hacer 500 kilómetros para ir a una oficina de PAMI. Entonces, esas dificultades, hoy la tecnología nos la permite resolver. Y pensar en un estado que te brinde todos los servicios de ciudadanía en el mismo lugar y en una banca que te pueda atender de manera digital, incorporando al estado que busque a que ese ciudadano o ciudadana tengan atención digital. Pero, por eso, la discusión es tecnológica y es más de soberanía tecnológica.

¿cuál es tu mirada sobre la inclusión financiera y, especialmente, sobre la falta de educación financiera en un escenario de ajuste, donde el sobreendeudamiento de las familias muchas veces está vinculado a la falta de información y de herramientas para enfrentar una deuda y comprender sus implicancias?

Empiezo por lo grande, después lo específico. Desde una mirada estructuralista latinoamericana, la

inclusión financiera tiene que ver con las Pymes, con el acceso que tienen las pequeñas y medianas empresas al financiamiento. Entonces, tiene que ver con este indicador que hablábamos antes del crédito al sector privado no financiero, que yo decía que en Argentina oscila entre el 6% y el 8% en la última década. Entonces, cuando yo hablo de profundidad al sistema financiero, estoy hablando de inclusión de las pymes al sistema financiero y de las grandes empresas también, pero las grandes empresas ya acceden al sistema financiero y pueden decidir si se financian con tasas nacionales o internacionales, etcétera. Entonces, el gran grueso es pymes, es medianas y grandes empresas. Es cierto que se ha utilizado y ha ganado la visión de inclusión financiera del Banco Mundial, que es el de las personas. Lo digo porque yo creo que políticamente nosotros necesitamos recuperar la estrategia nacional de inclusión financiera que tiene la Argentina.

Necesitamos recuperar una mirada estructuralista, porque esto tiene que ver justamente con el cambio estructural, con el apalancamiento del desarrollo productivo y con el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando pensamos la inclusión financiera de las personas solo desde lo individual, eso muchas veces termina siendo una trampa o una forma de complementar el salario. Recién les mencionaba: Chile tiene un crédito al sector privado no financiero superior al 100% del PBI, en parte por el alto endeudamiento de las familias, mucho más elevado que en nuestro país. ¿Eso implica que es un país desarrollado o que ese endeudamiento sirve para un cambio estructural? Lo mismo con Ecuador: tiene más crédito en relación al PBI, pero eso no necesariamente indica desarrollo.

Creo que después de la pandemia hubo un aumento fuerte de la financiarización de la vida de las familias. Como vos bien decís, es un endeudamiento que no necesariamente es estratégico para mejorar condiciones futuras, sino que está ligado a sostener la diaria. Y eso es un problema, porque por más

educación financiera que haya, hay un tema macro: si no te alcanza el sueldo para comer, vas a buscar plata donde puedas, y muchas veces a cualquier tasa. Y así seguimos. Si la respuesta del gobierno, en vez de aumentar las jubilaciones, es ofrecer créditos de ANSES con tasas en un contexto de alta volatilidad donde la tasa es endógena y te puede chocar de frente, estamos mal, porque la gente lo que necesita es un mejor ingreso, no endeudarse.

Entonces, ahí hay un problema macro y estructural. Pero también es cierto, al mismo tiempo, que las nuevas generaciones tienen una gran facilidad para usar tecnología, para operar inversiones y, también, para el juego online. Eso hace que sea cada vez más necesario que no solo te expliquen cómo abrir una cuenta, sino qué implica una tasa, cómo funciona el tiempo, cuáles son los riesgos, qué es la incertidumbre y cómo manejarse financieramente para evitar estafas y malos usos del dinero. En los barrios populares, por ejemplo, estar altamente endeudado y depender del puntero del barrio o del prestamista puede incluso poner en riesgo tu vida. Es un problema social serio, con una raíz central que es la falta de ingresos, y otra raíz que es esta nueva vida de los algoritmos y la facilidad de acceso a aplicaciones que permiten comprar cripto con un clic, aunque muy pocos entiendan qué significa un criptoactivo, cuál es la normativa o qué hay realmente detrás.

También pasa con las tasas: mucha gente dice 'pasé la plata del sueldo a Mercado Pago porque me paga'. Pero por ahí la tasa del fondo común de inversión de Mercado Pago es 15% o algo así, bastante baja, y hace rato existen otras alternativas. La clave es pensar si, más allá de usar todo el sueldo cada mes, puedes separar aunque sea mil pesos para empezar una inversión a largo plazo. En cinco meses son cinco mil; de a poco vas construyendo un comportamiento distinto, saliendo de lo inmediato, saliendo de la lógica de ver en la pantalla que tenés doscientos pesos más. Eso es algo que hay que trabajar, y a nivel país pasa lo mismo: si no tenemos

una visión de largo plazo, es difícil que las familias también la construyan.

Además, creo que estamos perdiendo en Argentina el "para qué" del ahorro. Pareciera que muchos pibes y pibas solo ahorran para consumir. Nadie piensa en invertir, y eso es un problema. Si de chico no tenés la intuición de decir: 'bueno, me compro tal cosa y a partir de eso produzco algo', estamos mal. Como me decía la señora que trabaja en casa: "pude comprarme un freezer y voy a ponerme a vender helados". Ahí hay una mirada productiva, una búsqueda de generar margen a partir de una actividad. Si se pierde por completo esa lógica, me parece que tenemos un problema serio como país.

El Estado ya no es aquel que tenía más capacidad de acción, como en 2003 o en 1949, en los momentos en que se pudo hacer economía justicialista. Hoy es un Estado mucho más erosionado, atravesado por intereses transnacionales, por el capital financiero y por las élites económicas. Entonces, ¿cómo hacemos economía justicialista con el Estado que nos queda? ¿Todavía tenemos las herramientas para hacerlo?

Me parece que lo principal para poder hacer economía justicialista es recuperar las capacidades del Estado, como vos bien decís. Y eso se hace con un pueblo y una mayoría movilizada, con ideas que puedan conducir a esas mayorías. No se trata solo de plantear una dicotomía de imponer algo contra los grandes capitales, sino de ir armonizando. Cristina, en una conferencia, hablaba justamente de salir de la hegemonía cultural de la confrontación para pasar a los consensos.

Lamentablemente, aunque no nos gustaría estar en esta situación creo que la palabra "consenso", trabajar por los consensos, nos va a permitir ir reconstruyendo. Hoy se vuelve evidente que el Estado tiene que estar: lo del fentanilo, por ejemplo, muestra claramente que el Estado tiene que regular, poner reglas, y que todo el mundo lo necesita.

También es evidente que necesitas que funcionen los hospitales, y así con todo. Eso cae de maduro. Lo que me parece es que no estamos siendo capaces de explicar por qué la gestión del presente, pero también la del futuro, viene de la mano de esa economía justicialista.

Insisto: la clave está en poder proponerle a las mayorías recuperar el tiempo para recuperar la felicidad del pueblo, incluso aunque todavía no sea a partir de un trabajo que dignifique. Primero, volver a este piso de poder vivir; trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Empezar por ese cambio, y después ir construyendo ese trabajo que

efectivamente dignifique. Pero recuperar el tiempo para volver a construir la comunidad organizada es central para pensar otra economía. Esa economía justicialista que redistribuye, que piensa el país, la nación, la producción, requiere también de esa comunidad organizada.

Sin tiempo no hay comunidad organizada. Y el tiempo es un factor económico que muchas veces obviamos en nuestras ecuaciones. Las economistas feministas lo aprendimos bastante bien: hay que discutir el tiempo. Y el tiempo también tiene que ver con el ocio y con la capacidad de volver a tener otro tipo de sociedad.



EFEMÉRIDES

Este espacio está dedicado a recordar hechos y decisiones que expresan la doctrina del Justicialismo Económico: la ampliación de derechos, la planificación del desarrollo, la defensa de la soberanía y el protagonismo del trabajo. Las efemérides permiten comprender cómo la historia del movimiento marca los desafíos presentes

A 80 años del 17 de octubre: Repensar las tres banderas Justicialistas en el siglo XXI

Por Yanina Belén Fernández

Introducción

Pasaron ochenta años desde el 17 de octubre de 1945, cuando una multitud de trabajadores y trabajadoras se reunió en Plaza de Mayo para pedir la libertad de Perón. Aquel día no fue solo una manifestación: fue el nacimiento de una identidad política que cambió la historia argentina.

El peronismo no fue, no es, ni será, una doctrina cerrada. Es una respuesta concreta a las necesidades de cada tiempo. Su irrupción a mediados del siglo pasado fue un gran hito en la historia de nuestro país, desde su aparición los trabajadores accedieron a una situación económica que antes desconocían, la integración económica, política y social de la clase trabajadora fue posible gracias a la consolidación de la industrialización como prioridad en la actividad económica.

Recordar ciertas fechas no debe ser un acto de nostalgia, sino una oportunidad para actualizar el análisis histórico. La transformación de la sociedad argentina en ese período alteró profundamente las relaciones sociales, dando origen a un Estado que promovió la industrialización y, con ella, la emergencia de una burguesía nacional, aunque limitada. Este cambio estructural dio paso a dos bloques sociales: uno, centrado en los trabajadores industriales y un sector empresarial vinculado a la producción de bienes intermedios; y otro, integrado por el capital extranjero y sectores tradicionales ligados al modelo agroexportador. Estos bloques protagonizarán las tensiones durante la segunda etapa de sustitución de importaciones entre 1958 y 1975.

Ocho décadas después, las preguntas siguen vivas: ¿qué significan hoy la justicia social, la independencia económica y la soberanía política en una Argentina atravesada por la desigualdad, la deuda y la globalización digital?

Porque si algo enseñó el peronismo es que los principios no envejecen, pero los instrumentos sí. Los objetivos justicialistas son permanentes: la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación. El justicialismo es una filosofía de vida para todos y todas, que no solo incluye a los más vulnerables y a los trabajadores, incluye al total de la población, defiende a los más rezagados de la sociedad y lucha por una sociedad más justa, pero jamás excluye, negocia en favor de los que menos tienen para brindar mayores oportunidades.

El Modelo Económico Justicialista como herramienta para lograr las tres banderas: justicia social, independencia económica y soberanía política.

Hacia 1945 la conducción económica estaba bajo la influencia del pensamiento nacionalista-productivista encabezado por Miguel Miranda. La política monetaria de aquel año combinó tipos de interés regulados y créditos dirigidos a la producción, con prioridad para la industria liviana y el sector agroindustrial. Las tasas se mantuvieron bajas para fomentar la inversión, mientras que el tipo de cambio permaneció estable, lo que facilitó la importación de maquinaria e insumos esenciales para la sustitución de importaciones.

Contrariamente a lo que podría esperarse de una política expansiva, la inflación anual de 1945 fue de apenas 4,3 %, y la economía se mantuvo en equilibrio externo. Esto fue posible gracias al uso prudente de las reservas acumuladas y a un estricto control estatal sobre el flujo de divisas. En materia fiscal, el gasto público social, destinado a salud, vivienda y previsión, creció alrededor de un 30 % real, financiado por mayores ingresos aduaneros y tributarios. Lejos de generar déficit, el presupuesto de 1945 cerró equilibrado, demostrando que el gasto social podía sostenerse con recursos genuinos cuando la prioridad era el bienestar colectivo.

Desde el punto de vista doctrinario, 1945 inauguró la economía del bienestar social argentino. Los recursos externos obtenidos por la exportación ya no se acumulaban en las arcas del capital concentrado, sino que se re invertían en salarios, infraestructura y seguridad social. El Estado asumió el papel de planificador, y el mercado fue subordinado a objetivos de equidad y desarrollo. La “función social del capital”, concepto central del justicialismo, empezó a materializarse en hechos concretos: en el aguinaldo, en las vacaciones pagas, en el salario digno y en el crédito productivo.

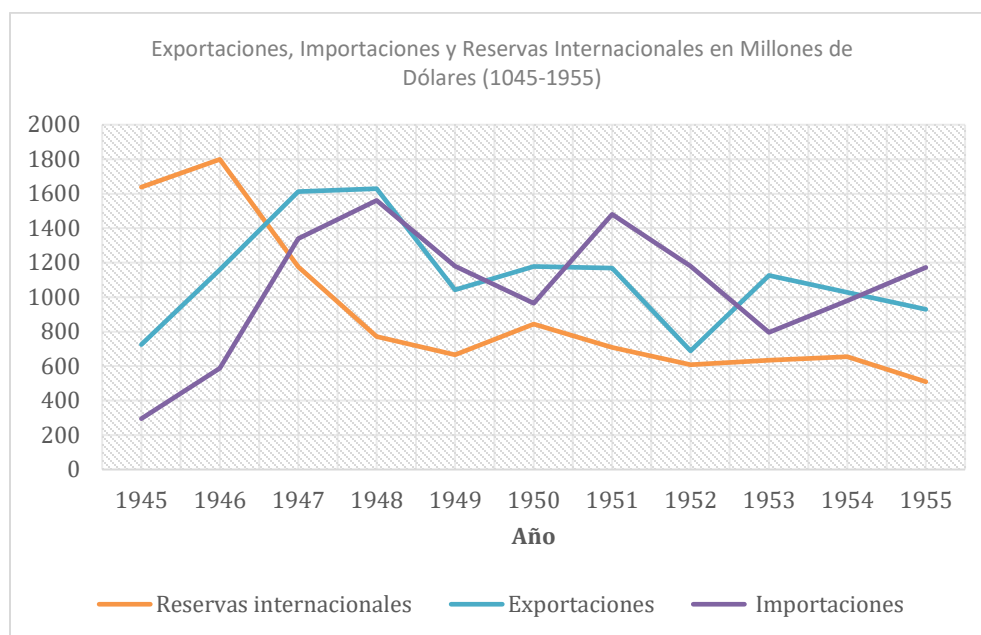
La nacionalización del Banco Central de la República Argentina se dio a través de un decreto-ley en 1946, pero ya desde 1945 el organismo operaba bajo una lógica productivista. La función prioritaria pasó a ser la promoción del desarrollo económico,

reduciendo los préstamos destinados a las actividades especulativas, enfocando contrariamente sus recursos en las actividades productivas.

Se estableció una política monetaria de crédito dirigido: tasas bajas, tipo de cambio estable y prioridad para sectores industriales y agroindustriales. El dinero, las reservas y el crédito fueron puestos al servicio del trabajo, y no del capital financiero. La economía argentina comenzaba a construirse sobre bases nacionales y populares.

En un contexto global complicado por grandes cambios en las relaciones entre los diferentes países, acontecimientos claves como El Plan Marshall (1947) y La Doctrina Truman (1949) marcaban el ritmo de la geopolítica. La posguerra ayudó a la Argentina a acumular superávits comerciales y reservas por encima de los 1.400 millones de dólares, pero la riqueza estaba concentrada y la economía seguía dependiente de la renta agraria. En 1945, con un escenario favorable, el Estado comenzó a centrarse en la distribución de la riqueza y el trabajo. El peronismo impulsó una política de intervención estatal, con expansión del gasto social, promoción industrial y fortalecimiento del mercado interno, basándose en un diagnóstico de las restricciones externas y una visión nacional del desarrollo

Gráfico 1:

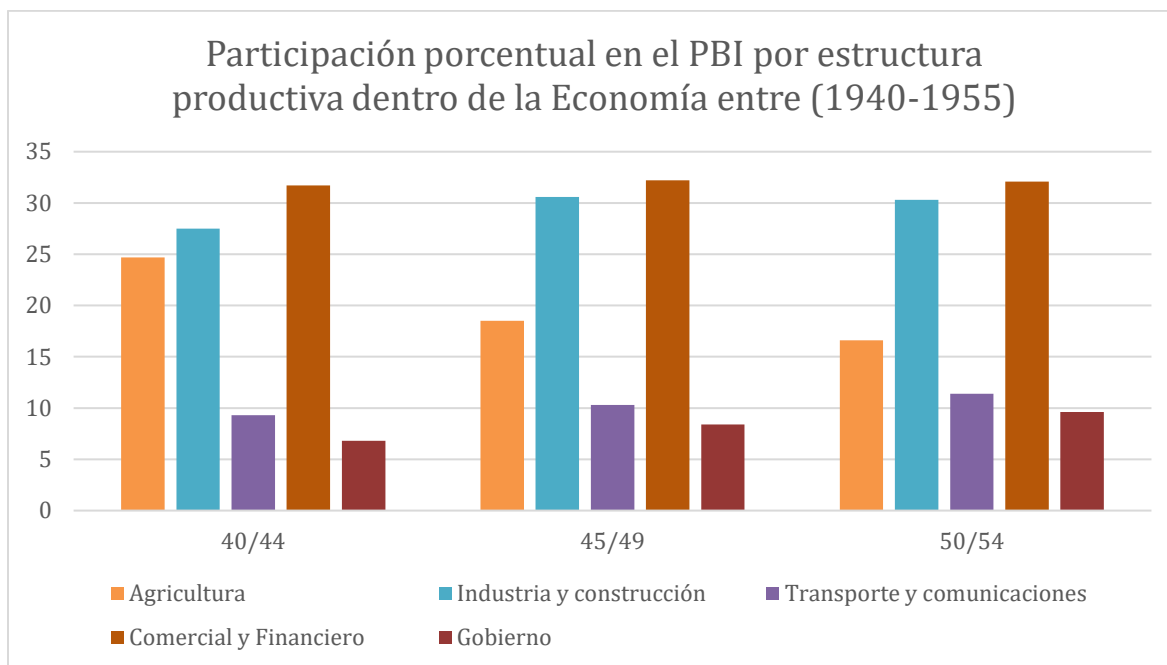


Elaboración propia en base a Cuadernos Del AÑO 22. N° 60 tercera época Septiembre- Diciembre 2005

La desagregación bilateral (ver gráfico 2) A diferencia de lo que dice la corriente ortodoxa, la expansión del gasto no generó desequilibrios: la inflación de 1945 fue apenas del 4,3 %, y las cuentas fiscales se mantuvieron equilibradas. Los ingresos públicos crecieron gracias al dinamismo del consumo y a una estructura tributaria más progresiva. Según datos del CEHEAL, el gasto social del Estado aumentó un 30 % en términos reales, con fuerte orientación a salud, vivienda y previsión. La economía peronista nacía así como una síntesis entre expansión con responsabilidad fiscal y redistribución del ingreso.

El trabajo, invisibilizado durante décadas, se convirtió en el eje del desarrollo. El Primer Plan Quinquenal puso énfasis en el desarrollo de las industrias livianas, éstas no requerían de gran apoyo tecnológico desde el exterior y su reactivación ayudó a la generación de nuevos puestos laborales. De esta forma la característica del proceso de industrialización justicialista fue en primera instancia el desarrollo de la sustitución de importaciones de bienes de consumo no durables, incentivada por mecanismos como subsidios, desgravaciones impositivas y el crédito

Gráfico 2:



Elaboración propia en base a censo industrial de 1954

Entre 1940 y 1954 la estructura económica argentina experimentó una transformación significativa, reflejando el pasaje desde una economía primario-exportadora hacia una de base industrial. La participación de la agricultura en el PBI descendió del 24 % al 17 %, evidenciando la pérdida de centralidad del sector agropecuario, mientras que la industria y la construcción se mantuvieron en torno al 30 %, consolidándose como el núcleo dinámico de la economía nacional. El peso del sector comercial y financiero también se mantuvo elevado, asociado al crecimiento del mercado interno, en tanto que transporte y comunicaciones y servicios del gobierno incrementaron levemente su aporte, acompañando el proceso de modernización y expansión del Estado. En conjunto, los datos confirman que durante el período peronista se consolidó una

estructura productiva más diversificada y equilibrada, donde la industria pasó a ocupar un rol estratégico en la búsqueda de independencia económica y desarrollo nacional sostenido. Desde 1946 con la reforma financiera, la política de promoción industrial fue un elemento privilegiado. La expansión del crédito fue eficaz en impulsar la inversión industrial, de esta manera se pudo lograr un crecimiento de la inversión tanto en plantas, equipos y maquinarias que estuvo totalmente vinculado a la dinámica de expansión crediticia.

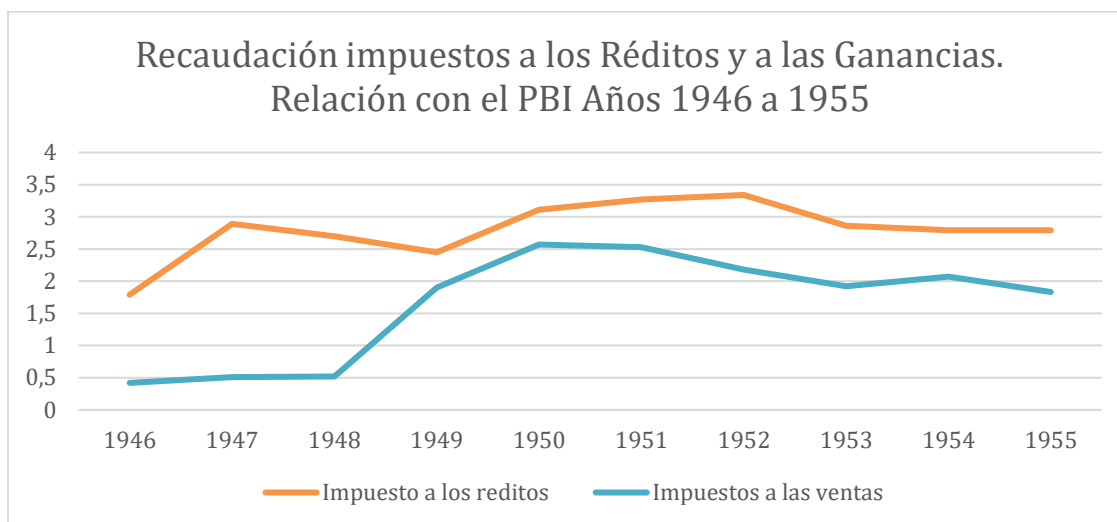
En 1947, el gobierno peronista creó dos instituciones fundamentales, en primer lugar, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Su objetivo era simple pero revolucionario: que el Estado recupere el control del comercio exterior

para financiar la industrialización y el desarrollo interno. Fue la herramienta clave de una estrategia que buscaba que la Argentina viva de su trabajo, y no de su endeudamiento.

Durante el primer peronismo, la creación de la Dirección General Impositiva (DGI) mediante la Ley N.º 12.927 marcó un hito en la organización del sistema tributario argentino. Su objetivo fue dotar al Estado de recursos fiscales estables y progresivos, coherentes con los principios de justicia social,

independencia económica y soberanía política. En el marco del Segundo Plan Quinquenal (Ley 14.184), se buscó además modernizar la administración pública y fortalecer al personal estatal, reconociendo el valor del factor humano en la gestión tributaria. Así, la DGI se consolidó no solo como un organismo recaudador, sino como una herramienta de política económica destinada a financiar la expansión del gasto social y promover una distribución más equitativa del ingreso.

Gráfico 3



Elaboraci n propia en base a Memoria Hist rica

Entre 1946 y 1955 la recaudaci n del impuesto a los r ditos , antecedente del actual impuesto a las ganancias, aument  su participaci n en el PBI de 1,79% a un m ximo de 3,34% en 1952, reflejando el esfuerzo del Estado peronista por consolidar un sistema tributario m s progresivo y redistributivo, en l nea con los objetivos del Primer Plan Quinquenal. Este incremento estuvo asociado al crecimiento del empleo formal, la expansi n industrial y una administraci n fiscal tributos evidencia la b squeda de equilibrio entre equidad y suficiencia fiscal, caracter stica del modelo justicialista de posguerra

m s eficiente. Paralelamente, los impuestos a las ventas ,de naturaleza m s regresiva, se incrementaron con fuerza a partir de 1949, alcanzando en promedio el 2,5% del PBI en la primera mitad de los a os cincuenta, como respuesta a la necesidad de sostener los ingresos p blicos frente a la restricci n externa y la menor disponibilidad de divisas. En conjunto, la evoluci n de ambos

En ese contexto, la pol tica fiscal peronista busc  equilibrar las necesidades del erario p blico con la promoci n de la productividad y la inclusi n. Se reformaron tributos con criterios redistributivos,

incorporando gravámenes sobre las ganancias empresariales, el capital y la riqueza personal, mientras se ampliaba la base previsional y se fortalecía la coparticipación federal. La DGI, en articulación con el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) y otros organismos del Estado, se integró a una estrategia económica de carácter nacionalista y planificada, destinada a sustituir importaciones, sostener el empleo y promover el desarrollo interno. En definitiva, su papel excedió el mero ámbito técnico-administrativo, constituyéndose en una herramienta de transformación estructural y de consolidación del Estado social peronista. La creación de este organismo fortaleció significativamente la administración tributaria, dotándola de mayor capacidad operativa y eficiencia en la gestión fiscal. El sistema impositivo avanzó en términos de progresividad, y los niveles de recaudación crecieron de manera sostenida en relación con el PBI, alcanzando su punto máximo histórico durante el bienio 1950-1951.

Tras la culminación del Primer Plan Quinquenal, que consolidó la expansión del empleo, el consumo y la inversión pública, la economía argentina ingresó hacia 1952 en una etapa de restricciones externas y tensiones inflacionarias. La disminución de los términos de intercambio, la caída de las exportaciones agrícolas y el agotamiento de las reservas internacionales limitaron la capacidad del Estado para sostener el ritmo de crecimiento industrial. En ese contexto, el gobierno de Perón diseñó el Segundo Plan Quinquenal (1953-1958) como una estrategia de racionalización y consolidación del proceso iniciado en 1946. Su propósito fue reordenar las cuentas externas, estabilizar los precios y reorientar la inversión hacia

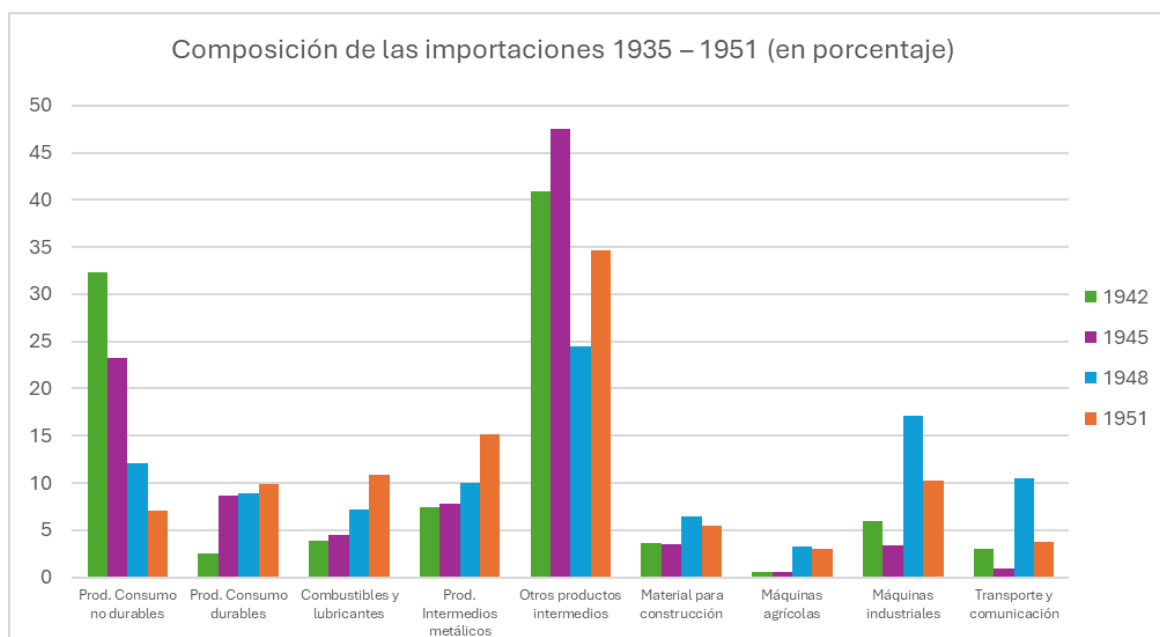
sectores de base, manteniendo los principios de independencia económica y soberanía nacional.

Desde el punto de vista del sector externo, en los estudios de la época hay un consenso claro sobre la excepcionalidad de la etapa, los primeros años del peronismo el país tenía una posición acreedora neta con el resto del mundo. Esta posición fue utilizada para nacionalizar los servicios públicos, lo que obvio suele llevar a problemas en la Balanza de pagos debido al uso de reservas internacionales. A su vez, dentro de la nacionalización estratégica de los servicios públicos se encontraban los ferrocarriles, decisión que se encaminaba a solucionar problemas económicos en función del afianzamiento de la sustitución de importaciones como patrón de acumulación en el país.

Si bien los recursos del Estado fueron muchos, como se evidencia en la ilustración 1 más arriba, con la caída de las reservas internacionales. Hay que tener en cuenta que solo se continuó con negociaciones ya iniciadas en el gobierno de la Concordancia durante la década infame. Los sectores que se oponían a estas medidas fueron los que representaban a la oligarquía agropecuaria y a los intereses ingleses, el resto de la sociedad estaba dispuesta a modificar el statu quo ya que era evidente el agotamiento del modelo agroexportador.

Entre 1942 y 1951 la estructura de las importaciones argentinas se transformó profundamente, reflejando el paso de un modelo primario-exportador a uno de industrialización sustitutiva. Los bienes de consumo no durables, que en 1942 representaban el 32,3% del total, cayeron al 7,1% en 1951, mostrando la expansión de la producción local en ramas como textiles y alimentos.

Gráfico 4



Elaboración propia en base a Censo industrial 1954

En paralelo, aumentaron las importaciones de bienes de capital y productos intermedios metálicos, que pasaron del 7,4% al 15,1%, junto con un fuerte crecimiento en maquinaria industrial y agrícola. Estas variaciones evidencian la política del Primer Plan Quinquenal (1947–1951), que destinó las reservas acumuladas durante la guerra a importar equipamiento y tecnología para fortalecer la base productiva nacional.

Sin embargo, el proceso también reveló nuevos desafíos: la creciente demanda energética elevó la participación de combustibles y lubricantes (de 3,9% a 10,8%) y la restricción externa comenzó a tensar el equilibrio macroeconómico hacia 1951. Así, mientras las importaciones se reorientaban hacia la inversión productiva y la infraestructura, el país enfrentaba la necesidad de sostener ese proceso con mayor eficiencia y autosuficiencia energética, objetivo que inspiraría las medidas de racionalización y estabilización del Segundo Plan Quinquenal.

Una de las piezas centrales de esta etapa fue el Plan de Estabilización Económica impulsado por el ministro Alfredo Gómez Morales en 1952. Frente al déficit fiscal, la inflación creciente y la escasez de divisas, el plan combinó un conjunto de medidas de ajuste y de planificación estructural. En materia fiscal, se aplicó un fuerte control del gasto público y se buscó equilibrar las cuentas del Estado mediante una política de ingresos más selectiva. En el frente monetario, se restringió la expansión del crédito, se revaluó parcialmente el peso y se establecieron mecanismos de control del tipo de cambio para administrar la escasez de divisas. Estas políticas, si bien implicaron una moderación del consumo interno y una desaceleración inicial de la actividad, permitieron reducir la inflación, recuperar el superávit comercial y recomponer el nivel de reservas internacionales.

El Segundo Plan Quinquenal, lanzado formalmente en 1953, retomó el horizonte de industrialización pero con un enfoque más técnico y selectivo. El Estado dejó de expandir de manera generalizada la industria liviana y orientó sus recursos hacia la

industria pesada y de base, considerada fundamental para alcanzar la autosuficiencia productiva. Se impulsaron inversiones en siderurgia (SOMISA), energía (YPF, Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado) y metalurgia, así como en infraestructura ferroviaria y vial, buscando integrar las economías regionales al mercado nacional.

Asimismo, se promovieron acuerdos bilaterales y de complementación industrial con países europeos y latinoamericanos, priorizando la obtención de tecnología y bienes de capital sin comprometer la soberanía económica. La política crediticia del Banco Industrial y las líneas de fomento del Banco Nación se reorientaron a sectores estratégicos, mientras se mantuvo la protección arancelaria para industrias de interés nacional.

Desde el punto de vista social, el plan buscó sostener los niveles de empleo y mejorar la productividad a través de la capacitación laboral y la mecanización de procesos. El Estado intervino en la negociación colectiva, procurando coordinar salarios y precios dentro de un marco de estabilidad. Estas políticas configuraron un intento de articular crecimiento con equilibrio macroeconómico, sin renunciar a la centralidad del trabajo y de la producción nacional.

En términos estructurales, el Segundo Plan Quinquenal representó una transición: de la expansión redistributiva del primer período hacia una industrialización más madura y tecnificada, con un Estado que combinaba planificación económica, disciplina fiscal y dirección estratégica del desarrollo. Si bien las tensiones políticas y los condicionamientos externos limitaron su continuidad, el programa logró recomponer la balanza de pagos, estabilizar la moneda y sostener el núcleo industrial construido durante la primera etapa del peronismo. En definitiva, el Segundo Plan Quinquenal mostró que la independencia económica no se reduce a la expansión del gasto o la sustitución de importaciones, sino que requiere de una estructura productiva integrada, con capacidad tecnológica propia y equilibrio externo sostenible.

Fue, en ese sentido, el intento más acabado de vincular estabilidad macroeconómica, desarrollo industrial y soberanía nacional dentro de un esquema de planificación estatal.

Todas estas medidas fiscales y monetarias expansivas se encontraban en el “Régimen de Protección y Promoción a las industrias de interés Nacional” del Decreto 14630/44 con vigencia hasta 1957, proceso truncado por el golpe de Estado de la “Revolución Libertadora”.

La justicia social: Del salario digno al sentido de pertenencia

En los años 40, la justicia social en Argentina estuvo marcada por la conquista de derechos fundamentales para los trabajadores, como el aguinaldo, las vacaciones pagas, el acceso a la salud y a la vivienda. El salario obrero dejó de ser solo una compensación por el trabajo y se transformó en un símbolo de dignidad, bajo el principio de que todos los trabajadores debían tener garantizado un nivel de vida digno. En este contexto, el Estado asumió un rol central como garante de estos derechos, lo que permitió la expansión de los beneficios sociales en un período de profundo cambio.

A partir de 1947, durante el segundo gobierno peronista, se intensificó la utilización de datos estadísticos y censales para orientar políticas de desarrollo y mejorar la planificación económica. A pesar de la oposición interna y las presiones internacionales, el gobierno aprovechó estos datos no solo para ajustar sus políticas sino también para legitimar su gestión. La recolección y sistematización de datos, utilizando nuevas tecnologías como las tarjetas perforadas, permitió al Estado mejorar la distribución de recursos y responder a las necesidades de la población, promoviendo una visión integral del desarrollo.

Existieron dos grandes hitos en materia laboral en 1945, dos nuevas leyes transformaron las relaciones

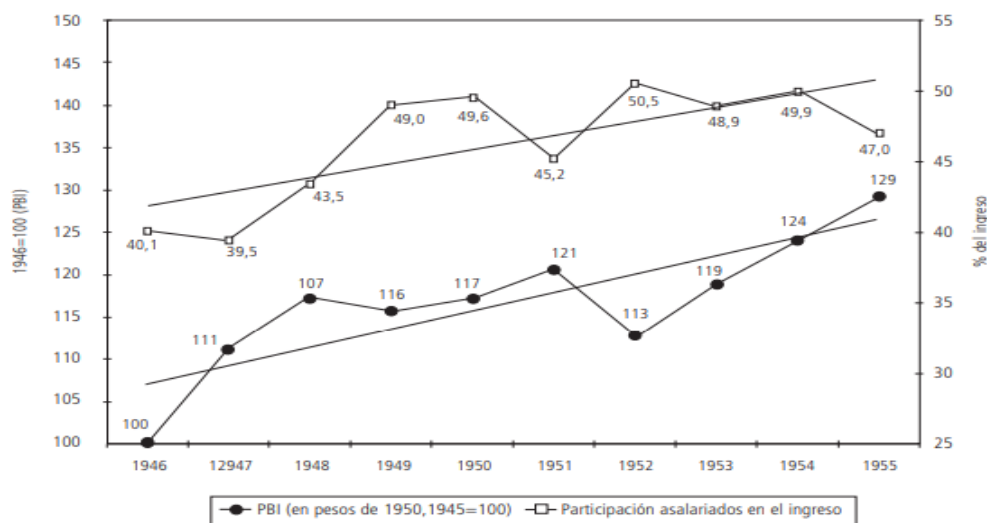
entre el capital y el trabajo. En primer lugar, la sanción del Decreto-Ley 1740/45, que estableció el derecho universal a las vacaciones pagas para todos los trabajadores, representó una democratización del descanso laboral, promoviendo no solo una mejora en la calidad de vida, sino también un impulso al consumo interno y al sector turístico. Este tipo de medidas, más allá de su valor social, tuvieron efectos económicos concretos al dinamizar el mercado interno y fortalecer los sectores productivos nacionales.

Por otro lado el gobierno promulgó el Decreto-Ley 33.302/45, que instituyó el Salario Mínimo Vital y Móvil y el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). Estas políticas representaron un cambio estructural, ya que el Estado pasó a ser un árbitro activo en la distribución del ingreso, promoviendo una mayor equidad. El aguinaldo, en

particular, generó una redistribución directa de los ingresos hacia los hogares trabajadoras, elevando el poder adquisitivo y estimulando la economía nacional.

Entre 1944 y 1946, los salarios reales aumentaron un 12%, y la participación de los trabajadores en el ingreso nacional subió del 37% al 45%. La Confederación General del Trabajo (CGT) se consolidó como una de las principales fuerzas sindicales, representando a millones de trabajadores. El empleo formal creció en la industria y los servicios, y los trabajadores asalariados, antes relegados en la estructura de poder, comenzaron a convertirse en actores clave de la política y la economía, como bien observamos en la ilustración 1, la tendencia de la evolución del PBI como la participación de los asalariados en el ingreso entre 1946 a 1955 tienen una pendiente positiva

Evolución del PIB y de la participación de los asalariados en el ingreso, 1946-1955
(1946=100 y % de ingreso)



Fuente: elaboración propia sobre la base de la información del BCRA y Cepal.

Ilustración 1- Fuente: Cuadernos del CENDES año 22. N° 60 Tercera época Septiembre- Diciembre 2005

Repensar la justicia social en el siglo XXI implica, también, redefinir la soberanía política en un contexto profundamente distinto al del peronismo clásico. Las desigualdades actuales, la precarización

laboral, la informalidad, la brecha digital o el acceso desigual al conocimiento revelan que la justicia social ya no puede medirse únicamente en términos de ingresos, sino en la posibilidad de participar

plenamente en la vida económica, cultural y política. Al mismo tiempo, la soberanía política ha dejado de ser solo independencia frente al poder extranjero: hoy se expresa en la capacidad de un país para decidir su propio rumbo en el terreno de la ciencia, la tecnología y la cultura.

Defender la educación pública, la investigación nacional y los recursos estratégicos es parte de esa nueva forma de independencia que sostiene la justicia social en tiempos de globalización. En última instancia, ambas dimensiones, la justicia social y la soberanía política, se complementan y fortalecen mutuamente, porque no hay inclusión posible sin autonomía, ni hay verdadera independencia nacional sin un pueblo integrado, con derechos y oportunidades.

Un legado vivo y la necesidad imperante de actualizar el proyecto político nacional usando el modelo económico justicialista

A 80 años del surgimiento del peronismo, no se trata solo de recordar una gesta histórica, sino de asumir una tarea pendiente: actualizar su programa a los desafíos del presente. El liberalismo actual promete libertad individual a costa de desintegración social. Propone un Estado débil, cuando lo que necesitamos es un Estado inteligente.

El recorrido económico entre 1945 y 1955 muestra con claridad cómo el modelo justicialista transformó la estructura productiva, fiscal y externa de la Argentina. Las políticas de industrialización sustituyendo importaciones, el fortalecimiento del mercado interno y la expansión del gasto social consolidaron una economía más integrada y con mayor movilidad ascendente. La evolución de las importaciones, cada vez más orientadas a bienes de capital e insumos industriales, junto con el aumento sostenido del impuesto a los réditos sobre el PBI, reflejan un Estado que asumió un rol activo en la redistribución del ingreso y en la planificación del desarrollo. Sin embargo, el agotamiento de las reservas internacionales y la restricción externa

hacia comienzos de los años cincuenta evidenciaron los límites del crecimiento basado en la expansión del consumo y la inversión financiada por divisas acumuladas durante la guerra.

Aun así, la experiencia peronista dejó un saldo estructural: demostró que la justicia social, la independencia económica y la soberanía política no son consignas abstractas, sino condiciones materiales de un proyecto nacional. Releer esos años desde el presente, atravesado por la revolución tecnológica y los nuevos desafíos globales, obliga a recuperar la esencia de aquel modelo: un Estado planificador, una estructura tributaria progresiva y una economía orientada al bienestar colectivo. Porque si 1945 marcó el momento en que la Argentina decidió que la economía debía servir al pueblo, hoy el desafío es actualizar ese principio en clave contemporánea, garantizando que el progreso tecnológico y la modernización productiva no dejen a nadie atrás.

El análisis de los indicadores de comercio exterior, recaudación y estructura productiva entre 1945 y 1955 permite observar que el modelo económico justicialista no fue improvisado ni coyuntural, sino el resultado de una estrategia integral de desarrollo. La orientación de las importaciones hacia bienes de capital y maquinaria industrial, el incremento del empleo formal y la consolidación del impuesto a los réditos como fuente clave de financiamiento público muestran la intención de construir una economía moderna, autosuficiente y socialmente inclusiva. Los planes quinquenales, lejos de ser meros programas de gasto, constituyeron instrumentos de planificación orientados a coordinar la inversión, fomentar la producción nacional y equilibrar la balanza externa. En ese marco, el Estado peronista logró articular el crecimiento con una inédita mejora en la distribución del ingreso, transformando la estructura social del país.

No obstante, la pérdida de reservas internacionales, la restricción externa y el deterioro de los términos del intercambio a comienzos de los años cincuenta

marcaron el límite del ciclo expansivo. El Segundo Plan Quinquenal buscó entonces consolidar los logros alcanzados mediante políticas de racionalización del gasto, estabilización macroeconómica y eficiencia productiva, sin renunciar a los principios de justicia social y soberanía nacional. Esa transición demuestra que el

modelo justicialista fue dinámico y adaptable, capaz de combinar crecimiento con prudencia fiscal, intervención estatal con responsabilidad macroeconómica. Ocho décadas después, esa síntesis entre desarrollo, equidad y planificación sigue siendo una referencia vigente para pensar una Argentina moderna, productiva y socialmente justa.

Bibliografía

Banco Central de la República Argentina. (1945). *Memoria anual 1945*. Buenos Aires: BCRA. Recuperado de <https://cdi.mecon.gob.ar/bases/docelec/az2335.pdf>

Escuela Superior Peronista. (s.f.). *Economía peronista [Documento doctrinario]*.

Ferrer, A. (2008). *La economía argentina: Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Instituto Patria. (2020). *Historia de los impuestos en Argentina (AFIP)*. Recuperado de <https://www.institutopatria.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/1-Historia-de-los-impuestos-en-argentina-AFIP.pdf>

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. (s.f.). *Transformaciones económicas en el mundo del trabajo*. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/transformaciones_economicas_en_el_mundo_del_trabajo.pdf

Página/12. (2024). *A 80 años del 17 de octubre: las bases económicas de una revolución social*. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar>

Perón, J. D. (1951). *Conducción política*. Buenos Aires: Escuela Superior Peronista.

Rapoport, M. (2000). *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)*. Buenos Aires: Ediciones Macchi.

Rougier, M., & Odisio, J. (Eds.). (2021). *La economía del peronismo (Libro 33)*. Buenos Aires: CEHEAL-UBA. Recuperado de <https://ceheal.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/Libro-33.pdf>

Universidad de Buenos Aires – Instituto de Investigaciones Gino Germani. (2019). *Censo y población: defensa de lo que hay (Documento de trabajo N.º 83)*. Recuperado de <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20190829025219/dt83.pdf>

Universidad Nacional de General San Martín – FLACSO. (s.f.). *Publicaciones de economía N.º 30*. Recuperado de <https://publicacioneseconomia.flacso.org.ar/images/pdf/30.pdf>

Varios autores. (s.f.). *La industria argentina en su tercer siglo*. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/la_industria_argentina_en_su_tercer_siglo_-_version_digital.pdf

RESEÑAS



En este espacio se reseñan trabajos que dialogan con la tradición del Justicialismo Económico, así como obras que expresan visiones opuestas y que merecen ser analizadas críticamente. Cada reseña busca aportar una lectura situada, comprometida con la justicia social y la soberanía económica, y atenta a las disputas conceptuales que atraviesan la economía política argentina

Antonio Cafiero el Estadista Bonaerense

Por Mauro García

El libro va mas allá de una simple biografía de Antonio Cafiero, es una invitación a descubrir a un dirigente coherente con las convicciones marcadas a fuego, mostrando todas sus facetas: el economista, el pensador, el militante y el gobernador.

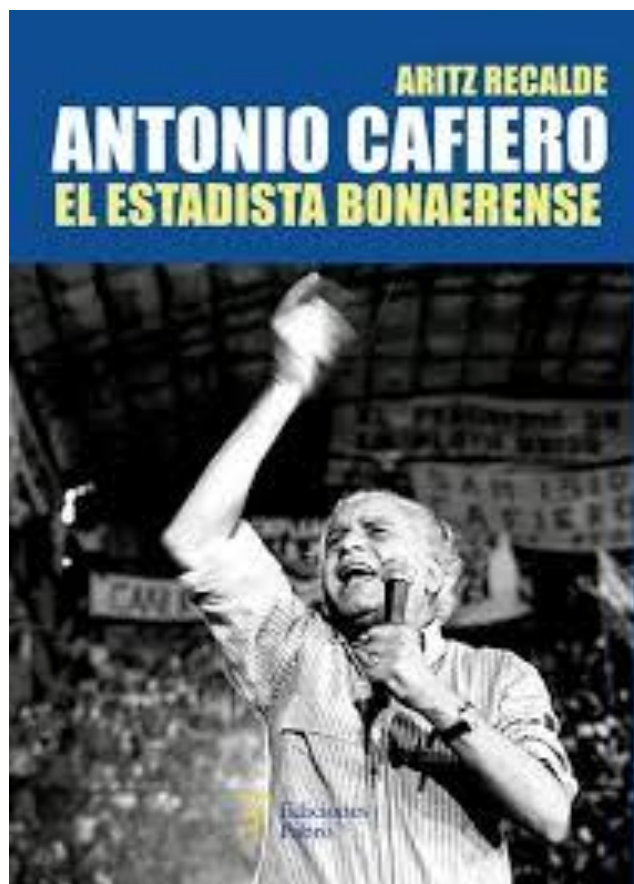
Se divide en dos grandes capítulos que abordan la teoría (con conceptos sobre economía y política) y luego la aplicación de estos durante su gobernación en la Provincia de Buenos Aires.

En el Capítulo I, denominado “El pensador nacional”, este intelectual del peronismo utiliza su formación de economista para criticar la cultura del liberalismo (algo que puede sonar muy actual) y proponer un nacionalismo económico, dando la base teórica y doctrinal que guiará su obra.

En esta primera parte retoma algunas de sus críticas realizadas en su libro “Cinco años después: de la economía social justicialista al régimen liberal capitalista” (1961), donde analiza el proceso de desindustrialización y dependencia al que fue sometido el país luego del golpe de 1955.

Sostenía que la independencia económica debía basarse en el control estatal de las finanzas, el comercio exterior, los recursos naturales y los servicios públicos. Además, se debía abandonar el modelo liberal diseñado para países periféricos, que generaba subordinación y desigualdad, y construir una doctrina propia basada en la justicia social.

En esta crítica al liberalismo, Cafiero pone en evidencia cómo la expansión del Imperio Británico fue justificada a través de una ideología económica que escondía intereses imperiales. Algo así como “patear la escalera”, pero ocultando los abusos



sobre las colonias y demás países. Por supuesto, él propone una alternativa con un modelo de desarrollo nacional orientado al bienestar colectivo.

Aborda, también una temprana visión sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que analiza críticamente ya en 1949, siendo agregado financiero en EE. UU. Recomendaba al país no ingresar al organismo hasta que no se modifique su sistema de toma de decisiones. Señala que el FMI favorecía a las potencias y que su política condicionaba la soberanía económica de los países.

Revelan una comprensión temprana de cómo los mecanismos financieros internacionales podían

condicionar la autonomía de los países en desarrollo. Esta postura hoy cobra vigencia cuando se observan las consecuencias que el endeudamiento externo vuelve a tener sobre las decisiones soberanas de nuestro país.

El autor muestra cómo Cafiero concebía al justicialismo, no solo como un simple movimiento político, sino como una filosofía humanista que debía orientar la acción pública combinando el cristianismo social con la justicia distributiva y la centralidad del trabajo.

Este humanismo cristiano, entendía al justicialismo como una tercera posición que colocaba al ser humano en el centro de la vida política y económica. El bien común debía ser la razón de ser de todos los actos de gobierno, defendiendo una sociedad organizada, solidaria y participativa.

En este primer capítulo aparecen distintos subtemas: el reconocimiento del rol del movimiento obrero como columna vertebral del poder nacional y de la justicia social, la defensa del desarrollo sustentable, su rechazo a la violencia política instando siempre al diálogo y la “lucha por la idea”; y su mirada geopolítica planteando la necesidad de una soberanía regional en Latinoamérica como forma de independencia, anticipando debates sobre la multipolaridad e integración.

Es decir, un teórico del nacionalismo económico y humanista político que construyó un pensamiento propio en defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la dignidad del trabajo.

En el capítulo II “El gobierno del pueblo: la praxis del estadista bonaerense” como dijimos traslada sus ideas al terreno de la acción, analiza la etapa como gobernador de la Provincia de Buenos Aires (1987 – 1991).

Asume la gobernación en un contexto complejo: crisis económica, hiperinflación, restricciones fiscales y un clima social de incertidumbre. Aun así,

se propuso un modelo de gestión participativa, descentralizada y con fuerte presencia del Estado provincial.

Uno de los ejes centrales fue la planificación estratégica, materializada en el Plan Trienal 1988 – 199 que buscaba reactivar la producción, promover el empleo y mejorar la calidad de vida. Apostaba, como marcaba su filosofía, por un Estado planificador con diagnósticos precisos y metas concretas.

Otro de los puntos fuertes fue su idea de democracia social abriendo el gobierno a la participación de sindicatos, empresarios, universidades y organizaciones con la creación del Consejo para la participación y el desarrollo como un ejemplo de diálogo institucional.

El libro detalla algunos programas sociales que combinan la acción estatal con participación vecinal y cooperativa para solucionar el déficit habitacional, baterías de políticas para combatir el desempleo y fomentar las pequeñas unidades productivas locales, también la creación del consejo provincial de la mujer y las primeras comisarías de la mujer, en un tiempo en el que la agenda de género todavía no forma parte del debate público. En el área de salud impulso una reforma sanitaria basada en la atención primaria y la prescripción de medicamentos genéricos para acercar el sistema de salud y reducir desigualdades.

En cuanto a su visión integral de desarrollo, la realización de obras hidráulicas de gran magnitud, el fortalecimiento de la autonomía energética y la creación de un polo tecnológico para articular universidades y producción.

Una muestra de su convicción democrática fue el intento de reformar la constitución para otorgar autonomía plena a los municipios, aunque este no prospero demuestra la idea de fortalecer las instituciones locales como una forma de acercar el gobierno al pueblo.

Hacia el final del libro se amplía la mirada latinoamericanista de Cafiero, que veía la unidad regional como condición de soberanía en el nuevo orden mundial. Desde su presidencia en la COPPPAL, impulsando la integración política y económica de países del sur, anticipando un pensamiento que hoy conserva vigencia.

En definitiva, el libro no es solo un repaso histórico sobre un dirigente, sino una forma de entender la

política combinando historia, pensamiento y acción invitando a reflexionar sobre la coherencia entre pensamiento y acción, una reivindicación del compromiso ético en la política y una invitación a pensar la Argentina desde sus propias ideas. Cafiero aparece como un ejemplo de que se puede hacer política con ideas, con convicciones y con vocación de país.

Bibliografía

Recalde, A. (2020). Antonio Cafiero el Estadista Bonaerense, Ediciones Fabro.